

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

11ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) —
MAYO 7 Y 8 DE 1997

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Marcelo Eduardo López Arias, Rafael Manuel Pascual
e Irma Roy

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALOVICH, Eduardo Antonio
ABAN, Gloria del S.
ABASTO, Angel Leónidas
ADAIME, Felipe Teófilo
ALARCIA, Martha Carmen
ALESSANDRO, Darío Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTERACHI, Miguel Angel
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl Angel
ALVAREZ GARCÍA, Normando Miguel
ALLENDE, Alfredo Estanislao
ARAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes M.
ARAMBURU, Guillermo Raúl
ARIAS, César
ATANASOF, Alfredo Néstor
ÁVILA, Eduardo Carlos
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BANZAS de MOREAU, María del C.
BARBERIS, Edgardo Angel
BARRIONUEVO, Eduardo Ernesto
BARRIOS, Luis Américo
BARRIOS ARRECHEA, Ricardo Alfredo
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge E.
BENZI, María Cristina de los Angeles
BIANCULLI, Leticia
BIZZOTTO, Ileana
BONINO, Miguel Angel
BORDA, Osvaldo
BORDENAVE, Marcela Antonia
BORDIN, Hugo Antonio
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
BRAVO, Alfredo Pedro
BRAVO, Leopoldo Alfredo
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl Adalberto
BULACIO, Rafael Alberto
BULLRICH, Patricia
CABALLERO MARTÍN, Carlos Aurelio
CAFFERATA NORES, José Ignacio

CAFIERO, Juan Pablo
CAILLET, Carmen del Rosario
CALLABA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Angel
CAMBARERI, Fortunato Rafael
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARDOSO, Marta Elena
CARJARA, Emilio Eduardo
CARRÍO, Elisa María Ayelina
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS de MARÍN, Fani Azucena
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CRUCHAGA, Melchor René
CHICA, Juan José
DAS NEVES, Mario
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lilian del Carmen
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ LOZANO, Julio Cesar
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DOMINA, Esteban Alberto
DOMÍNGUEZ, Dolores Carmen
DOMÍNGUEZ, Lorenzo Sebastián
DOMSIC, Lidia D.
DRAGICEVIC, Carmen Nilda
DRISALDI, María Rita
DUMON, José Gabriel
ESCALANTE ORTIZ, Herminia Elsa
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
ESTRADA, Arnaldo D.
FADEL, Mario Nalib
FABRISIN, Carlos Alberto
FAYAD, Víctor Manuel Federico
FERNÁNDEZ, Alberto Manuel
FERNÁNDEZ de COMBES, Elsa A.
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GABRIELLI, Rodolfo Federico
GALMARINI, Fernando Nicolás
GARAY, Nicolás Alfredo

GARRÉ, Nilda Cella
GATTI, Héctor Angel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIANNI, Gloria María Cristina
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GODOY, Norma
GOLLY, Eduardo Ceferino
GOLPE, Carlos Horacio
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ, María Luisa
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
GONI, María Virginia
GORINI, Floreal Edmundo
GRANADOS, Dulce
GUDIÑO, Ermelinda Amalia
GUEVARA, Cristina
GUTIERREZ, Diana Bárbara
GUTIERREZ, Gustavo Eduardo
HAQUIM, Carlos Guillermo
HERRERA, Alberto
HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
ILLIA, Martín Arturo
IRAZABAL, Liliana María del Carn
ISEQUILLA, Amalia
JAUNARENA, José Horacio
JOGA, Vicente Bienvenido
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
LAFFERRIERE, Ricardo Emilio
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LENCE, Héctor
LIPONEZKY de AMAVET, Sara G
LÓPEZ, Elsa Isabel
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
MACEDO, Horacio Antonio
MAQUEDA, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl
MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel Alberto
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MAURETTE, Fernando Wenceslao
MELOGNO, Elsa
MENEM, Carlos Omar

MERCADER, Martha Evelina
 MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
 MIGLIOZZI, Julio Alberto
 MIRALLES de ROMERO, Norma Amelia
 MONDELO, Lidia Elizabeth
 MONDINO, Eduardo René
 MONTIEL, Sergio Alberto
 MORELO, Emilio Pedro
 MOSSELLO de BENZO, María del C.
 MÜLLER, Mabel Hilda
 MURIEL, Néstor Jorge
 MUSA, Laura Cristina
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 OBARRIO, Luis Manuel
 OCAMPOS, Jorge Armando
 OLIMA, Juan Carlos
 PANDO, Ana María
 PARENTELLA, Irma Fidela
 PARRA, Nélida Carmen
 PASQUAL, Rafael Manuel
 PASQUALINI de ACOSTA, Elida del V.
 PASSO, Juan Carlos
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 FELÁEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PEREYRA de MONTENEGRO, María G.
 PEREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio Francisco
 PERRINI, Gioconda Eulalia
 PEZOA, Juan Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRE, Alberto Edoardo
 PIRÓN AVILA, Celia Isabel
 PIRIZ, Juan Carlos
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRUYAS, Tomás Rubén
 RAIMUNDE, Carlos Alberto
 RAMPI, Pascual Ángel
 RANERO, Lón E.

RICO, Aldo
 RIVADERA, Marta Lilliana
 ROBLES, Miguel Ángel Ernesto
 RODRÍ, Rodolfo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJO, Rubén Darío
 ROLLANO, Eduardo Daniel
 ROY, Wma
 RUBIO, Luis
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUIZ PALACIOS, José David Alberto
 SALIM, Fernando Omar
 SALINO, María Antonia
 SALTO, Julio Francisco José
 SAMPIETRO, Darci
 SANCHEZ, Mary
 SANTANDER, Mario Armando
 SARQUIZ, José Alberto
 SAT, Oscar
 SCRIMIZZI, Gloria Hilda
 SCHIARETTI, Juan
 SEBASTIANI, Claudio Augusto
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA, Edmundo del Valle
 SPERATTI, Alfredo Ramiro
 STORANI, Federico Teobaldo Manuel
 STUBBIN, Marcelo Juan Alberto
 SUÁREZ, Juan Carlos
 TAGLIAPICO, José A.
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TOGNI de VELV, Adriana Leonor
 TOLOMEU, Leonor Ester
 TOMA, Miguel Ángel
 TRETTIEL MEYER, Raúl
 TULLIO, Rosa Ester
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENSSENTINI, Marcelo Edmundo
 VERAMENDI, Juan Carlos
 VIANA, Mariano Roberto

VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Attilio Oscar
 VILCHE, Carlos Alberto
 VILLALBA, Alfredo Horacio
 VIQUEIRA, Horacio Gustavo
 VITAR, José Alberto
 ZAVALIA, José Luis
 ZUCCARDI, Cristina

AUSENTE, EN MISIÓN OFICIAL:

GALANTE, Pedro Jorge Roque

AUSENTES, CON LICENCIA:

KESSLER, Ana Raquel
 LLOPIS, Enrique Raúl

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

BONOMI, Silvia Mónica
 CABIRON, Juan Carlos
 CAECA, Elisa Beatriz
 DUFOU, Pedro Alfredo
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 MACHADO, Oscar Alfredo
 ROBERTI, Raquel Griselda
 SAGGESE, Néstor Mario

AUSENTES, CON AVISO:

ACEVEDO, Sergio Edgardo
 BRITOS, Oraldo Norvel
 CARBAJAL, Arnoldo Dante
 GUZMAN, María Cristina
 MARTÍNEZ, Esteban
 MOTHE, Félix Arturo
 PARAJÓN, José María

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la Sesión Preparatoria (43ª reunión), de fecha 29 de noviembre de 1993.

SUMARIO

1. Moción del señor diputado Matzkin de reconsideración de la moción de orden de cierre de debate formulada el 29 de abril pasado. Se aprueba. (Página 1520.)
2. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda y de Vivienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (50-P.E.-93). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 1521.)
3. Apéndice:
 - A. Asistencia de los señores diputados a las reuniones de comisiones (mes de abril de 1997). (Pág. 1587.)

1

MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

La Presidencia informa que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó que los bloques dispondrán de un tiempo determinado para referirse a los dictámenes sobre creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, cuya consideración corresponde continuar. En ese sentido se fijó una hora para cada uno de los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frepaso y de los partidos provinciales, además de diez minutos al señor diputado Olima. Por lo tanto estimamos que a las 20 y 30 horas se votará en general la iniciativa que nos ocupa.

Sin embargo, previamente corresponde modificar lo establecido en la sesión anterior a los efectos del uso de la palabra; de modo que para

— En Buenos Aires, a los siete días del mes de mayo de 1997, a la hora 17 y 14:

formular la pertinente moción de reconsideración tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: tal como lo acaba de explicar, solicito la reconsideración de la moción de orden de cierre de debate respecto la lista de oradores, aprobada en la sesión anterior, con la finalidad de abrir nuevamente la nómina de diputados a intervenir en el debate.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por La Pampa en el entendimiento de que el pronunciamiento favorable importará dejar sin efecto la moción de cierre de debate planteada originariamente.

Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sin efecto la moción de cierre de debate.

2

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL
DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración en general de los dictámenes de las comisiones de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda y de Vivienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (expediente 50-P. E.-96).¹

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: durante el tratamiento de este asunto iniciado en la sesión de la semana pasada nuestra bancada fue una de las que señaló que un proyecto de esta importancia necesitaba ser debatido con la presencia del más amplio número de legisladores y de los diferentes partidos políticos de la oposición.

De tal manera celebramos que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de la fecha se haya posibilitado arribar a este acuerdo, que permite que la mayoría de las fuerzas políticas representadas en este Parlamento puedan emitir su opinión.

Yendo al fondo de la cuestión me veo obligado a recordar que durante todo el período en que se trataron las privatizaciones anteriores a ésta, el discurso que se sustentaba era que el Estado no tenía capacidad de gestión, que las instituciones nacionales o provinciales no eran eficientes y que, en consecuencia, había que trasladar esa gestión del sector público al privado. También cabe recordar que hace apenas poco menos de cuarenta y cinco días, cuando desde el sector empresarial privado se reclamó la privatización del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no hubo legislador de las distintas bancadas que no haya señalado que esa privatización era altamente inconveniente.

Digo esto porque francamente no sé con qué discursos o argumentos se puede defender hoy la privatización del Banco Hipotecario Nacional, que es eficiente en su gestión y eficaz en sus objetivos. Considero que es eficiente en su gestión porque así lo demuestran objetivamente los números, y eficaz en sus objetivos porque esta institución fue creada con la intención de que el sector más humilde de la sociedad argentina tuviera acceso a las líneas de crédito necesarias para poder contar con su vivienda propia.

Nadie puede discutir que en la actualidad el Banco Hipotecario Nacional está cumpliendo adecuadamente ese rol, a pesar de que tuvo etapas de mala administración. Esto significa que la buena o mala gestión del Banco no está vinculada con el hecho de que esté en poder de manos privadas o estatales.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio y escuchen al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Decía que no llegamos a entender con qué argumentos se va a defender esta privatización. Por lo dicho, reiterando la posición que fijáramos en comisión, en nombre del bloque PAIS adelantamos nuestro pronunciamiento negativo respecto de la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

De todas maneras también cabe señalar que no alcanza oponerse si no se presentan propuestas alternativas. En este sentido nuestro bloque presentó una iniciativa en el mes de septiembre del año pasado que se denominó FFEPa —Fondo de Financiamiento para el Empleo Productivo Argentino— y que fue incluida como dictamen de minoría cuando se resolvió el tema.

¹ Véase el texto de los dictámenes en el Diario de Sesiones del 29 de abril de 1997. (Pág. 1465.)

Dicho dictamen prevé la aplicación de los fondos que sean producto de las privatizaciones que el Poder Ejecutivo nacional disponga y de las acciones remanentes que estén en su poder.

Lamentamos no haber tenido nunca la oportunidad de discutir este proyecto, aun cuando distintos legisladores de diferentes bancadas nos han dicho, a título personal, que consideran que es un buen trabajo para orientar los fondos.

Lo que concretamente quiero plantear, si es que existe la decisión mayoritaria de privatizar el Banco Hipotecario Nacional —en lo que, insisto, no estamos de acuerdo—, lo menos que podemos hacer es lograr que los fondos obtenidos tengan absoluta transparencia y eficiencia en su aplicación.

Lo que estamos proponiendo es que el proyecto del Poder Ejecutivo —en caso de contar con apoyo mayoritario— tenga la sabiduría de recoger una serie de disposiciones de nuestra iniciativa que hacen que todo este proceso sea infinitamente más eficiente.

En primer término señalo esto desde el punto de vista de la generación efectiva de puestos de trabajo, dado que apuntamos a la creación de más de dos millones de puestos de trabajo.

En segundo lugar hago referencia al ámbito federal de su administración por cuanto la totalidad de los bienes serían administrados por un consejo de gobernadores y no en la forma que se propone, con sólo siete miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo.

En tercer término quiero señalar que este proyecto prevé que las propuestas de obras sociales a desarrollar deben ser elevadas por los consejos municipales, que no es lo mismo que los ámbitos de debate legislativo a nivel municipio. En cada zona la gente debe expresar cuáles son las necesidades más urgentes que tiene. Nadie mejor que la propia gente para saber cuáles son sus necesidades. De manera tal que hay que dejar que el pueblo decida cuáles son las obras prioritarias y establezca dónde se necesita educación, dónde salud y dónde vivienda económica.

Durante el transcurso del debate iremos planteando nuestras objeciones y reflexiones sobre los artículos en particular, pero quiero cerrar esta corta intervención que corresponde al bloque PAIS reiterando nuestra oposición a que se privatice el Banco Hipotecario Nacional, porque cumple en forma eficiente y eficaz con su cometido.

Por otra parte, si la decisión mayoritaria de esta Cámara fuera la de privatizar el Banco Hi-

potecario Nacional, quisiéramos que se analizara prolijamente la forma de administración de los fondos, de modo tal de dar participación a la gente.

Por último, para que haya una real transparencia en su aplicación, proponemos que los fondos sean fiscalizados y dirigidos por un consejo de gobernadores.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Trettel Meyer. — Señor presidente: recordamos el tratamiento del Orden del Día N° 1462, que contiene un dictamen espurio y antirreglamentario. Ni siquiera conocemos el texto final de esta iniciativa, habida cuenta de las modificaciones, sustituciones y agregados que fue sufriendo el proyecto original.

No obstante estas graves irregularidades, señaladas en su momento por la prepotencia que echó por tierra fundamentales principios de convivencia democrática, saludamos el reencauzamiento de la sesión con la participación de todos los bloques, dejando sin efecto la moción mordaza con la que se pretendía silenciar a las minorías.

Se hace necesario efectuar un rápido encuadramiento del tema. El objeto de este proyecto está contenido en el punto 1° de los fundamentos del dictamen de mayoría, ratificados en la exposición del señor miembro informante del bloque oficialista en la noche negra del Congreso de la Nación.

El informe dice textualmente: "A diferencia de las demás privatizaciones efectuadas hasta ahora, donde el producido se aplicó al pago de la deuda externa, y a absorber déficit fiscal y del sistema previsional, en este caso el patrimonio se mantiene íntegro dentro del Estado constituyendo el Fondo Fiduciario Federal para la Infraestructura Regional y la Generación de Empleo."

El fin perseguido es noble y loable pero el argumento es mendaz y el articulado del proyecto conlleva inexorablemente a la destrucción del Estado de derecho. Compartimos el fin de fortalecer las economías regionales y generar empleo, pero no estamos de acuerdo con el medio que se pretende utilizar para satisfacer estas marcadas necesidades por ser inconstitucional.

Parafraseando los fundamentos y sintetizando los contenidos del articulado del proyecto podemos sostener que el Banco Hipotecario Nacional se privatiza en los términos de la ley 23.696, transformándose en el Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima, pasando sus acciones

o el producido de la venta de las mismas a integrar el patrimonio del Fondo Fiduciario Federal, que tiene por objeto financiar obras de infraestructura económico-social en las provincias y en el Estado nacional. Pero lo que no dicen los fundamentos de dictamen ni el mensaje del Poder Ejecutivo —aunque sí lo mantiene expresamente el artículo 4º *in fine*— es que el Fondo tendrá carácter extrapresupuestario.

Volvamos por un instante a los términos del mensaje que acompaña el dictamen de mayoría, que fueron repetidos por el señor miembro informante, que expresa *contrario sensu* que el producido de esta privatización no será afectado al pago de la deuda externa ni a cubrir el déficit fiscal ni la deuda previsional. En una palabra, se pretende eludir el pago de compromisos de la Nación. Pregunto entonces: ¿saben esto los jubilados, a quienes se les adeudan importantes sumas en concepto de reajuste? ¿Saben esto las corporaciones financieras nacionales e internacionales?

Así estamos generando más inseguridad jurídica y, de tal forma, desalentando inversiones que el país necesita. Los argentinos queremos honrar la deuda: no somos tramposos, pero al propio tiempo sostenemos con todo énfasis que no aceptamos las condiciones que se nos pretenden imponer y que están llevando a la desocupación, al hambre y a la desesperación al pueblo argentino.

El Fondo Fiduciario creado por el artículo 3º tiene por objeto asistir a la Nación y a las provincias en la financiación de obras de infraestructura económica y social, además de tener —por disposición del artículo 4º—, carácter extrapresupuestario. Ahora bien, el prefijo latino “extra” significa “fuera de”. En otras palabras, el Fondo, cuyo patrimonio se integra —según el artículo 7º—, con las acciones del Banco Hipotecario Nacional o el producido de su venta y con los recursos que le asigne el Estado nacional o las provincias, es decir, dineros o recursos de origen público, no ingresa al Tesoro ni al presupuesto nacional.

Consecuentemente, los gastos e inversiones tampoco serán fijados anualmente por el Congreso de la Nación sino por siete personas que integran el Consejo de la Administración —artículo 5º—, designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del jefe de Gabinete.

Se desconoce entonces el principio jurídico *potestas delegare non delegare potestas*, es decir, las potestades o atribuciones delegadas por el poder constituyente al Congreso de la Nación no pueden ser delegadas al Poder Ejecutivo; ni

mucho menos éste, a su vez, a un grupo de particulares sin jerarquía constitucional. Se conculcan y vulneran así atribuciones propias e indelegables del Congreso de la Nación contenidas en el inciso 8º del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Analizando el agregado —no sé si será tal—, que se incorpora al final del artículo 3º, nos encontramos cuanto menos frente a normas antitéticas que no resultan armonizables y que demuestran que estamos en presencia de un desaguisado descomunal que, cualquiera sea su interpretación y explicación, llevan inexorablemente a la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en el dictamen de mayoría.

El agregado propuesto dice así: “Facúltase al jefe de Gabinete a disponer reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional del año 1997, para incorporar los recursos provenientes del fondo y los gastos designados a las obras correspondientes.”

Entonces me pregunto: ¿el fondo es presupuestario o extrapresupuestario? La facultad de disponer la reestructuración presupuestaria en el presupuesto significa la modificación del presupuesto; atribución que corresponde al Congreso. El presupuesto anual surge de una ley del Congreso de la Nación, que no puede ser modificada mediante una delegación legislativa por el Poder Ejecutivo, sino mediante otra ley.

Estamos en presencia de una doble inconstitucionalidad. Por un lado una delegación legislativa para modificar la ley de presupuesto, cuya prohibición surge del artículo 76 de la Constitución Nacional. Por otra parte se vulneran y conculcan atribuciones propias e indelegables del Congreso de la Nación de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional sobre la base del programa general de gobierno y del plan de inversiones públicas contenido en el inciso 8º del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Así como es de la esencia misma del gobierno representativo y republicano que el Congreso sea el poder de la Nación con atribuciones para crear recursos —en este caso, provenientes de la venta del Banco Hipotecario Nacional—, lo es también que este Parlamento tenga la exclusiva atribución de fijar los gastos e inversiones de este recurso por el origen público de los dineros que constituirán el fondo. Pero no en la forma inconstitucional como ha sido planteado: es decir, como un listado indicativo de obras a ejecutar, contenido en el anexo del proyecto, que se asemeja más a una plataforma electoral que a

un plan de inversiones públicas, donde las obras deben ser específicamente descritas y los gastos concretamente asignados, disponiéndose además la unidad ejecutora y el responsable de ellos.

El agregado final al artículo 8º es el disfraz que no alcanza a tapar la cola al diablo.

Sr. Presidente (Pierri). — Si me permite, señor diputado, la Presidencia le informa que restan cuatro minutos del término del que dispone para hacer uso de la palabra, y que son cuatro los señores diputados de su bloque que se hallan anotados como oradores.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Trettel Meyer. — Señor presidente: si el Fondo Fiduciario, siempre limitado por el tiempo, tiene carácter extrapresupuestario y permanente —según surge del capítulo II—, el agregado que se pretende incorporar en la parte final del artículo 8º contiene una delegación transitoria ya que se faculta al jefe de Gabinete a disponer la rectificación presupuestaria sólo para el ejercicio 1997. Es lógico diagnosticar que si este año el jefe de Gabinete produce una modificación presupuestaria, el próximo año el Fondo Fiduciario recobrará en forma permanente carácter extrapresupuestario, adquiriendo en consecuencia una total autonomía en ese sentido. Así habrá un Estado paralelo con vida propia, con lo que se constituirá una verdadera clonación de la Nación.

No puedo dejar de manifestar que nuevamente estamos frente a una mordaza respecto de lo mucho que tenemos que decir. Por lo tanto, a efectos de que puedan hacer uso de la palabra mis compañeros de bloque, iré terminando mi exposición.

A las inconstitucionalidades que he denunciado —violación de los artículos 1º; 31; 75, inciso 8; 76; 85; 99, segundo y tercer párrafo de su inciso 3, e inciso 10; 100, inciso 7; 121 y 122 de la Constitución Nacional—, todas ellas violaciones autónomas e independientes a la Carta Magna de los argentinos, se deben sumar las ilegalidades —respecto de las cuales solicito su inserción en el Diario de Sesiones—, que crean un verdadero caos en el control de las cuentas del sector público en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Lo que es más grave aún es que mediante el inciso c) del artículo 9º se federaliza el descontrol, pues allí se dice lo siguiente: "En cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial, ni de

ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operativa y funcional."

En su obra *Derecho Constitucional Argentino*, tomo III, editado en el año 1981, el doctor González Calderón dice lo siguiente: "Porque en un sistema de gobierno representativo y libre no se concibe que el Poder Ejecutivo pueda gastar las rentas nacionales o invertirlas a su capricho sin autorización alguna de los representantes directos del pueblo, que provee las fuentes de donde dimanar aquéllas.

"Tal procedimiento sería inconciliable en todo sentido con la libertad civil y política de los ciudadanos y habitantes del país y constituiría la forma más omnípota de la dictadura."

He dado lectura de estos párrafos porque su contenido está vigente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical no queremos institucionalizar una dictadura en la Argentina, como aconteció en la Alemania nazi y en la Italia fascista.

Por lo expuesto formulo moción de orden para que los dictámenes contenidos en el Orden del Día Nº 1462 vuelvan a comisión y que se amplíe su giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales en razón de las gravísimas inconstitucionalidades e ilegalidades que acabo de puntualizar. Adelantamos que en caso de que esta moción sea rechazada votaremos negativamente en general el proyecto contenido en el dictamen de mayoría, dado el tratamiento tan irregular del que es objeto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Trettel Meyer. — Si me permite, señor presidente, he formulado moción de orden en razón de las graves inconstitucionalidades que contiene el dictamen de mayoría. Lo que pedimos es que el asunto vuelva a comisión...

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia lo ha entendido, señor diputado.

Sr. Trettel Meyer. — ... y que se amplíe su giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al señor diputado que se ha establecido un horario de votación, y en este momento no tenemos número para votar. Cuando se llegue a la hora mencionada, la primera moción que será considerada será la formulada por el señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: llegamos a este debate serenos pero preocupados por el tema que vamos a tratar, sobre todo teniendo en cuenta que no existió la posibilidad de un debate

profundo sobre este proyecto originado en el Poder Ejecutivo, que no incluía rubros como la situación de los adjudicatarios de diversas operatorias del Banco Hipotecario Nacional.

Nuestro planteo inicial, que fue compartido por otros bloques, era considerar una ley especial que contemplara la situación de los adjudicatarios que, en un número aproximado de 75 mil, atraviesan dificultades e injusticias porque los mecanismos de actualización, las capitalizaciones, la manera de distribuir las cuotas y de asignar su monto los ha ubicado en inferioridad de condiciones respecto de cualquier otro crédito hipotecario que se tome hoy en el mercado.

La norma, que a nuestro entender debía ser instrumentada por una ley especial, se basaba en la meticulosidad, la profundidad y la complejidad del tema en cuestión. En ese sentido se venía avanzando bien con el análisis de proyectos que formuláramos oportunamente. Pero esas posibilidades se frustraron porque sólo se tomaron algunas ideas de los proyectos alternativos, incluyéndose un capítulo especial en la ley de privatización del Banco Hipotecario Nacional donde, como he señalado, se contemplan parcialmente algunas inquietudes presentadas en los distintos proyectos.

El dictamen que estamos considerando tiene tres aspectos que deben ser señalados, con la intención de producir un mejoramiento de la norma. Más allá de las objeciones de índole constitucional y legal formuladas acertadamente por el señor diputado Trettel Meyer, queremos desmenuzar estos aspectos del dictamen, al que por otra parte se le introducirán nuevas modificaciones. Esto habla de la ligereza con la que se llegó al dictamen presentado por la mayoría.

Uno de los aspectos es la creación de un fondo fiduciario; el otro se refiere a la privatización del Banco Hipotecario Nacional, y el tercero es la situación en que van a quedar los adjudicatarios a quienes se ha utilizado a modo de rehenes; y esta expresión no es un exceso verbal porque se los incluye con supuestas soluciones que en definitiva, como lo demostraremos durante el tratamiento en particular, no serán tales.

Pero se me ocurre poner el énfasis en cómo se ha ido al país, al Estado y al gobierno en lo que respecta a la creación o utilización de los denominados "fondos fiduciarios" durante el período de este gobierno. En ese sentido, debemos realizar un breve análisis de los distintos fondos fiduciarios que se han instituido y con los que, en forma engañosa, algunos gobernadores piensan que obtendrán beneficios.

A tal respecto vamos a demostrar que efectivamente no será así.

Uno de los antecedentes existentes en relación con los fondos fiduciarios es el relativo al desarrollo provincial, implementado mediante el decreto 286/95 y ratificado a través de la ley 24.623, cuyo objeto era constituir este fondo para financiar procesos de privatización y auxilio a los bancos provinciales. Asimismo esta norma alteró el plazo de dos años originalmente fijado.

El Fondo para el Desarrollo Provincial —como se lo denominó en aquel momento—, no sólo comprometía financieramente a las provincias por el otorgamiento de créditos blandos sino que su plazo original de dos años se extendió a quince en virtud de lo establecido en la ley, 24.623.

La ley 24.623 asignó al Fondo para el Desarrollo Provincial la totalidad de las acciones de YPF, cuya conducción podía disponer, caucionar, gravar o dar en garantía. En aquel momento el Estado nacional tenía en su poder 70.599.000 acciones cuya cotización al día de ayer —según lo indica el diario "Ambito Financiero", fue de 28,05 pesos. Ello significa que 1.979 millones de pesos quedaron a disposición de un consejo de administración creado a la sombra del Poder Ejecutivo nacional.

En la ley 24.485 —al igual que en el proyecto que se encuentra a consideración de la Honorable Cámara— se establece en el artículo 7º que debían constituirse comisiones de seguimiento sobre el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y también en relación con el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria; sin embargo, en ninguno de los dos casos esas comisiones fueron conformadas a pesar de que la propia ley establecía que este acto debía cumplirse en un plazo que no excediera los treinta días corridos a partir de su sanción. Por este motivo ambos fondos siguen siendo manejados discrecionalmente por sus conducciones, que dependen directamente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Como dije anteriormente, el plazo originalmente asignado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue prorrogado hasta quince años; sin embargo, según lo publicado en el Boletín Oficial del día de ayer, mediante el decreto 298/97 —referido al Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial—, se extiende hasta el 26 de febrero del año 2000 y al mismo tiempo se faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a trans-

ferir recursos entre esos entes en la medida en que sus necesidades operativas así lo exijan.

A todo esto cuando se trató el proyecto de ley que incrementó en tres puntos la tasa del impuesto al valor agregado surgió la inquietud en muchos señores diputados en el sentido de que ese aumento se sustraía de la coparticipación durante un año, con lo que las provincias iban a perder sumas muy significativas, y el gobierno nacional tenía la ventaja de crear un fondo de equilibrio fiscal para atender sus cuentas.

Cuando desde la oposición se hicieron reparos sobre la falta de coparticipación de esos tres puntos, se dijo que se iba a establecer —lo que efectivamente se concretó mediante el artículo 4º de la ley 24.468— un aporte del Tesoro nacional de 1.200 millones de pesos, que tendrían el carácter de no reintegrables y que se distribuirían entre las provincias según el índice de coparticipación.

Ninguna provincia accedió a los 1.200 millones de pesos que asignaba el artículo 4º. Hubo iniciativas legislativas a los fines de que esos fondos pasaran a integrar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a fin de aliviar los niveles de endeudamiento provincial.

Se solicitaron seis preferencias de tratamiento, las que no fueron escuchadas por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que el tema no ha sido considerado hasta la fecha.

En virtud de que el espíritu se puede llegar a compartir, dado que son innumerables las obras necesarias en el interior del país, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó una iniciativa contenida en el expediente número 2.144-D-97, a fin de asignar los recursos establecidos por el artículo 4º de la ley 24.468.

No se trata de números menores, por lo que me voy a permitir leer lo que significaría esa distribución de fondos para cada una de las provincias argentinas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ella tendría derecho a acceder a nada más y nada menos que 239 millones de pesos con carácter de no reintegrables: a Catamarca corresponderían 34 millones; a Córdoba 110 millones; a Corrientes 46 millones; al Chaco 62 millones; a Chubut 16 millones; a Entre Ríos 60 millones; a Formosa 45 millones; a Jujuy 35 millones; a La Pampa 23 millones; a La Rioja 25 millones; a Mendoza 51 millones; a Misiones 41 millones; a Neuquén 18 millones; a Río Negro 31 millones; a Salta 47 millones; a San Juan 42 millones; a San Luis 28 millones; a Santa Cruz

16 millones; a Santa Fe 111 millones; a Santiago del Estero 51 millones, y a Tucumán 59 millones.

Esta iniciativa fue presentada como una vía distinta a la del denominado Fondo Fiduciario para la Realización de Obras de Infraestructura y Generación de Empleo, un nombre por demás rebuscado que en definitiva no representa nada más y nada menos que la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

En el entendimiento de que a los señores legisladores les preocupa tanto como a los señores gobernadores el ingreso de fondos frescos, insistimos en el tratamiento de este proyecto de ley que, teniendo en cuenta que existen prioridades en las provincias y en la Nación, asigna con carácter no reintegrable y de modo específico a cada provincia los montos que mencioné, a los que desde luego habría que agregar los índices de participación correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego.

Esta iniciativa propone que se asigne el 30 por ciento para su utilización específica en educación, lo que daría viabilidad a los reclamos de fondos que están realizando todas las provincias con el objeto de implementar la Ley Federal de Educación. Este proyecto alternativo presentado por la bancada de la Unión Cívica Radical asigna otro 30 por ciento para la salud y un 20 por ciento para los programas de lucha contra el desempleo en cada una de las provincias. Finalmente destinamos un 20 por ciento para la promoción del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, esta propuesta no fue escuchada y ni siquiera es tenida en cuenta en esta sesión. El radicalismo ha presentado alternativas, demostrando que este Fondo tiene exactamente las mismas falencias que los que describí con anterioridad, e incluso algo más. Afirmino esto porque su confusa redacción motiva dos actitudes: una es la admiración por el ingenio del Poder Ejecutivo nacional para la redacción de ciertas normativas; pero por otro lado el demostrado incumplimiento de las leyes por parte de esta administración nos lleva a pensar en la ingenuidad de los señores gobernadores y algunos legisladores que creen que de este modo llegarán fondos frescos a los gobiernos provinciales. Al respecto se puede citar como ejemplo el artículo 8º, que se refiere a la composición del Fondo, y que en su primer párrafo dice así: "El patrimonio del Fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales."

Se calcula que el precio de venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional sería de alrededor de 2 mil millones de pesos. Una vez efectuado el recálculo de las viviendas, según lo establece la propia norma, de esa cifra se sustraerán 100 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura y la atención de problemas sociales en las provincias más necesitadas. Con seguridad tendrán el mismo destino que los ATN del presupuesto nacional: irán a parar a la provincia del presidente. Pero esto no es todo: efectuado este descuento, la norma establece que de los fondos resultantes se destinará el 50 por ciento a la financiación de proyectos propuestos por la Nación.

Vale decir que de arranque se sustrae el 50 por ciento de los 1.900 millones, o sea 950 millones de pesos.

Si nos atenemos a la redacción que se propicia advertiremos que ella dice "y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias". Lo llamativo es que no alude al otro 50 por ciento, pero voy a explicar por qué razón. En realidad el otro 50 por ciento no es tal porque la normativa también dispone que con esos fondos restantes se deberá cubrir la deuda que tiene el Banco Hipotecario Nacional con el Banco Central, que no se encuentra determinada en ningún artículo de esta iniciativa. En este sentido hubiera sido convenientes que, así como el presidente del Banco Hipotecario Nacional asistió a la sesión anterior, también concurriera a ésta para esclarecer cuánto le adeudaba la institución que preside al Banco Central, dado que las cifras que se citan orillan los 550 millones de pesos, que se obtendrían no de la totalidad de este Fondo sino de lo que en la norma se indica como restante, es decir, los 950 millones de pesos señalados, de modo que sólo quedarían 400 millones para distribuir entre las provincias.

Es del caso señalar que allí no termina esta cuestión porque la iniciativa también establece la creación de una partida especial para capitalizar al Banco de la Nación Argentina, que se inicia con 100 millones de pesos y deberá llegar a los 200 millones. Vale decir que al monto precedentemente señalado habrá que restarle otros 200 millones, de manera que en definitiva quedarán para repartir a las provincias escasos 200 millones de pesos.

También llaman la atención las obras que se sugiere que se van a construir con estos fondos —de acuerdo con el anexo indicativo— en cada una de las provincias. Así, por ejemplo, se enuncia la construcción o mejora de la infraestructura

vial provincial incluyendo las obras de arte necesarias, cuando se ha privatizado la ruta más importante del país. ¿Por qué no se sigue utilizando, como en otros países, el método de que quienes construyen la carretera con inversión propia y a riesgo después resulten concesionarios de la explotación? Nada de eso ocurre en este caso.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Fayad. — Esta iniciativa también alude a vías de comunicación rápida, autopistas, puentes sobre carreteras y a obras de generación y transporte de energía eléctrica. Es decir que se apoya un sector que se encuentra desregulado y privatizado desde hace años. Pero allí no termina lo absurdo de esta normativa, porque otro de los rubros donde se aconseja la inversión se vincula con la construcción, mejoramiento o adecuación de la infraestructura ferroviaria, cuando no queda un solo ferrocarril en manos del Estado.

Con bondad intelectual y generosidad política uno quisiera señalar la buena intención de este proyecto de ley, pero en realidad él no proveerá financiamiento para obras de infraestructura en el país.

Tengo sobre mi banca dos recortes periodísticos sumamente significativos. Uno de ellos es una publicación aparecida en la sección "Economía del diario "Clarín" del viernes 18 de abril de 1997. Dicha nota señalaba que el Eximbank japonés y el Banco Mundial van a otorgar créditos al país por 1.870 millones de dólares destinados a obras de infraestructura que se asignarán principalmente a Vialidad Nacional para la concreción de caminos y a otras líneas de créditos para paliar inundaciones y atender recursos naturales y seguridad social. Pero la infraestructura de obras no es lo más importante que hay que atender sino la situación de apremio en el campo de la salud que viven miles de millones de argentinos.

La otra publicación apareció en la sección "Economía & Negocios" del diario "La Nación" del viernes 14 de marzo del corriente año, en donde se señalaba que el gobierno otorgará por medio de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial un megapréstamo de 800 millones de dólares, entre mayo y junio para armar una red social.

Por eso no comprendemos cómo se desarrolló la última sesión de esta Cámara y por qué se actuó con toda necedad. Existe una opo-

sición responsable que quiso efectuar aportes en las comisiones, y así el justicialismo precipitó injustificada e infundadamente el tratamiento de esta iniciativa emitiendo un dictamen con serias objeciones. En este sentido quedó demostrado que el Fondo Fiduciario no va a llegar a las provincias. La Unión Cívica Radical propuso como alternativa la distribución racional de 1.200 millones de pesos que la Nación debe a las provincias. Desde luego allí se especificaba a qué rubros se debían asignar los fondos para evitar el despilfarro y asegurar que sean utilizados responsablemente. Sin embargo, se persiste en la aprobación de una iniciativa que presenta dificultades no sólo de forma sino también de fondo.

Hasta aquí he señalado las objeciones más importantes; luego, durante la discusión en particular, me referiré a aquellas que son extremadamente serias. No se nos puede imputar irresponsabilidad como partido de la oposición puesto que hemos realizado el mayor de los esfuerzos por tratar de mantener una institución como el Banco Hipotecario Nacional, que no sólo no da pérdidas sino que arroja ganancias, actúa como regulador en el mercado de los créditos hipotecarios manejando un segmento aproximado del 37 por ciento, ha construido millones de viviendas en la Argentina, ha otorgado más de 165 mil créditos que están vigentes y tiene más de 290 operaciones en funcionamiento para adjudicar más de 1.200 millones de pesos para la construcción de viviendas. Se pretende crear un Fondo Fiduciario que escape al control de todos los organismos constitucionales y legales y que va a quedar sujeto al arbitrio de un comité que se dirigirá directamente desde la Jefatura de Gabinete.

Por otra parte, advierto que hay dos o tres artículos que seguramente no han sido leídos ni analizados con detenimiento por los señores legisladores del partido gobernante porque, de haberlo sido, hubieran originado importantísimos reparos.

En el artículo 10 no sólo se faculta sino que se ordena al Poder Ejecutivo a invertir transitoriamente los fondos en bienes de fácil realización y bajo riesgo.

Sr. Presidente (López Arias). — Debo recordar al señor diputado que a su bloque sólo le restan 15 minutos del tiempo preestablecido. Hago este comentario para que pueda compartirlo con el resto de los miembros de su bancada que van a hacer uso de la palabra.

Sr. Fayad. — Voy a redondear mi exposición, señor presidente, pero me parece sumamente

importante que los miembros de esta Cámara adviertan nuestro punto de vista sobre la peligrosidad de algunos artículos.

Puntualmente me estaba refiriendo al artículo 10, que no faculta sino que ordena al Poder Ejecutivo —hasta tanto sean distribuidas o vendidas las acciones también queda librado a la discrecionalidad del Ejecutivo cuándo, cómo y de qué forma se van a vender— a invertir transitoriamente en bienes de fácil realización y bajo riesgo. Esta es una normativa que ya tenía la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional y que durante la presidencia de la señora Adelina Dalesio de Viola se utilizó mal cuando se compraron los denominados bonos *bullshit*, cuya cobrabilidad no se garantizaba de ninguna manera.

Se utilizaron más de 180 millones de dólares en bonos de alto riesgo, que en definitiva terminó cubriendo por medio de una pésima operación el Banco Hipotecario Nacional.

Pero ahí no termina todo. En el artículo 37 se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a utilizar las acciones, hasta que sean colocadas, como garantía de operaciones financieras. Insisto en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en cuanto a tiempo, forma y modo.

Estamos creando un fondo sin control presupuestario, ajeno a los organismos de control de la Constitución y de la normativa legal.

Estamos dando facilidades para invertir, para comprometer, para comprar, realizar inversiones y dar en garantía de operaciones financieras, el total accionario del Banco Hipotecario Nacional.

Queda por desarrollar el tema de los adjudicatarios, que está tratado en una redacción ambigua, dificultosa y trabada, y que no es un asunto menor, sino que reviste la mayor importancia. Espero que durante el tratamiento en particular pueda venir el presidente del Banco Hipotecario Nacional para aclararlo.

En mérito a la brevedad y, teniendo en cuenta el tiempo ya insumido por mi exposición, dejo pendientes algunos temas.

Espero también que por la trascendencia que tiene esta decisión y por las implicancias económicas y sociales que tendrá esta ley, si se aprueba tal cual se propone en el dictamen de mayoría, podamos desarrollar una discusión metódica artículo por artículo en cada uno de los capítulos, con el fin de perfeccionar esta norma.

Más allá de la oposición que hemos sostenido a la privatización del Banco Hipotecario Nacional, pretendemos mejorar sustancialmente

este proyecto para no seguir acumulando errores, ya sea por ligereza, por mala intención, por desidia o por desconsideración de los riquísimos aportes que puede hacer la minoría. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: casi involuntariamente vienen a mi memoria las penosas palabras que el señor diputado Matzkin pronunciara en la última sesión. Pareciera que muchos miembros de la bancada mayoritaria están detrás de las cortinas, a juzgar por la cantidad de asientos vacíos en el recinto.

Hay un debate abierto en el país. Por un lado está el gobierno, que dice que con esto van a conseguir trabajo, pero por otro hay muchísimas personas que a lo largo y ancho del país saben muy bien que —ocurrió en todas las épocas—, la construcción de una vivienda da trabajo estable a cuatro individuos por siempre, mientras que cuando se hace una obra pública el trabajo es temporario. La obra pública encarada de esta manera significa un compromiso para afrontar las urgencias electorales pero nunca para resolver las políticas públicas que tiene que asumir el Estado.

Aquí estamos frente a un negocio. Para argumentar sobre esto se dice, por ejemplo, que como ahora hay dinero en la plaza no hace falta el Banco Hipotecario Nacional. Ahora bien, ¿los que sostienen esta idea habrán pensado cómo se hacía para conseguir un crédito hipotecario para que una familia con escasos recursos pudiera acceder a una vivienda única durante el "efecto tequila"? El censo de 1980 indicó que había dos millones y medio de familias con problemas de hacinamiento, de promiscuidad; por ejemplo, que tres o más personas viven en un cuarto y no tienen baño ni cloacas ni agua corriente. Pero el censo se volvió a hacer en 1990, y en este año ya no eran dos millones y medio de personas en esa situación sino tres millones y medio, es decir, el 38,7 por ciento de la población. Por eso es que el presidente actual dijo en la campaña electoral que iba a gastar 500 millones de pesos en viviendas —los estamos esperando— y la gente lo aplaudió porque efectivamente el problema es muy grande y sólo puede ser solucionado por el Banco Hipotecario Nacional; ninguna entidad privada lo puede resolver en su lugar. El país se está desprendiendo del único medio que hoy tiene para impulsar una política pública sobre vivienda.

A los miembros de este gobierno muchas veces les gusta comparar a la Argentina con otros países. A modo de ejemplo, citaré un solo caso: Fannie Mae, en los Estados Unidos, se privatizó treinta años después de haber resuelto el problema que en la Argentina se sigue agravando, porque no hay que mirar a la Argentina dentro de las cuadras de las personas a las que les va bien sino en las numerosas cuadras de los argentinos a los que les va mal —que son la mayoría—, y que no podrán conseguir una vivienda.

Este problema ya lo habíamos tratado en este recinto cuando por la ley 24.143 el Banco Hipotecario Nacional se convirtió en un banco mayorista. Escuchamos de la bancada oficialista todos los argumentos basados en la importancia que tenía el Banco Hipotecario Nacional como herramienta de una política pública de vivienda. Y quiero recordar que cuando se trató la Ley Federal de la Vivienda —especialmente el capítulo de la securitización—, vino aquí el señor presidente del Banco Hipotecario Nacional y nos dijo que esa herramienta era fundamental para orientar e impulsar el mercado secundario de la vivienda.

¿Qué han hecho con todos estos argumentos? ¿Han cambiado los planes? ¿Cuáles son las razones profundas que este negocio tiene detrás? ¿Solamente una urgencia electoral?

Hace dos años se nos hablaba de 500 millones de pesos; ahora, para resolver las urgencias electorales, se quiere convertir el Banco Hipotecario Nacional en una mera compañía de seguros.

El banco —según estas leyes citadas y en virtud de lo dispuesto en su Carta Orgánica— fue la herramienta que permitió, por ejemplo, que en 1995 se presentaran 20 millones de dólares mensuales y que en 1996 ese monto llegara a 40 millones de dólares por mes, así como que durante 1995 se resolvieran 500 problemas habitacionales por mes y 1.900 en 1996.

El Banco Hipotecario Nacional —deberían saberlo los señores diputados del oficialismo—, tiene una participación en el mercado de capitales en cuanto a inversión en materia de viviendas, del orden del 35 al 45 por ciento. ¿Quién va a llenar ese vacío?

Se dice también que no vamos a perder esta herramienta porque realmente tendríamos casi todos los problemas más o menos resueltos. ¿No se advierte que la construcción de viviendas ha sido y es la herramienta más importante para combatir la desocupación, que actualmente es del 17 por ciento?

Se manifiesta que no hace falta bajar la tasa de interés porque sobra el dinero en plaza. ¿Se han olvidado los autores de este proyecto que hace apenas algunos meses la banca privada cobraba una tasa de interés en el mercado del orden del 18 por ciento, mientras que el Banco Hipotecario Nacional salía a competir con tasas del 13 o 14 por ciento? Esa es la razón por la que la banca privada tuvo que bajar el costo bancario: gracias al Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos.) ¿Se imaginan los autores de este proyecto que cuando el Banco Hipotecario Nacional no exista más, la banca privada —que está mirando legítimamente su lucro empresario— bajará las tasas? La Argentina seguirá con un problema irresuelto del cual se hace eco el propio gobierno: un altísimo costo bancario en inversiones aseguradas con garantías reales, lo que es inconcebible.

Hoy funciona un fondo solidario que prácticamente es un engaño, pero con el cual los que no pueden pagar tienen la posibilidad de contar para no llegar a la ejecución de su vivienda. Cuando no exista el Banco Hipotecario Nacional, ¿qué empresa privada va a crear un fondo solidario para los que no puedan pagar? ¿Qué hacemos con los que no pueden pagar? ¿Los ponemos de patitas en la calle, con sus chiquitos, habiendo un padre desocupado?

Me voy a referir a otra enorme contradicción...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia recuerda al señor diputado que le quedan pocos minutos a su bloque, por lo que si se extiende en demasía no dejará espacio para otros oradores.

Sr. Dumón. — Le agradezco la observación, señor presidente, pero este debate es tan importante que todavía tengo la ilusión de poder convencer a algunos de mis amigos peronistas porque sé cómo piensan. Por lo tanto, le pido que me dé unos minutos más...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia no puede ir en contra de lo que el cuerpo votó.

Sr. Dumón. — A lo mejor afuera hay algún amigo peronista que cambia su voto, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia no puede modificar lo que ha resuelto la Cámara.

Dr. Dumón. — Cuando haya quórum, la Cámara podrá votar si aprueba la ampliación de los escasos minutos de los que dispongo.

Aquí se habló de un activo de 3.000 millones de dólares. Deseo señalar que 2.700 millones

de dólares están sobredimensionados. El señor diputado Fayad habrá de referirse a ello. A lo ancho y a lo largo del país no hay adjudicatario sino perjudicatarios que están pagando sus casas como si éstas fueran de oro; por eso se contabilizan 2.700 millones de dólares. Cuando se lleve a cabo la revaluación que dispone el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría —si el Poder Ejecutivo no veta la ley, lo cual sospecho—, esos 2.700 millones de dólares quedarán reducidos a la mitad, pues son puro anatocismo: es interés sobre interés. Es aumento indebido de capital, que no tiene vinculación con el capital originario del préstamo.

El presidente de la Nación dijo que habrá 1.200 millones de dólares para el Banco Hipotecario Nacional. Me pregunto si forma parte de esa cantidad los 500 millones de dólares del plan quinquenal que anunció durante su candidatura.

En el dictamen de mayoría se establece que el Banco Hipotecario Nacional quedará reducido a una sección del Banco de la Nación Argentina, al que se transferirán 100 millones de pesos por el producido de la venta de las acciones de aquél y 200 millones de pesos como renta de los bienes que integran el Fondo Fiduciario. ¿Así vamos a resolver el déficit habitacional, cuando estamos hablando de que mensualmente, de acuerdo con el actual funcionamiento del Banco Hipotecario Nacional, prestamos nada más y nada menos que 40 millones de pesos?

Por otro lado, el artículo 35 del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría establece que si esto no llegara a funcionar, de ello deberá encargarse el organismo correspondiente. Advierto que esta es una ley, que como tal debe cumplirse. Si existe esa duda en la ley es porque en el banco no se va a cumplir. Si no hubiese dudas respecto de la ejecución de esta política, a nadie se le ocurriría que la plata que recibiera el Banco de la Nación pasara a la Secretaría de Acción Social.

En suma, estamos frente a una transferencia gigantesca de capitales del sector de la vivienda hacia otros sectores de obra pública —extrapresupuestarios—, que resulta absolutamente cuestionable desde el punto de vista legal, como lo señalara el señor diputado Trettel Meyer.

Otra de las cuestiones relacionadas con esta mala articulación legal está dada por el hecho de que a partir de la declaración de privatización desaparece el directorio del Banco Hipotecario Nacional quedando en manos del actual presidente tanto el banco como su liquidación. Entiendo que esto significa actuar absolutamen-

te en contra de la ley y de las razones esgrimidas en este Congreso en oportunidad de la aprobación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional.

También se ha dicho que esta venta tiende a ganarle de mano al Fondo Monetario Internacional para que no pida esta nueva "joya de la abuela" al gobierno en razón del déficit fiscal. Lo que tiene que saber el gobierno es que la convertibilidad se asienta no en un capricho de la ley sino en el equilibrio fiscal, y para que así suceda las cuentas deben cerrar con recursos ordinarios. Si el Fondo Monetario pide la venta del Banco Hipotecario Nacional, es porque hay un alto déficit; pero si la plata se gasta en las elecciones, después habrá que crear un impuesto inmobiliario para cubrir ese déficit en el presupuesto.

Se ha dicho que habrá dinero para las provincias. No soy de la ciudad de Buenos Aires pero creo en su Constitución; estoy orgulloso de la organización institucional de esta ciudad. Hemos recibido una carta de su jefe de gobierno. ¿Por qué razón ha sido excluida la ciudad de Buenos Aires del reparto del Fondo Fiduciario que se constituirá, de acuerdo con este proyecto de ley, con la venta del Banco Hipotecario Nacional? Si esto no es partidismo, ¿cómo se llama?

No habré de extenderme en consideraciones relacionadas con la transferencia de fondos a las provincias, pues lo ha hecho magníficamente el señor diputado Fayad. Por lo tanto, para finalizar, deseo señalar que la última vergüenza es que a una entidad privada a la que se llamará sociedad anónima le digamos "Banco Hipotecario Nacional", que es lo que expresa el dictamen. Es la primera vez que el nombre de la Nación va a ser puesto en una entidad privada organizada por la ley.

En el siglo pasado, en la década del 80, se creó el Banco Hipotecario Nacional. ¿Recordarán los señores diputados del bloque de la mayoría que ésta fue una de las principales herramientas que tuvo el general Perón? ¿Recordarán asimismo que estos problemas siguen exactamente igual o quizás se hayan agravado? ¿Pensarán ellos que estos fines del Banco Hipotecario Nacional se cubren con el Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima?

Ya que hemos citado al general Perón en relación con este Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima que se crea por ley, podemos señalar, como decía el general, que esto es como un sofá-cama; no sirve para sofá y tampoco para cama.

Sr. Presidente (López Arias). — Como el tiempo asignado al radicalismo se ha cumplido y además han solicitado hacer uso de la palabra los señores diputados Solanas, Gorini y Bullrich, la Presidencia informa que cuando exista quórum va a someter a votación la posibilidad de ampliar el término para que puedan expresarse el titular de la bancada del radicalismo y esos tres señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Caviola. — Señor presidente: previo a la consideración del tema en cuestión, quisiera realizar un pedido especial. Tengo información de que numerosos adjudicatarios o "perjudicatarios" del Banco Hipotecario Nacional se encuentran a las puertas de este Congreso, ansiosos por saber cómo se va a definir su destino. Aparentemente existiría una orden de la Presidencia de no permitir su ingreso. En ese sentido solicito que se tomen las medidas necesarias para que igual que en otras sesiones, donde se trataron problemas de vivienda, como durante el tratamiento de la denominada "ley Pierri" en que estuvieron colmadas las galerías, se facilite el ingreso de estas personas, que no son delinquentes ni subversivos sino gente que en forma estoica viene sufriendo abusos y pagando su cuota a pesar de que está totalmente desproporcionada con el valor del crédito que han tomado oportunamente.

Reitro a la Presidencia el pedido de que tome los recaudos necesarios para facilitar el ingreso de estos argentinos que quieren ver este debate en el Congreso a fin de conocer cómo se discute su problema.

Hecha esta salvedad, antes de ocuparme de la cuestión voy a llamar la atención...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia informa que se están haciendo las averiguaciones del caso para saber qué ocurre en relación con lo expresado por el señor diputado por Mendoza porque en ningún momento existió alguna orden para evitar el ingreso de esta gente.

Sr. González Caviola. — Señor presidente: quiero manifestar que tengo un profundo respeto por su persona, pero no puedo comenzar mi exposición sin manifestar el profundo desagrado con la manera en que manejó la sesión pasada, ya que la función del presidente es hacer cumplir el reglamento y no transgredirlo.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. González Caviola. — En franca transgresión del reglamento, el señor presidente no otorgó el uso de la palabra ni al miembro informante del despacho de minoría...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita a los señores diputados que mantengan el orden y recuerda que existe un tiempo estricto asignado para los distintos discursos; en ese sentido no se van a autorizar interrupciones para que no se reduzca el tiempo que le corresponde a cada orador según lo establecido por el cuerpo.

Sr. González Gaviola. — Hemos venido hoy a dar la discusión que no pudimos dar la sesión pasada...

Sr. Camaño. — ¡No vinieron a la sesión pasada!

Sr. González Gaviola. — Esta discusión se refiere a un proyecto plagado de gatopardismo e improvisación. ¿Por qué digo que está plagado de gatopardismo? Porque meses atrás, en una reunión que tuvo trascendencia pública, un personaje del oficialismo —que es como los borrachos o los chicos, que siempre dicen la verdad—, el señor Carlos Rodríguez, anunció a los justicialistas que se iba a privatizar el Banco Hipotecario Nacional. En ese momento la mayoría se rasgó las vestiduras; incluso el señor diputado Matzkin dijo: hagan callar a ése. Evidentemente no quería que los miembros del bloque Justicialista —que hoy van a votar la privatización del banco— tomaran la dosis de vaselina necesaria para digerir este proyecto que van a aprobar por estricta obediencia debida, y no por una cuestión racional o porque lo deseen con el corazón.

Esta costumbre del señor diputado Matzkin de hacer callar no sólo al señor Carlos Rodríguez sino al resto de los bloques quizá provenga de la época en la que fue funcionario de una dictadura militar, pero que de ninguna manera debe ser tomada como ejemplo por el resto del bloque oficialista porque sé —ya que conozco a muchos de sus miembros— que siempre estuvieron en contra de las dictaduras militares.

Hablaba de gatopardismo e improvisación porque en el texto del proyecto de ley que hoy discutimos ni siquiera se menciona al Banco Hipotecario Nacional. Han tenido que inventar figuras y sobornar a gobernadores con provisión de fondos para que esta iniciativa que nadie quería votar, hoy tuviera alguna posibilidad de ser aprobada.

En mi provincia se llama al pan, pan y al vino, vino. Por ello expreso que este proyecto de ley significa la liquidación del Banco Hipotecario Nacional con el objeto de generar fondos destinados a mejorar la situación electoral en un clima de malhumor de la gente debido al déficit que provoca la aplicación del plan del gobierno nacional.

Más allá del soborno y la imposición, hoy necesitamos hacer un debate profundo acerca de cuál es la solución que permita superar los problemas que el oficialismo ha generado y que no es capaz de enmendar.

Las ventajas que el modelo menemista trajo en sus primeros años fueron, entre otras, desterrar la hiperinflación, pero al mismo tiempo ese mismo modelo ha ocasionado nuevos problemas como son la hiperdesocupación y la concentración económica. Por ello todo lo que hagamos de ahora en adelante debe ser profundamente analizado para ver si tiende a resolver o a profundizar aún más estos nuevos problemas.

Es válido reflexionar con los amigos del justicialismo acerca de cuáles son las razones que llevaron a encarar la reforma del Estado y las privatizaciones, que desde el lado del gobierno se justificaban diciendo que se hacían para no generar más déficit fiscal ni endeudamiento público. Pero luego de las grandes reformas que este gobierno ha llevado adelante vemos que no sólo no ha bajado el déficit fiscal sino que se ha incrementado el endeudamiento público.

Por otra parte debemos tener en cuenta que el Banco Hipotecario Nacional no genera endeudamiento ni déficit fiscal, es decir, que esta razón de reformar y privatizar una parte del Estado no tiene ningún asidero.

El otro fundamento que justifica una reforma del Estado mediante la que parte de la gestión estatal la comienza a llevar adelante el privado, es que a través de esta última gestión logramos servicios de mejor calidad y menores costos. Pero en el caso del Banco Hipotecario Nacional tenemos que saber que aún sigue latente la función para la cual fue creado, porque la Argentina todavía tiene un déficit habitacional cercano a los tres millones, con lo cual queda demostrado que la función no se ha cumplido.

Otra cosa sería si la privatización de este banco tuviera por objeto que a partir de la gestión privada se garantizaran plazos mayores, menores tasas, menores costos administrativos, fácil acceso a sectores que hoy no pueden ingresar al mercado hipotecario, y se ayudara a la franja social a la que esta entidad estuvo dirigida, que no está representada por diversos sectores de la sociedad como se establece para el nuevo Banco Hipotecario Nacional sino que su fin era complementar la oferta del sector privado para que los sectores con ingresos medios y bajos pudieran acceder a créditos con plazos y tasas razonables.

Este organismo estatal ofrecía tasas reducidas pero no subsidiadas, sin incorporar el lucro como

parte de la ecuación. Sin embargo, no es éste el criterio con el que se pretende privatizar el Banco Hipotecario Nacional. Todo lo contrario: el banco está semiprivatizado a partir de la gestión menemista, porque el señor Rojo ha trasladado la línea de sectores sociales a las que se les otorgaba créditos. Al mismo tiempo, a los deudores se les da un tratamiento que no tiene nada que ver con la función social con la que este banco fue pensado, que de ninguna manera se relacionaba con el subsidio sino con una orientación social.

¿Cuáles fueron los errores de las privatizaciones y cuáles los beneficios de la reforma menemista del Estado? Nos sacó de la situación de hiperinflación, pero no lo hizo ni el déficit fiscal ni del endeudamiento externo, que ha sido incrementado.

¿Cuáles son los defectos de estas privatizaciones? Han generado concentración económica. Este tema nadie lo discute. Asimismo, provocaron la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo. No sólo provocaron la concentración económica sino la concentración de privilegios en los permisionarios. Así, hay situaciones de exención impositiva para la importación de bienes de capital, que no están al alcance de cualquier otro empresario argentino.

Muchos de los defectos del surgimiento de las empresas privatizadas se originaron en las ausencias de marcos regulatorios. Voy a dar un ejemplo con respecto a Gas del Estado. La empresa se privatizó y el gas licuado en garrafa, que es consumido por nuestros hermanos más humildes, aumentó más de un 120 por ciento en plena convertibilidad. El gas natural contó con un marco regulatorio, pero el precio del gas en boca de pozo sufrió un incremento de más del 30 por ciento durante el período de estabilidad.

Podemos también mencionar al agua potable y a la electricidad. Todos estos insumos demuestran que el modelo de privatización menemista ha significado una transferencia de recursos de los usuarios a los permisionarios, no existiendo excepciones.

Así observamos el caso de la telefonía, donde el organismo de control, lejos de ponerse del lado del interés del usuario, se asocia —aun transgrediendo la Justicia—, con los permisionarios a fin de seguir aumentando en mayor medida las ganancias superlativas que presentan estos grupos que han concentrado una serie de privilegios.

¿Por qué hago referencia a estas antiguas privatizaciones del modelo menemista? Porque lejos de superar los errores que el menemismo ha cometido, los reitera en esta privatización. Este es el motivo de nuestro rechazo a este modelo de privatización. No es mediante la gestión privada que lograremos que más argentinos de menores recursos accedan al crédito hipotecario.

Está claro que ha aumentado la oferta de crédito hipotecario en el mercado, pero me pregunto para quién ha sido ello. Lo fue para las familias que tienen ingresos superiores a los 2 mil pesos. La política del banco está claramente fijada en un índice que se quiso incorporar de contrabando en el dictamen de mayoría y que se denomina valor de reposición del mercado.

El Banco, que tiene que estar orientado a la vivienda para los sectores bajos y medios, ha establecido el valor del metro cuadrado construido en 940 pesos. ¿Qué trabajador argentino o qué miembro de la clase media baja podrá pagar 50 mil pesos por una vivienda de 50 metros cuadrados? Ninguno. Esta es la dirección en la que se está llevando el Banco.

Entonces, creemos que hay tres temas. En primer lugar, observamos que la privatización no está orientada hacia un mejoramiento del bien general sino a una necesidad que tiene el oficialismo de conseguir fondos frescos para mejorar su posicionamiento electoral.

En segundo lugar, me permito discrepar con el señor diputado Fayad, ya que fue el Frepaso quien en la discusión de la privatización de este Banco planteó, mediante un proyecto de mi autoría, que fue acompañado por el resto de las bancadas, que era imposible sentarse a discutir el cambio de manos del Banco Hipotecario Nacional si no se hacía transparente la situación de cartera de la entidad.

Ello significa que miles de argentinos hoy no disfrutan de los beneficios de la ley de desindexación y de los efectos de la convertibilidad, ya que todos los meses observan que, a pesar de haber pagado durante quince años sus créditos, les llegan cuotas más altas. Cada vez amortizan menos capital y deben más dinero, a pesar de que pagan religiosamente la cuota correspondiente.

Este es el engendro que provoca esta nueva "Circular 1.050". A partir de la discrecionalidad que se otorgó a este Banco para que actuara en favor de los adjudicatarios, los ha terminado transformando en "perjudicatarios". El tema del recálculo no es menor y puede hacer que el

patrimonio del Banco varíe sustantivamente respecto de las cifras que se han dado.

Vamos a discutir esta cuestión cuando el proyecto se trate en particular. Creemos que es importante que el oficialismo aceptara que el dictamen de mayoría es pésimo. Por ello le ha introducido modificaciones profundas, que todavía no son suficientes. De todos modos, ello habla de que ha sido receptivo en relación con lo que se dijo desde la oposición.

Entonces, previo a la discusión del tema, se debe hacer transparente la situación de la cartera. Ello no se puede hacer en forma simultánea y no puede ser juez del recálculo el Banco Hipotecario Nacional porque va a ser juez y parte, como lo ha venido demostrando. Por eso formulo moción —aceptamos que sea sometida a votación luego de que se agote la lista de oradores—, de que se desdoble este proyecto.

Existe una iniciativa que cuenta con el consenso de todas las bancadas y que fue redactada laboriosamente; se refiere a la necesidad de acercar justicia a los deudores del Banco Hipotecario Nacional. Los despachos de minoría hacen referencia a esa cuestión, y por ese motivo solicitamos que el proyecto se desdoble con el objeto de que se trate de inmediato el recálculo y que el proyecto de privatización del Banco vuelva a comisión en razón de la serie de imperfecciones que contiene, tal como lo plantearon otras bancadas.

A continuación quiero expresar brevemente algunas observaciones. Nosotros venimos gozando a este recinto a votar algún proyecto que aporte fondos para políticas activas de generación de empleo. Cabe recordar que el Frepaso fue uno de los gestores de una histórica sesión donde se debatió el desempleo como cuestión central. Esa discusión se generó desde la oposición y, como el resto de los partidos opositores, aportamos a ella diversas propuestas. No nos oponemos a que se consigan recursos para implementar políticas activas que favorezcan la producción, pero por supuesto no por medio de la liquidación de una función del Estado hoy todavía vigente, del manejo discrecional del fondo por parte del Poder Ejecutivo nacional ni, desde ya, de la sanción de un proyecto de ley que contiene una serie de bombas escondidas. Por ejemplo, aquí se está mencionando que en realidad el dinero tampoco va a ser tanto.

Esta norma genera un sistema de inseguridad jurídica porque incluso se llega al exceso de establecer que no se podrán dictar leyes en el

futuro que regulen el accionar del Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima.

Además esta iniciativa adolece de imprecisiones, contradicciones y aberraciones de técnica legislativa. Hay superposición de funciones y artículos contrapuestos, vagos y de doble interpretación. Incluso usted, señor presidente, podría haber pasado a formar parte del libro Guinness de la ridiculez legislativa al presidir una sesión en la que el Congreso de la Nación iba a privatizar un banco que no existía. No sé si se trató de un acto fallido de los compañeros peronistas que no quieren privatizar ese banco, pero lo cierto es que en el dictamen de mayoría la entidad aparece denominada como "Banco Hipotecario de la Nación". Esto significa que ese dictamen hace permanentemente referencia a un banco que no es una sociedad de existencia jurídica en este país. El que existe es el Banco Hipotecario Nacional, y desde la oposición tuvimos que señalar que se estaba cometiendo un error garrafal que nos podría haber hecho quedar en ridículo. Fue así que se publicó una tardía fe de erratas respecto de esta equívoca mención.

Existen serios problemas con respecto a los controles. En el marco del Fondo Fiduciario no existe el control provincial porque sólo se prevé la existencia de dos miembros en representación de las provincias sobre un total de siete. En un país en el cual le han transferido a las provincias todas las funciones, no podemos repartir por mitades; aunque en realidad, si descontamos las acreencias del Fondo Fiduciario con el Banco Central, les corresponden menos de la mitad.

Asimismo se exige al Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima de los controles que en el futuro se establezcan por medio de otras leyes. Una vez producida la venta de la primera acción por parte del Estado nacional, será materia de interpretación si el banco comercial quedará sujeto a las leyes que controlan la administración financiera, la 24.156 y la 21.526, sobre régimen de entidades financieras.

Estos son los huecos garrafales que contiene este improvisado dictamen de mayoría. Asimismo se otorga amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos del Fondo tanto a su consejo administrador como al Poder Ejecutivo nacional.

La entidad privatizada por diez años en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional deberá cumplir con determinada actividad. No se habla de facilitar el acceso a la vivienda

de los sectores medios y bajos sino de ofrecer créditos a diversos sectores, a 940 pesos el metro de reposición, y probablemente más a las empresas concentradas de construcción que a los usuarios directos.

Se autoriza la creación de un Banco Hipotecario residual toda vez que se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a que disponga los activos y pasivos que asumirá respecto de la cartera crediticia existente, con el riesgo de que, como en otras privatizaciones, nos quedemos con la cartera mala y vendamos el jamón del sandwich.

Sr. Presidente (López Arias). — Con el debido respeto, la Presidencia hace saber al orador que integrantes de la bancada a la que pertenece pidieron que le avisara cuando cumpliera veinte minutos de exposición. Ya ha hecho uso de dieciocho minutos y le ruego que redondee su discurso en los dos minutos que le restan.

Sr. González Gaviola. — Así lo haré, señor presidente.

Esta iniciativa también autoriza al Fondo Fiduciario a subsidiar tasas en los préstamos para proyectos presentados por la Nación y las provincias cuando ocupen mano de obra.

Entendemos que esto sería muy loable si no estuviéramos al tanto de las expectativas de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el sentido de que estas facilidades las utilice para lograr favores políticos —en ocasiones hasta el quórum para sesionar—, de otros partidos a los que presiona con estas prebendas.

Hay contradicciones, como sucede en el artículo 5º, donde por un lado se otorga el manejo de los fondos al consejo de administración y, por el otro, el artículo 6º lo concede al BICE y luego al Banco de la Nación Argentina.

Se determina que los fondos serán adjudicados contra proyectos que eleven las provincias, pero notamos que hay otras posibilidades de subsidios para agregar a los que ya tienen y que se enmascaran en el anexo, dado que una de las formas de utilización del Fondo consiste en otorgar partidas a quienes ya tienen concesionadas obras públicas y que hoy tienen la obligación de invertir por su cuenta.

Por lo expuesto y las observaciones que formularé durante el tramitamiento en particular, reitero la propuesta que adelanté al inicio de mi exposición en el sentido de que interpretamos que es necesario desdoblarse este proyecto de ley para que hoy se apruebe una iniciativa que atienda al justo recálculo de las deudas del Banco Hipotecario Nacional; pero también solicito que, por las serias fallas del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el dic-

tamen vuelva a comisión para ser seriamente discutido y, de decidirse la privatización de la entidad, ella se realice en beneficio de los futuros usuarios del Banco Hipotecario Nacional y no de los amigos del poder. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: hace varios años, cuando este gobierno inició la política de privatizaciones, hubo una intensa campaña tendiente a generar en la opinión pública la justificación de lo que luego fue el desguace de las empresas del Estado.

Se suponía que daban ganancia, pero que no eran rentables por sí mismas e implicaban un costo para el erario nacional que, en definitiva, debía ser soportado por todos los contribuyentes.

Se utilizaba como paradigma del discurso oficial el caso de la empresa Ferrocarriles del Estado, de la que se decía que perdía diariamente un millón de pesos, sin considerar en ese análisis puramente economicista el rol social e integrador que tienen los ferrocarriles. Simplemente se insistía en la postura de que un millón de pesos de pérdida por día era una barbaridad.

Han pasado los años y se han privatizado la provisión de energía eléctrica, el agua, los teléfonos, el gas y también los ferrocarriles. Pero esos ferrocarriles que ya no pertenecen al Estado le cuestan hoy 1.300.000 pesos en concepto de subsidios que se cobran los operadores privados de los servicios ferroviarios en la Argentina.

Este discurso falaz usado como latiguillo por los comunicadores sociales de las privatizaciones, ¿adónde va a parar a la hora de analizar todo esto? ¿Cómo se puede justificar la venta de un banco que es el único ente financiero que posee el Estado para garantizar una política de viviendas racional, equilibrada e integradora de la población de la Nación Argentina? ¿Cómo se puede justificar esta privatización cuando estamos hablando del banco más sólido del país y que tiene un patrimonio neto superior a los 2.700 millones de dólares? Se trata de un patrimonio neto que es más de tres veces superior al del mayor banco privado que existe en la República Argentina, que no supera los 800 millones de pesos. ¿Cómo se puede fundamentar que el Estado nacional se desprenda de un banco que otorga una utilidad líquida que supera los 300 millones de pesos anuales, según consta en sus balances, y que proporciona al Estado y al Tesoro fondos frescos de inmediata utilización?

Entonces, como no hay ninguna razón que pueda justificar la venta de un banco que es rentable, que está saneado, que es sólido patrimonialmente, que cumple una función impostergerable en la Argentina cual es la de garantizar el acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales de menores recursos y una distribución territorial equitativa de los recursos que se invierten, hubo que inventar un argumento. Así se inventó la carnada de este Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.

Lamento que muchos de nuestros gobernadores, con la misma alegría con que firmaron en su momento los pactos fiscales federales, que significaron para las provincias una pérdida de recursos calculada en 5 mil millones de pesos anuales en favor de un Tesoro nacional voraz que atrapa recursos con la única finalidad de pagar los intereses de una deuda externa impagable y de absorber el hueco que generó la privatización irresponsable y no planificada del sistema jubilatorio nacional en las cuentas públicas, se prendan del chupetín que implica este supuesto fondo fiduciario con el cual alimentan la fantasía de hacer obras públicas en sus provincias en este año electoral.

No voy a repetir conceptos que ya se han expresado ni tampoco las criteriosas manifestaciones formuladas por el señor diputado Fayad. Sólo quiero remarcar que las provincias van a tener muchos menos recursos de los que la volátil imaginación de los gobernadores supone para invertir en obras públicas. Quiero decir a voz en cuello que ésta es la carnada que inventó el gobierno nacional para justificar la entrega de un banco que de ninguna manera se puede privatizar.

Lamento que en este país nos tengan acostumbrados a las manipulaciones maniqueas de la opinión pública, y a ver alfombradas las principales ciudades del país con afiches que expresan que el gobierno propone y que la oposición no tiene alternativas, anunciando una serie de ventajas absolutamente infundadas respecto de la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

Sin el ánimo de extenderme en mi exposición y con la intención de que se entiendan mis conceptos, quiero agregar lo siguiente. Esta repentina necesidad de invertir en obras públicas que expresa el gobierno nacional mediante la enajenación del Banco Hipotecario Nacional es desmentida por los hechos. Si realmente existiera esa voluntad política, ¿cómo se pueden entender datos como los que voy a enunciar a continuación? ¿Cómo se puede entender que la

inversión real directa presupuestada para el año 1996 en el presupuesto de la Nación era de casi mil millones de pesos y que sin embargo se han gastado solamente 630 millones?

Durante el año pasado de un solo plumazo se subejecutaron 400 millones de pesos que tenían que destinarse a obras públicas en distintas regiones del país y que evidentemente al gobierno nacional no le interesa hacer.

Vuelvo a referirme a la exposición del señor diputado Fayad. No quiero repetir tediosamente cifras que aquí ya se han vertido, pero si se los atentamente el dictamen de mayoría —algunos gobernadores se suman a la fantasía del fondo fiduciario—, se llega a la conclusión de que las provincias no podrán manejar más que 400 millones de pesos.

Cuando este Congreso sancionó el presupuesto para 1997 dijimos a voz en cuello, sin que los oídos cerrados del oficialismo pudieran menguar nuestra advertencia, que las partidas no asignadas a programas o políticas expresas por transferencias del presupuesto superaban los mil millones de pesos; mil millones de pesos que se pierden entre los pliegues de un presupuesto que carece totalmente de racionalidad.

Si hubiese voluntad política de construir obras públicas no sería necesario enajenar esta herramienta indispensable y valiosísima que tiene el Estado nacional y que es el Banco Hipotecario.

Con estos dos ejemplos, es decir, ejecutando lo que el Congreso aprueba como inversión directa de la Nación y ahorrando estas transferencias de recursos sin asignación explícita —en las que no se sabe qué se hace ni quién las maneja en el gobierno nacional—, solamente allí hubiésemos tenido 1.400 millones de pesos para que la Nación y las provincias pudieran invertir en obras públicas, en caminos, en diques, en obras viales, en sistemas de riego, sin que se tuviera que vender la última joya de la abuela, como es el caso del Banco Hipotecario Nacional.

Nuestra primera conclusión es que no se puede aprobar la venta de un banco que es una herramienta esencial para que el Estado nacional desarrolle una política de vivienda, con argumentos tan poco serios como el de este fondo fiduciario.

Quizá haya por allí algún espíritu alegre o descoso de calmar su conciencia, que diga que mediante esta ley se va a crear una comisión bicameral que controlará que el Estado nacional realmente gaste los recursos en las obras públicas prometidas. A esas conciencias que buscan calmarse les digo que éste es el tercer

fondo fiduciario que se crea por ley de este Congreso de la Nación. Ya tuvimos el fondo para el desarrollo provincial y el fondo para la capitalización bancaria, y en ninguno de los dos casos se crearon hasta el día de hoy las comisiones bicamerales de seguimiento de la aplicación de esos recursos, a pesar de las notas elevadas a la Presidencia de este cuerpo, de numerosas intervenciones en este recinto y de diversos proyectos de resolución que —me consta— han presentado varios diputados de esta Cámara, particularmente de mi bancada.

En los dos años transcurridos nunca se crearon estas comisiones bicamerales de seguimiento. Estoy seguro de que en este caso tampoco existe la más mínima voluntad política de que el Congreso de la Nación cree la comisión bicameral que aquí se propone. Así lo demuestran la letra y el espíritu de este proyecto de ley.

Desco señalar que está circulando un anexo en el que se enumeran las obras públicas que la Nación y las provincias habrían de construir con este dinero del supuesto fondo fiduciario. Y quiero referirme concretamente al caso de Tucumán —mi provincia— porque creo que es paradigmático. Resulta que de lo que la Nación obtenga de la enajenación del banco se van a distribuir cien millones de pesos entre las provincias con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas y menor densidad poblacional. Ahí quedó afuera mi provincia; la gran favorecida es la de La Rioja. Tenemos la maldición de que la nuestra sea una provincia con un elevadísimo índice de pobreza y una altísima tasa de densidad poblacional. En consecuencia, estamos afuera. Además se hacen las detracciones que bien explicó el señor Fayad y que no voy a discutir ahora.

Queda un escaso fondo para repartir entre las provincias y la única obra pública que figura en ese listado enunciativo para la provincia de Tucumán es una obra monstruosa que el presidente de la Nación pretende imponernos a costa de cualquier cosa: el llamado canal federal. Esta es una obra perversa que consiste en trasvasar la cuenca de los dos ríos más grandes de Tucumán para ir a regar tierra de la familia Menem en la provincia de La Rioja. Esto no lo podemos tolerar ni permitir y por eso lo venimos a denunciar en este recinto.

En consecuencia, no habrá tal fondo fiduciario, y lo poco que quede para ser manejado por la Nación y las provincias presenta problemas. De todos modos quiero aclarar que valoro la intención de algunos diputados del bloque Justicialista —la cual me consta—, que han in-

tentado mejorar la letra de este proyecto, porque la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo era francamente una monstruosidad. Supongo que como fruto de esa preocupación se ha facultado al jefe de Gabinete de Ministros a incluir dentro del presupuesto nacional de este año las obras del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Pero la buena intención que pudo haber animado a que se presione para incorporar esta modificación en el dictamen no es otra cosa que un arma de doble filo, porque en realidad al incorporar este fondo al presupuesto de la Nación traemos a colación el artículo 15 del presupuesto nacional, que también fue aprobado por este Congreso, y respecto del cual nosotros dijimos que era absolutamente inconstitucional.

Según dicho artículo el jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para modificar el presupuesto de la Nación trasladando de un lugar a otro las partidas que el Parlamento ha aprobado con un destino específico. En consecuencia, estamos incorporando este monto al presupuesto de la Nación, siendo que su misma ley de creación faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer una utilización alternativa de esa partida presupuestaria.

Ahora bien, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupan cosas como ésta. Nos preocupa la brutal declaración del jefe de asesores del ministro de Economía, quien ha dicho que lo que se obtenga por la privatización de este banco se destinará a pagar los intereses de la deuda externa y no otra cosa. Nos preocupa que esta posición haya sido sostenida por el ministro de Economía en el seno del gabinete nacional. Y esto nos preocupa porque sabemos cómo se resuelven en este país las pulscadas entre el poder económico y el poder político, porque sabemos que detrás de la voz del ministro de Economía y de su jefe de asesores, que tan alegremente confiesan los objetivos del gobierno, se esconden también cosas como esta declaración aparecida hace un par de días en un interesante suplemento del matutino "El Cronista" sobre la privatización del banco. Allí hay una declaración de un conocido economista liberal de la Argentina, representante en nuestro país de la Unión de Bancos Suizos, el doctor Roberto Alemann, que muy suelto de cuerpo ha dicho: "Los fondos de esta privatización, sin duda, deberían aplicarse a reducir la deuda. Es la primera ley de la quiebra, con la venta de activos hay que cancelar pasivos. Además, la Argentina está muy endeudada y con una reducción de su deuda mejorar su rating." Lue-

go sigue diciendo que esto es así porque resulta muy preocupante el eventual aumento del gasto público que podría generar la creación de estos fondos fiduciarios.

¿Por qué hago mención a esto? Porque tengo en mis manos una copia de la segunda Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno argentino. Lamento que las bancas del bloque Justicialista estén vacías. Lamento los oídos sordos de los diputados del oficialismo, quienes se enojaron con nosotros porque no facilitamos el quórum la semana pasada. Lo que pasa es que no escuchan porque no existe el debate en esta Cámara. Si escucharan sabrían que en la segunda Carta de Intención el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente: "El gobierno también está considerando la posibilidad de destinar parte de los recursos obtenidos mediante la posible privatización del Banco Hipotecario Nacional al financiamiento de un programa de inversiones en infraestructura; no obstante, efectuará consultas con el Fondo Monetario Internacional sobre las medidas que resulten necesarias para compensar los efectos de dicho programa sobre el gasto público."

¿Qué quiere decir, en buen romance, todo esto? Quiere decir lisa y llanamente, porque todos conocemos las declaraciones públicas de los funcionarios del Fondo, que la venta del Banco Hipotecario Nacional es para pagar los intereses de la deuda; y aquí se aclara que el gobierno de la Nación no dispondrá de esos fondos si no realiza las pertinentes consultas con el Fondo Monetario Internacional.

Entonces, ¿por qué se le miente a la gente en este país? ¿Qué significan esos afiches pegados en las paredes de la República donde se dice que con la plata que se obtenga se van a crear 200 mil puestos de trabajo y construir miles de viviendas, si todos sabemos que esto es un engaño-pichanga, una mentira, y que lo más probable es que esta plata se destine a pagar los intereses de una deuda externa que crece día tras día? Todos sabemos que no habrá tales obras públicas, y que en caso de que las haya serán como las que actualmente se llevan a cabo en la provincia de Tucumán, a pesar de que está toda la provincia en contra. Sin embargo, el gobierno nacional sigue con la voluntad testaruda y cerrada de avanzar en una obra pública perjudicial para la provincia de Tucumán.

Por todo lo dicho creemos que este proyecto de ley de venta del Banco Hipotecario Nacio-

nal es una irresponsabilidad absoluta del gobierno, que enajena un banco que da ganancias, que tiene una sólida posición patrimonial y que cumple un rol social imprescindible para el acceso a la vivienda.

Resulta ser un acto de suma irresponsabilidad privatizar el Banco Hipotecario Nacional sin que se dé respuesta a sus miles de deudores, sometidos a un verdadero estrangulamiento por obra y gracia de un sistema de cálculo de las cuotas francamente abusivo y discrecional.

No puedo dejar de mencionar aquí la situación de los 6.200 deudores del Banco Hipotecario en mi provincia. Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje a un anónimo ciudadano tucumano del barrio Haimés 3, de la ciudad de Concepción, que se quitó la vida con un disparo porque no podía pagar la cuota al banco. Nos encontramos con que propiedades cuyo valor de mercado no supera los 15 mil o 20 mil pesos están siendo valuadas en 70 mil pesos. A ello se suma la aplicación de tasas de interés usurarias en un país que no tiene inflación. Esta combinación del sistema francés, con tasas de interés largamente positivas, produce un efecto denominado "bola de nieve", pues aunque la gente pague mensualmente la cuota que corresponde abonar, el capital que adeuda al banco se incrementa mes a mes, produciéndose así casos lamentables como el que he citado.

He estado en mi provincia en un barrio de casas para la clase media baja, construido por el Banco Hipotecario. Ese barrio se halla en medio del campo, rodeado de cañaverales, en la localidad de Cevil Pozo. He visto boletas del Banco Hipotecario de las que surge que los adjudicatarios de esas viviendas pagan mensualmente cuotas de 600 o 700 pesos por una propiedad valuada en 60 mil o 70 mil dólares. Esto es una barbaridad, que no corrige el dictamen de mayoría. Mientras se siga otorgando al Banco Hipotecario Nacional la facultad de tasar las viviendas a su arbitrio y discreción, nada se solucionará aunque se haya incorporado la expresión "valor de mercado", pues esta será aplicada de acuerdo con la acepción que el Banco Hipotecario tiene de ella.

Debemos establecer que todas estas propiedades deben ser valuadas por tasador imparcial —elegido de común acuerdo entre las partes—, o en su defecto por el Banco de la Nación Argentina. De lo contrario, nos encontraremos con que el caso de ese ciudadano de Tucumán que se mató con un disparo en la cabeza ante la desesperación de no poder afrontar el pago

de la cuota por una casa con la que había soñado toda su vida, se repetirá en muchos otros lugares del país.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia ruega al señor diputado que concluya, pues está restando el término del que dispone el presidente de su bloque para hacer uso de la palabra.

Sr. Vitar. — Voy a redondear, señor presidente.

En forma previa a la privatización se debe resolver la situación de los deudores del banco; se trata de un drama que afecta a más de 70 mil u 80 mil familias argentinas. Por lo tanto, mientras no se resuelva el problema de fondo nada lograremos con la incorporación, en un acto de voluntarismo, de la expresión a la que me he referido.

Previamente a cualquier intento de privatizar el banco debemos resolver tres cuestiones: la base de cálculo — hoy arbitraria e irrazonable —, la tasa de interés — que llega hasta el 13 y 14 por ciento — y el tope de la cuota sobre los ingresos familiares, porque no es posible que un grupo familiar deba pagar cuotas de 600 o 700 pesos cuando ese es todo el ingreso que percibe.

Para terminar, lamento la sordina del bloque mayoritario; también lamento esta situación que preveíamos la semana pasada, donde a la hora del debate se levantan de las bancas, no escuchan las razones y los argumentos, y simplemente tienen las manos enyesadas para votar a ciegas y en forma irresponsable la enajenación de esta herramienta indispensable para el Estado nacional. Seguramente nos vamos a arrepentir durante mucho tiempo, cuando veamos que en la Argentina los pobres han perdido su última posibilidad de acceder a una vivienda.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia informa que le quedan trece minutos al representante del Frepaso, señor diputado Alvarez.

A continuación corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Bulacio, recordándole que cuenta con un término de ocho minutos.

La Presidencia solicita al orador y a quienes lo sigan en el uso de la palabra, que respeten estrictamente los términos a fin de votar a la hora establecida.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Bulacio. — Señor presidente: tengo que pellizcarme para tomar conciencia de la reali-

dad que estamos viviendo en este recinto. Los que siempre estuvimos a favor de un Estado liviano y de una economía libre, estamos defendiendo la permanencia del Banco Hipotecario Nacional en el dominio público, y la bancada mayoritaria, que nació bajo el signo de la justicia social y que siempre se ocupó del auxilio y de la asistencia a los sectores populares, defendiendo la venta del Hipotecario. Increíble pero cierto, diría Ripley.

El nombre asignado por el Poder Ejecutivo a este proyecto de ley es el de "Creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional". Con ese nombre se bastardea una vez más el sentido alberdiano de federalismo y con palabras que suenan a música a grandes sectores de nuestra sociedad, que atienden más a los títulos que a los contenidos, se oculta el verdadero objetivo de la norma, que es nada más que obtener del Congreso la necesaria autorización para vender el Banco Hipotecario Nacional, una de las últimas reliquias que aún nos quedan de la abuela.

— Ocupa la Presidencia la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, señora Irma Roy.

Sr. Bulacio. — Este banco, creado en 1886, en el transcurso del primer gobierno del general Roca, nace como una necesidad de un país que ya por entonces tenía problemas de vivienda para los grandes sectores populares. Un Estado que recibía barcos cargados de inmigrantes procedentes de todo el mundo, que crecía a un ritmo sorprendente y que tenía como mira, mediante el trabajo y el esfuerzo, desarrollar una gran nación. Una nación que no quedara limitada al centralismo del puerto o a la provincia de Buenos Aires, sino que sus habitantes ocuparan el amplio territorio que aún estaba desolado. Así lo diseñaron quienes en 1860 lograron la unidad del país en un solo Estado.

La vivienda popular fue una preocupación constante de los sucesivos gobiernos que, junto a la educación universal gratuita y obligatoria, daría lugar a la formación de una enorme clase media, asombro del mundo y motivo de orgullo para los argentinos.

Es así que el Banco Hipotecario Nacional sirvió largamente a los intereses sociales del Estado, que no puede ni debe desatender una función que le es propia, dar posibilidades de acceso a una vivienda digna. Y junto a esta finalidad, otra también fundamental, dar vigencia al sistema federal de nuestra Constitución, po-

sibilitando la ocupación equilibrada de nuestro amplio territorio.

La primera pregunta que nos formulamos fue si realmente era necesario vender el banco, pero no supieron respondernos. Nos explicaron que el banco necesita capitalización ya que no cuenta con los recursos necesarios para otorgar nuevos créditos. Pero esa situación se resuelve autorizando al Poder Ejecutivo a capitalizar el banco captando fondos externos que en este momento abundan y que se consiguen con mayores posibilidades cuando las garantías son hipotecarias.

También nos señalaron que hoy el Banco resulta innecesario frente a la amplia gama de créditos hipotecarios ofrecidos por la banca privada. A ello respondemos que ésta no es ni puede ser responsable de fijar políticas habitacionales, porque es el Banco Hipotecario Nacional el instrumento idóneo con que cuenta el Estado para sostener la buena política social de vivienda encaminada a resolver la angustiante carencia que hoy afecta a millones de familias argentinas.

Pareciera que la decisión de venta asumida por el Poder Ejecutivo —de la que pretende hacer partícipe o cómplice al Congreso— está signada simplemente por las necesidades financieras del Estado. Si es así, no corresponde analizar la importancia que tiene el Banco Hipotecario Nacional en la formulación de las políticas habitacionales integradoras de la Nación. Lamentablemente se deja de lado un importante aspecto social dando prioridad a lo meramente económico, porque de eso se trata: la venta puede ser sustanciosa; así lo estiman quienes han hecho cálculos acerca de lo que puede producir y ya se reparten los dineros.

Los cálculos sobre el valor que el banco tiene oscilan enormemente. Nadie sabe exactamente cuál es el valor real ya que no hay un estudio verdadero de sus activos. Sin embargo, sabemos que es una de las instituciones más rentables del país y sus aportes al Tesoro son muy importantes.

¿Qué se pretende con la venta? ¿Crear efectivamente un fondo fiduciario para financiar a la Nación y a las provincias en obras de infraestructura? Es indudable que el país requiere de este tipo de emprendimientos ante la parálisis casi total de las obras públicas del Estado. Si ese fuera el objetivo resultaría una buena idea crear este fondo, pero no a costa de desprenderse de la gran herramienta con la que cuenta el Estado para generar viviendas y, por ende, puestos de trabajo.

El listado de obras que se financiarían con el fondo fiduciario supera holgadamente lo que pueda obtenerse por la venta del banco. De ese modo han logrado que gobernadores y legisladores de origen provincial se presten al juego de ceder ante las presiones del Poder Ejecutivo.

En definitiva, de lo que se trata es de vender el Banco Hipotecario Nacional por lo cual el presente proyecto de ley nada tiene que ver con el rimbombante título que se le ha puesto. Hubiera sido más honesto decir, como lo manifiestan el jefe de Gabinete de Ministros y el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, que estos fondos se necesitan para pagar los servicios de este año de la deuda porque las cuentas no cierran; si así se manifestara, lo entendería, pero resulta contraproducente no sólo para el Congreso sino para el país en general que se usen artilugios para ocultar la verdadera intencionalidad.

Por lo expuesto adelanto mi voto negativo a esta autorización de venta que se oculta tras una buena idea. Si el fondo se creara con un auténtico y generoso espíritu federalista apoyaría con fervor el presente proyecto de ley, porque la Nación debe buscar el equilibrio en el desarrollo de las distintas provincias y regiones. Pero este proyecto no es federalista, generoso ni tiende a reparar los evidentes desniveles de progreso entre el centro y la periferia; es sólo una máscara que escuda el único plan cierto, cual es la venta del Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Roy).— Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Gómez Díez.— Señora presidenta: el bloque del Partido Renovador de Salta que integra el interbloque provincial votará negativamente el proyecto de ley de privatización del Banco Hipotecario Nacional por dos razones que brevemente expondré.

En primer lugar, el Banco es un instrumento de significativa importancia dentro de la política social del gobierno, y ello está expresamente reconocido en el mensaje por el cual el 10 de octubre del año pasado el presidente de la Nación eleva a consideración de esta Cámara el presente proyecto de ley.

El señor presidente textualmente expresa: "Vuestra honorabilidad sancionó la ley 24.143 que dispuso la reestructuración y saneamiento del banco que pasó a tener una orientación claramente mayorista. Desde entonces, el banco recuperó su papel de líder e impulsor de la vivienda a familias de ingresos medios y bajos,

otorgando financiamiento a plazos más largos y con tasas más accesibles que el resto del mercado, impulsando una reducción de las mismas en el resto del sistema financiero."

Más adelante agrega: "El fondeo de las nuevas líneas de crédito se basó en una mejor administración y en el recupero de la cartera de préstamos, en una reducción de costos internos y en la colocación de cédulas hipotecarias en los mercados de capitales locales y del exterior."

Vale decir que el propio gobierno nacional reconoce la utilidad del Banco y que no genera déficit; por el contrario, brinda ganancias al Estado nacional, que ascendieron a 300 millones de pesos en los dos últimos ejercicios. Además aquí se manifiesta que ha sido un instrumento útil, porque ha liderado la baja de tasas de interés en el mercado.

Es así que hoy el Banco Hipotecario Nacional acapara el 32 por ciento del mercado hipotecario en el país, que está en constante expansión. También queremos señalar nuestra disconformidad con la valuación que se asigna al banco, que sólo considera su patrimonio. Cuando se habla de vender una institución financiera también se debe medir la posibilidad de rentabilidad de esa entidad, que en este caso es óptima, ya que el mercado hipotecario se encuentra en expansión.

Por lo tanto, si este proyecto de ley se mide exclusivamente desde el punto de vista de la rentabilidad, será un pésimo negocio para el Estado nacional, que en lo sucesivo perderá un instrumento de indudable utilidad. Desde el punto de vista de las provincias, se ha planteado la constitución de un fondo fiduciario, como manera de motivar el apoyo de los gobernadores y de los legisladores del interior del país. Este sería el tercer fondo fiduciario que trata el Congreso.

En este sentido queremos señalar que este fondo fiduciario sería administrado por un consejo integrado por siete miembros. De ellos cinco serán designados por el Estado nacional y sólo dos por los gobernadores, por lo que se podrá advertir fácilmente el carácter federal que tendrá este fondo fiduciario. En realidad va a ser manejado discrecionalmente por el gobierno nacional.

Además los fondos que se envíen a las provincias en forma discrecional por parte del Estado nacional constituyen, en realidad, préstamos hacia nuestras jurisdicciones. Se trata de verdaderas hipotecas, porque los fondos tendrán que estar garantizados por la coparticipación federal de impuestos.

Vale decir que nuestras provincias sólo recibirán préstamos hipotecarios, que deberán ser reembolsados y que agravarán el endeudamiento de nuestras jurisdicciones, acentuando su situación de dependencia. En este sentido solicito a la mayoría, que seguramente va a votar por la afirmativa, que en lugar de instrumentar estos préstamos hipotecarios, envíe los fondos a cuenta de la coparticipación federal que se nos adeuda, ya que el Congreso y el gobierno nacional están en mora con respecto a la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal, conforme lo dispone la Constitución Nacional, que se debió haber tratado y aprobado antes del 31 de diciembre de 1996.

En este momento son más de cinco mil millones de pesos anuales los recursos que tendrían nuestras provincias y que ingresan a las arcas del Tesoro nacional. De manera que los fondos podrían entregarse a cuenta de lo que la Nación debe al interior de nuestro país.

Por todas las razones expuestas votaremos en contra de la iniciativa. (Aplausos.)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Rafael Manuel Pascual.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Adaime. — Señor presidente: resulta curioso que se proponga la privatización de una entidad tan importante como el Banco Hipotecario Nacional para constituir un fondo con destino a inversiones públicas, como si se tratara de una herramienta más, un medio entre tantos o una simple operación financiera para recaudar fondos. En mi opinión la privatización de esta entidad es un hecho político de tal magnitud que trasciende la mera financiación de obras públicas.

El Banco Hipotecario Nacional ha constituido y sigue siendo hoy un instrumento básico para que el Estado nacional tenga injerencia en el acceso a la vivienda propia. En ese sentido el acceso a la vivienda digna es el problema de 3 millones 500 mil habitantes de escasos recursos. Sin embargo, hoy se pretende privatizar un área indelegable del gobierno, lo que atenta contra un desarrollo social equilibrado y justo.

En el caso de que no se realizara la venta del Banco Hipotecario Nacional el proyecto prevé tres fuentes de financiación: los demás recursos que asigna el Estado, el producido del empréstito que contraiga y su propia renta. Esto significa que se pretende privatizar con el objeto de obtener fondos públicos en un año electoral.

Es aquí donde vemos la motivación que se esconde tras la venta de este bien del activo nacional, que por otra parte es necesario señalar que da utilidad.

El Banco Hipotecario Nacional brinda una utilidad de más de 300 millones de pesos. Reitero que ésta es la causa de la privatización, más allá de que algunos economistas especializados han expresado que el producido de la venta se destinaría al pago de intereses de la deuda externa.

Pareciera que nos olvidamos de que ciertas operaciones financieras sólo son viables si se desarrollan fuera de las reglas del mercado. Aun aceptando que existen otros métodos para cubrir las necesidades mencionadas como por ejemplo los subsidios explícitos, nadie puede negar la importancia que tiene la existencia en el marco del Estado de una institución especializada en el financiamiento de viviendas, que es un referente para esa actividad específica, tal como lo demuestra su fructífera labor a lo largo de tantos años.

En el proyecto en consideración encontramos incoherencias manifiestas: por un lado el deseo de que el Estado permanezca en la actividad, y por el otro las exigencias que impone el mercado para que la privatización se pueda llevar a cabo. En ese sentido su articulado obliga a la futura sociedad anónima privada a mantener líneas de crédito no comerciales para la construcción de viviendas en pequeñas localidades. Pero por otra parte asegura al nuevo ente su autorización para operar como banco comercial de acuerdo con el régimen de la ley 21.526, sus modificatorias y complementarias.

Conocemos el efecto que producen estas contradicciones a mediano plazo. Tarde o temprano, cuando las actividades no comerciales pongan en jaque el rendimiento del capital privado, se encontrará como solución el hacerlas desaparecer o el disimularlas por medio de algún subsidio estatal encubierto; con mayor razón si en el futuro el Estado es un socio minoritario, sin peso alguno en las decisiones estratégicas que adopte el directorio del nuevo ente.

No encontramos en el articulado de la ley una sola disposición que otorgue al Estado nacional injerencia en el directorio debido a su escasa presencia.

A colación de lo que vengo diciendo, en los fundamentos del proyecto se hace mención a una institución sueca; sin embargo, en este último caso, el Estado conserva el 38 por ciento del capital accionario; de este modo es fácil imaginar el poder decisorio que mantiene. En

nuestro caso la atomización del paquete accionario va a ser de tal magnitud que la institución Estado tendrá poca importancia en las decisiones que se adopten, lo que nos lleva a una consideración de aspecto técnico: sabemos que la factibilidad de vender la cartera hipotecaria está íntimamente ligada a la homogeneidad de las tasas de interés del mercado. Podemos asegurar que con las actuales tasas de mercado estamos en condiciones de obtener los recursos necesarios para que esta institución siga proveyendo a la construcción de viviendas populares y baratas. Creemos que por este motivo no es necesario privatizarla en virtud de una ley que es oscura y que no permite un debate profundo.

Además observamos que el 33 por ciento de los créditos hipotecarios son absorbidos por esta entidad, y que el 85 por ciento de los nominados en pesos le pertenecen. Por otra parte, la mala distribución que se hará por el fondo fiduciario tornará nulas las intenciones del proyecto, porque se tratará de dar préstamos y no superará los 200 millones de pesos lo destinado a las provincias. Este proyecto significa liquidar una de las pocas joyas que quedan de la abuela. Sólo falta rematar a la abuela.

Por lo expuesto la bancada Autonomista se opone férreamente a la privatización del Banco Hipotecario y solicita que la iniciativa vuelva a comisión para que se la discuta seriamente, ya que las consecuencias de este proyecto serán lamentables en el futuro. Estos 3.200 millones de dólares que se podrán obtener no serán usufructuados en el país debido a su mala distribución y a la mala técnica legislativa que contiene este proyecto de ley. Por ello nuestra bancada vota en contra. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. Pando. — Señor presidente: los diputados de la oposición hemos solicitado reiteradamente en comisión que este paquete legislativo sea tratado fraccionadamente y conforme a cada uno de los temas que pretende legislar. El primero de ellos se vincula con la situación de los adjudicatarios de los créditos del Banco Hipotecario Nacional. A lo largo y lo ancho del país hemos dicho que hay más de 70 mil compatriotas que sufren y tienen la expectativa de que los representantes del pueblo poseamos suficiente sensibilidad y podamos resolver el problema de los créditos por los cuales se han constituido hipotecas que a muchas familias les resulta imposible afrontar ya que constituyen una carga financieramente inviable para sus presupuestos.

Por eso con muchísimo énfasis los diputados González Gaviola y Fayad han explicado la necesidad de que, antes de largar al mercado una institución que se dice ser un banco, nos preocupemos por su real contenido: es decir, por la gente que creyó en el Banco Hipotecario Nacional y que todos los meses, cuando recibe la liquidación de su crédito, en vez de deber menos resulta que siempre debe más. Esta cuestión no fue tratada en comisión. La oposición diariamente se afanó y preocupó para que el oficialismo nos entendiera. No podemos dejar desamparados a todos los adjudicatarios. Hoy, en un artículo perdido dentro de este proyecto de ley omnibus, se pretende hacer creer que habremos de llevar tranquilidad a las familias argentinas.

Quiero retomar las palabras de la señora presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad cuando se trató en este recinto la insistencia en la sanción original que reglamentaba la actividad teatral. En esa oportunidad ella sostuvo que el teatro tenía que ser financiado con fondos del Estado nacional porque representa inversión y educación. También dijo que se iba a desoir al Poder Ejecutivo por las tantas veces que se lo había obedecido, en función de un bien supremo cual es el de financiar al teatro.

Apelo a la bancada oficialista para que con el mismo espíritu y la misma sensibilidad de entonces piense en cada una de las familias argentinas y resuelva girar este proyecto a comisión a fin de que se traten por separado los tres temas que son neurálgicos en este asunto.

Por otra parte, me llama poderosamente la atención que esta Cámara esté tratando una iniciativa referida a un fondo fiduciario para infraestructura regional cuando resulta incompetente para ello. En este sentido, si leemos los artículos 1º y 2º del proyecto vamos a llegar a la conclusión de que el Senado es la Cámara de origen competente. ¿Por qué digo esto? Porque el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional en su segundo párrafo dice textualmente: "Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para esas iniciativas, el Senado será Cámara de origen." Esto significa que en materia de privatización del Banco Hipotecario Nacional o por lo menos en lo relativo a la creación del fondo fiduciario, la Cámara de Diputados no tiene competencia para actuar como Cámara de origen.

Me voy a sumar a lo solicitado por el diputado Trettel Meyer cuando, por otras razones, pidió la vuelta a comisión de este proyecto, violatorio de muchos artículos de nuestra Constitución Nacional.

Como aporte quiero advertir la falta de prolijidad y esmero en el estudio y análisis de este proyecto. La existencia de una determinada mayoría en múltiples comisiones no nos releva de la responsabilidad de decir que esta Cámara no es competente para la creación de un fondo fiduciario.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el mal precedente que se ha creado de establecer una hora para votar, con lo cual las mociones de orden no pueden ser consideradas en el momento en que se plantean, solicito que cuando haya quórum y se cumpla la hora indicada para votar se considere la moción de vuelta a comisión de este proyecto por falta de competencia de esta Cámara de Diputados para entender en el tema del fondo de infraestructura regional.

Para terminar quiero señalar que mi partido, que no sólo se llama liberal sino que tiene enraizada esa filosofía, no puede entender la privatización de este banco. Ser liberal no quiere decir ser irresponsable; ser liberal quiere decir liberar de las obligaciones al Estado, pero de aquellas que son secundarias, no cuando el rol fundamental del Estado no puede ser cumplido por otro. La preservación de la educación, de la seguridad y del bien social protegido, que es la familia —y obviamente su vivienda—, no pueden ser delegados.

No tenemos que considerar que ésta es la privatización de un banco, porque no se trata de un banco. Aquí no hay un problema de equilibrio de caja que tenemos que resolver o una cuestión vinculada con la oferta y la demanda del mercado.

Esta es una entidad que tiene que resolver el bien social de la vivienda de cada uno de los argentinos. Esto no es Telecom, no es YPF, no es agua, ni tampoco es energía. (*Aplausos.*)

Se trata de la tranquilidad de 33 millones de habitantes, porque los que tenemos vivienda, para vivir mejor, tenemos que tratar de que los que no la tienen la posean.

Entonces, si creemos que en este recinto estamos privatizando un banco, nos engañamos; estamos privatizando el rol social fundamental del Estado. (*Aplausos.*)

Además esto tiene el agravante de que le estamos diciendo a las provincias que los recursos serán coparticipados.

Sr. Presidente (Pascual). — Debo advertirle, señora diputada, que se ha agotado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sra. Pundo. — Permítame terminar, señor presidente.

Esto es un crédito, no es una coparticipación. Si se tratara de una coparticipación no habría que devolver nada. ¿Y con qué vamos a devolver? Con lo que hoy está diciendo el Fondo Monetario Internacional al hablar de intervenir la situación financiera de las provincias. ¿Y esto por qué? Porque están excedidas en sus gastos o no manejan bien sus finanzas. Entonces, ¿para quién va a ser el fondo fiduciario? Para la Nación. ¿Y para qué? Para que lo maneje el jefe de Gabinete de Ministros. Pero aquí nos estamos confundiendo; el jefe de Gabinete de Ministros es un empleado administrativo de jerarquía de este Congreso (*Aplausos*), y le estamos dando el manejo de un fondo extrapresupuestario.

Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros habilitar algo más allá de la Constitución? Además hoy hemos visto sobre las bancas un texto que dice: "podrá"; y yo pregunto: ¿cómo va a poder modificar lo que nosotros aprobamos, que es la incorporación a un presupuesto?

En consecuencia, estamos creando un monstruo. El Poder Ejecutivo dice que se obtendrá una cantidad de dinero que obviamente no serán los dos mil millones de pesos mencionados porque sabemos que ese valor es ficticio. ¿Y esto para qué? Para que muchísima gente del oficialismo que tiene sensibilidad social tenga por lo menos una purga de conciencia al querer aprobar este proyecto, porque les dicen que se harán obras en sus provincias, pero las obras que promete el anexo requieren no menos de 50 mil millones de pesos: todo un presupuesto nacional.

Si realmente esas obras son necesarias y convenientes, utilicemos el mejor sistema que es el de concesión de obra pública por riesgo de la actividad privada.

Por las razones expuestas solicito que el proyecto vuelva a comisión. No somos competentes para entender en esta materia del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. No debe aprobarse la privatización del Banco Hipotecario Nacional porque ello importaría privatizar el rol primario del Estado. Por eso requiero que la iniciativa vuelva a comisión para que allí se resuelva el problema de cada uno de los adjudicatarios, se dé un precio justo a sus viviendas y se recalculen todas y cada una de las amortizaciones que fueron hechas en el transcurso de sus vidas. Y por último pido que no

tengamos vergüenza de hacer las cosas bien. (*Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: he de anticipar las razones por las cuales el bloque Demócrata Progresista votará negativamente el presente proyecto.

Se arguye en favor de la privatización del Banco Hipotecario Nacional la necesidad de capitalizar nuestro sistema financiero destinado a la vivienda. Esta argumentación es cierta porque nuestro país destina apenas el 3 por ciento de su producto bruto interno al otorgamiento de créditos para la vivienda, de los cuales más de la tercera parte es cubierta por el Banco Hipotecario Nacional. De allí la imperiosa necesidad de capitalizar los sistemas de financiamiento para la vivienda que en otros países de desarrollo inferior o similar al de la Argentina oscilan en no menos del 15 o 20 por ciento del producto bruto interno.

También se arguye en favor de la privatización la necesidad de aventar los riesgos derivados de administraciones desastrosas como las que en algunas oportunidades —no muy cercanas o no muy lejanas—, conociera el Banco Hipotecario Nacional, con toda la carga negativa que ello implica.

Sin embargo, deben sopesarse otros elementos. En primer término, el banco ha dejado de ser un banco minorista para transformarse en mayorista. Por lo tanto, el riesgo de aquellas administraciones dadas que lo único que consiguieron fue transformar al Banco Hipotecario Nacional en la hoguera de la hiperinflación argentina sin resolver problemas de vivienda, hoy prácticamente no existe.

Por lo demás, es evidente que el banco ha jugado en estos últimos años un papel de regulador de las tasas de interés en el mercado crediticio destinado a la vivienda. Ese papel, que ha contribuido eficientemente a disminuir las tasas de interés, puede perderse en el momento en que el banco deje de tener una administración que atienda primordialmente al interés social que él persigue.

Con esto que estoy diciendo señalo que puede haber argumentos a favor y argumentos en contra en torno de una decisión de tanta significación como la que estamos tomando. Pero es evidente que el proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo, y que respalda la mayoría, termina no sólo con el Banco Hipotecario Nacional como institución estatal sino que además dilapida el

producido eventual de su venta, cuando evidentemente debió existir una finalidad absolutamente congruente y coincidente con los motivos, razones y fundamentos de la existencia del mismo Banco Hipotecario Nacional.

Como una zanañoria que impulsa a los que van detrás del proyecto se ha enunciado un largo catálogo de hipotéticas obras públicas que serían las destinatarias del producido de la venta del Banco Hipotecario Nacional.

Se deja en manos del Poder Ejecutivo la administración de esos recursos porque el Fondo Fiduciario será manejado por siete directores, de los cuales cinco van a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional. Es decir que 3 mil millones de peso, —lo que se estima recaudar por la venta de las acciones del banco— serán manejados pura y exclusivamente por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo nacional, sin que el Congreso, que es el que debe constitucionalmente aprobar el gasto público, tenga absolutamente nada que ver ni nada que decir en cuanto a cómo y para qué se utilizarán esos recursos.

No se suplica la tarea del Congreso por el hecho de que se crea una comisión bicameral, que además aparece contrapuesta con la otra comisión bicameral de la ley 23.623. Por eso, si se hubiese decidido realmente reinvertir, no en gastos electorales sino en inversiones acordes con las finalidades y propósitos del Banco Hipotecario Nacional, el producido de su privatización debería incontestablemente destinarse a la vivienda. En esto deberíamos ser muy claros: el Banco Hipotecario Nacional, el FONAVI y los sistemas privados de financiación de la vivienda atienden las demandas de sectores medianos y altos respecto de su capacidad económica. Desgraciadamente existe un sector muy grande de la población argentina que vive en condiciones realmente terribles, más allá de los niveles mínimos imposibles de concebir en una sociedad que pretende ser civilizada, a quien el sistema financiero público o privado de nuestro país no llega ni llegará jamás.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Natale. — Me estoy refiriendo a esos 600 mil ranchos y casillas que el censo nacional de 1901 ubica en el territorio de nuestro país. Allí no llega el Banco Hipotecario ni el FONAVI, y menos va a llegar la banca privada. Por lo tanto, quien debe llegar a esos lugares es el Estado, porque ese es su rol. La atención de estos pro-

blemas de miseria escandalosa es obligación impostergable del Estado nacional, pues la actividad privada no lo va a hacer.

Si realmente se quiere privatizar el banco por las motivaciones que se invocan en favor de esa tesis, el destino de esos fondos no debería ser el de conseguir recursos electoralistas dibujados en un proyecto —pues los legisladores que habrán de probarlo luego no tendrán ninguna capacidad de decisión—, sino invertir para satisfacer el requerimiento de viviendas para los sectores que estoy enunciando...

Sr. Presidente (López Arias). — Se ha agotado su término, señor diputado.

Sr. Natale. — Si no me interrumpe, podré terminar, señor presidente.

Me refería a invertir para satisfacer el requerimiento de viviendas para los sectores a los que justamente el Estado debe atender.

Por eso nosotros votaremos en contra de este proyecto de ley. Entendemos que la privatización del banco en los términos propuestos no resolverá ningún problema futuro de vivienda y, además, estamos convencidos de que el destino de los fondos está absolutamente reñido con las finalidades que motivaron la existencia del Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Bravo (L. A.). — Señor presidente: quienes hemos estudiado algo de filosofía recordamos a nuestro profesor habiéndonos del deber ser y del ser. Luego de escuchar a la señora diputada Londo, quien ha ilustrado a los señores diputados con precisión de conceptos, me ha quedado en claro cuál es el deber ser respecto de este proyecto de privatización del Banco Hipotecario, aunque se pretenda disfrazarlo con otro nombre. Pero este país se maneja con el ser, que en esta situación —para nosotros, los diputados— siempre estuvo dado por el atropello a parte del Poder Ejecutivo.

Primero atropello: "Si los señores diputados no se centran en sus bancas igualmente voy a privatizar el Banco Hipotecario, como lo hice con el correo y los aeropuertos; pero en vez de gastar la plata en obras públicas —para lo cual ustedes podrían mejorar el proyecto—, vamos a destinarla al pago de la deuda externa". Por supuesto, ante algo así, quienes provenimos del pueblo y de las provincias preferimos sentarnos a discutir a efectos de que lo que se consiga sea destinado a las provincias.

Segundo atropello: "Una vez que hayamos discutido, hay que dar quórum". A todos aque-

Hos que se hacen los desentendidos quiero señalar que quienes no contribuyen al quórum lo hacen para que no sea sancionado determinado proyecto, pues si se sientan en sus bancas están posibilitando la sanción de la iniciativa; nada más que por eso. Y la semana pasada quien habla no dio quórum porque no quería que se aprobara este proyecto. Voy a ser claro y voy a decir a los señores diputados —a los pocos que están interesados en el país sobre el tema, porque aquí nadie llora más de cinco minutos por los distintos temas— que quien habla no quería dar quórum, no por una cuestión filosófica, pues en definitiva estudiando lo que ha hecho el Banco Hipotecario por mi provincia, me di cuenta de que, como ocurre con los organismos nacionales, a las provincias periféricas muy poco se ha destinado. Y a fuer de ser sincero no hemos conseguido más del 1,18 por ciento de todas las casas y viviendas hechas por el Banco Hipotecario en el país, cifra que desde mi punto de vista de sanjuanino me parece muy poca. Tan poca cosa es que no vale la pena preocuparse.

Entonces lo que yo quería —y traté de conseguir— era que de los 1.500 millones de dólares, que supuestamente se van a obtener con la privatización, 200 millones de dólares fueran para mi provincia. Y como yo tenía la ventaja de ser opositor, los mismos diputados oficialistas me pedían que presionara al Ejecutivo para conseguir esos fondos. No solamente eso: también senadores de mi provincia, entre ellos el senador Gioja, me pidieron que no alojara. Realmente necesitábamos los fondos para la provincia, aunque teníamos dudas sobre cómo serían manejados una vez conseguidos.

Por supuesto, durante la consideración en particular vamos a solicitar modificaciones a los distintos artículos, por aquello de las distancias que existen entre el deber ser y el ser. Aunque vale adelantar una explicación de cómo va a ser finalmente el reparto de los fondos. Va a aparecer una empresa constructora y le pedirá al señor gobernador que le apruebe el proyecto a través de la Cámara de Diputados de la provincia para garantizarlo bajo coparticipación federal. Por supuesto que esto va a provocar sospechas de una gran corrupción en el reparto de fondos porque tanto el gobernador como la Cámara de Diputados de la provincia darán los fondos a la empresa constructora amiga del *establishment*. ¿Y a quién le van a dar la plata? A los gobiernos amigos del poder central.

No habrá ninguna posibilidad para que los diputados podamos controlar cómo se hará el

reparto de los fondos, que supuestamente se van a distribuir entre todas las provincias de la República Argentina.

Por eso tengo que ser claro. Para mí no hay un problema de conciencia ni filosófico pues el Banco Hipotecario en lo que respecta a la provincia de San Juan muy poco se ha interesado a lo largo de la historia.

Mi preocupación se orienta a otras cosas. Me preocupa que se esté vendiendo un bien del Estado para destinarlo pura y exclusivamente a una sola campaña electoral, y esto es malgastar el dinero.

Me preocupa porque no podremos saber cuáles son las obras que se harán. También me preocupa porque yo quería que se estableciera en el proyecto la prioridad de obras públicas para el país. En el caso de San Juan necesitamos un hospital que no tenemos, y esta obra no se contempla.

Asimismo necesitamos una ruta —la 150—, que une Patquía con Jáchal y que conecta todo el litoral argentino con el Pacífico: así podremos transportar todas las mercaderías, dando desarrollo a una zona abandonada, a través del Mercosur, uniendo Chile y Brasil.

Me preocupa porque tenemos la mina de cobre tal vez más grande de Latinoamérica, que es la de Pachón, y no podemos llegar a ella por la Argentina sino que debemos hacerlo por Chile: San Juan no tiene caminos y necesita de ellos.

Además me preocupa porque nos estamos quedando sin agua. Contamos con 45 mil hectáreas bajo riego, es decir, una superficie similar a la de una gran estancia de la provincia de Buenos Aires. Se quiere construir el dique Tambolar y tampoco se lo puede hacer.

Me preocupa porque el gobernador justicialista Escobar me pidió que presionara, que insistiera y no alojara a fin de conseguir estos fondos, ya que él no los podía dar porque no podía ir en contra del mandato de su partido. Y entonces el diputado de la oposición era el que tenía que venir a presionar para lograr los fondos para la provincia. Aseguro a los señores diputados que si lograba estos 200 millones de pesos para la provincia de San Juan, la semana pasada me sentaba a mi banca y contribuía al quórum, votando para que esta ley fuera sancionada.

Alguna vez tenemos que hablar con absoluta claridad. Al comienzo de mi alocución hice referencia al deber ser. La claridad de conceptos la tuvo la señora diputada Pando, y no nos podemos apartar en nada de lo que ella dijo. Lo

cierto es que ahora se va a producir una gran pelea entre las provincias; una repartija que posiblemente se convierta en un nido de corrupción debido a la forma en que se van a entregar los fondos. Seguramente las provincias más chicas, las que tienen menor peso electoral, no serán tenidas en cuenta, y esto es lo que me preocupa.

Por lo expuesto, en la consideración en particular insistiremos para que la comisión conformada por diputados y senadores no sólo controle sino que también tenga algún tipo de influencia sobre los proyectos que se encaren y las decisiones que se tomen acerca de cómo se va a gastar el dinero en las obras públicas que se realizarán. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Gutiérrez. — Señor presidente: el partido Demócrata de Mendoza votará en contra del presente proyecto por las razones ya apuntadas por los legisladores que han adelantado su posición negativa, a las que quedan pocos elementos por agregar.

Es una verdad conocida que el peronismo es pícaro y habilidoso para ganar elecciones; siempre recurre a cosas novedosas, pero en esta oportunidad han llegado a un punto de ineficiencia tal que de pícaros y vivos han pasado a ser torpes y zonzos, porque esto les va a salir mal.

En los últimos años no hubo antecedentes que iguallen la cantidad de oferta pública y privada de crédito hipotecario que existe en este momento, en el que se está financiando a plazos mucho más largos que los que se han ofrecido en los últimos cincuenta años y con tasas de interés en dólares y en pesos que mensualmente van disminuyendo, si bien no en forma significativa pero con tendencia declinante.

Además, las condiciones de acceso al crédito en lo formal se han facilitado y vemos la canalización de fondos internacionales en créditos hipotecarios no sólo en las filiales de los bancos nacionales sino en los extranjeros.

¿Por qué se produce esta situación en términos de mercado? Ello ocurre porque el Banco Hipotecario Nacional funciona bien, pues está actuando como banco testigo, como moderador de las tasas de interés y como generador de la extensión en los plazos de los créditos.

También su actuación tiene un efecto multiplicador —como lo han expresado muchos economistas— en la actividad económica y en la generación de empleo en la industria de la construcción privada y pública.

¿Por qué dije que los peronistas de pícaros han pasado a ser torpes? Porque van a transformar una entidad que está funcionando bien. Este banco testigo, que obliga al resto de la banca nacional e internacional a financiar, al retirarse de la oferta se volcará a un tipo de actividad de construcción que tiene un infinitamente menor efecto multiplicador en la inversión y el empleo, como es el de la obra pública. El señor diputado Bravo ya ha adelantado los vicios que presenta la obra pública en manos del Estado nacional y los gobiernos provinciales. En consecuencia, ésta es una tremenda torpeza.

Quiero reiterar lo que expresamos en la comisión. Aquí se van a tomar acciones penales contra el presidente y el directorio del banco porque se está vendiendo una ficción. Quiero señalar que por lo menos encontramos estos delitos, que seguramente recaerán sobre los funcionarios mencionados en caso de aprobarse este proyecto. En primer lugar, el delito de abuso de autoridad, en las tres modalidades previstas por el artículo 248 del Código Penal. En segundo término, el delito de estafa por administración fraudulenta, de acuerdo con el inciso 7º del artículo 173 del Código Penal. También encontramos el delito por la presentación de informes y balances falsos acerca de la situación económica del banco, según el artículo 300 del Código Penal. Finalmente hallamos el delito de prestar consentimiento en concurso, a actos contrarios a la ley, al estatuto y al reglamento de la entidad, en función del artículo 301 del Código Penal.

Ya sabemos lo que ocurre cuando se venden bancos oficiales. Ha ocurrido en mi provincia, Mendoza, donde a diferencia de lo que señalaba el señor diputado Bravo existe un gran cariño hacia...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia ruega al señor diputado que finalice su exposición.

Sr. Gutiérrez. — Así lo haré, señor presidente.

En mi provincia los efectos de un sismo fueron de alguna forma atenuados por el Banco Hipotecario Nacional. Cuando se vendieron el Banco de Mendoza y el Banco de Previsión estaban quebrados y la provincia absorbió más de 600 millones de pesos de un fondo residual. Así han aparecido las figuras penales contra los directores por balances falsos.

Ello ha ocurrido con una gran cantidad de bancos privados, que cuando se venden se advierte que los balances son falsos por estar inflados. Aquí los balances están en esa situación. Por eso el señor presidente del Banco Hipote-

cario Nacional, además de haber cometido el delito de contratar costosas auditorías para determinar un valor que no surge de los estados contables, dice por televisión que la entidad vale seis mil, tres mil o mil quinientos millones de pesos. En definitiva, nadie conoce cuál es su valor, porque esto está hecho en base a créditos inexistentes y valores contables que no guardan ninguna relación con la realidad económica y el valor de las propiedades. Los compradores van a advertir esta situación.

En consecuencia, quiero terminar señalando que el bloque Justicialista, además de hacerse una trampa a sí mismo y transformar una picardía en torpeza, pintará los dedos a un funcionario como el actual presidente del Banco Hipotecario Nacional y a un buen directorio, que han conseguido lo que hoy se les está reconociendo. Sin embargo, como una elección vale todo, terminarán con los dedos pintados por la torpeza que está cometiendo el bloque Justicialista al aprobar este proyecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — A continuación expondrán los señores diputados Gorini y Solanas, quienes dispondrán de sólo dos minutos para hacerlo. En caso de que no les alcance ese lapso, podrán insertar sus exposiciones en el Diario de Sesiones.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gorini. — Señor presidente: esta situación se parece al plazo que se otorga a un condenado a muerte. Evidentemente, aquí hay un condenado a muerte, que es la vivienda de los trabajadores. (Aplausos.) El Estado abandona la función social de la atención de la vivienda del trabajador. No es posible realizar una intervención debidamente fundamentada en dos minutos, pero quiero expresar que se está entregando un patrimonio que ha estado en actividad y que ha sido gestado durante más de un siglo. Además esto se hace en un momento en el que la securitización aparece como el gran negocio de la actividad hipotecaria. De modo que se pretende entregar un negocio adicional junto con un banco que tiene la mayor cartera hipotecaria y el 50 por ciento de las viviendas populares.

Por medio de esta iniciativa se intenta privatizar el sueño de la casa propia del trabajador, y en consecuencia la posición de una vivienda por parte del obrero pasa al campo de las utopías.

El Banco Hipotecario Nacional es la gran obra de la gestión social y económica de diversos gobiernos que, sin llegar a ser socialistas, tuvieron sensibilidad para atender esa necesidad del pue-

blo. Por esa razón deseo rendir homenaje a los trabajadores bancarios que a lo largo de un siglo gestaron una entidad que hoy la mayoría de esta Cámara va a entregar aunque se trate de una institución que ha poblado nuestro territorio de viviendas para los obreros. Seguramente a partir de este momento en nuestro país habrá más *countries* y villas miseria, todo un símbolo del modelo que el oficialismo ha instalado en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — Con el objeto de que se respeten los acuerdos logrados en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito al señor diputado Solanas que exprese brevemente el sentido de su voto.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solanas. — Señor presidente: en primer término deseo aclarar que las facultades que me otorgan la Constitución Nacional y el reglamento de esta Cámara no deben ser obviadas por acuerdos logrados por los bloques mayoritarios, que pueden terminar cercenando mis derechos básicos como legislador.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia recuerda al señor diputado por Buenos Aires que el cuerpo ha adoptado una resolución y que si desea formular una moción para ampliar el plazo será sometida a votación oportunamente.

Sr. Solanas. — En su momento plantearé una moción con el objeto de que se me permita hacer uso de la palabra por el tiempo que fija el reglamento. De cualquier modo comenzaré por expresar algunas ideas.

Hoy es un día bochornoso, penoso y de vergüenza para esta Cámara. El Banco Hipotecario Nacional fue respetado y sostenido a lo largo de más de un siglo por todos los gobiernos porque se trataba de defender un derecho social indelegable que no puede ser cercenado: el derecho a la vivienda.

Es una verdadera vergüenza lo que va a suceder con esta entidad, que finalizó un ejercicio con 300 millones de pesos de utilidad. Este remate es una mentira más entre los procesos privatizadores que la Corriente Grande denunció consecuentemente en estos años. También en los casos de las privatizaciones de YPF y Gas del Estado se prometió que se solucionarían los problemas de los jubilados y los trabajadores. Fueron todas mentiras, como es una más este fondo fiduciario. Digo esto porque en su artículo 17, este hipócrita proyecto de ley que hoy se pretende sancionar, entrega el poder de decisión a los accionistas privados, que termi-

nán eligiendo la mayoría de los integrantes del llamado Fondo.

Aquí se está cercenando un derecho social que el peronismo defendió a lo largo de su historia: el derecho a la vivienda digna. Como regalo el menemismo puso al frente de esta entidad a una ex diputada que prácticamente tuvo que escapar por los escándalos y que permitió el aumento de la tasa que pagaban miles de familias por los créditos hipotecarios, del 6 al 9 por ciento. Hoy esas familias no pueden pagar las cuotas y están amenazadas por el desalojo. Se está poniendo a miles de familias argentinas contra la pared, porque esas casas fueron ampliamente revaluadas, como lo han explicado varios de los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

Me cuesta creer que diputados de extensa trayectoria, como la compañera Irma Roy, de gran sensibilidad social, como Lorenzo Pepe...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia ruega al señor diputado que redondee su exposición y que en todo caso posteriormente formule moción de reconsideración de la decisión oportunamente adoptada por el cuerpo.

Sr. Solanas. — ...y tantos otros señores diputados y ex compañeros estén votando una iniciativa que una vez más destruye uno de los puntales del patrimonio público y de la defensa del derecho a la vivienda de miles de argentinos. Esto es un despojo a las esperanzas de esas familias y de la juventud. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

La Presidencia le recuerda que restan al bloque que integra trece minutos del tiempo asignados.

Sr. Alvarez (C. A.). — Señor presidente: después de casi ocho años de gobierno menemista pensábamos que en la Argentina se podía debatir sin apremios electorales o coyunturales una nueva vinculación entre lo público y lo privado.

Digo esto porque cuando la banca privada, económicamente más concentrada, comenzó a presionar para privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin ninguna especulación partidaria ni mezquina casi todos los bloques representados en esta Cámara defendimos esta institución como un instrumento financiero fundamental para los pequeños y medianos empresarios y productores.

La dirigencia política defendió una institución con criterio estratégico, sin pensar en la próxima coyuntura electoral y sin anteponer

banderías partidarias. Por esa razón ahora deberíamos estar discutiendo una política de empleo y otra de vivienda, pensando en cómo fortalecer y consolidar una institución que debe evitar la segmentación del mercado de viviendas en nuestro país.

Hago esta afirmación porque el proceso privatizador no demostró en la Argentina que los 25.000 millones de dólares recaudados por ese motivo significaran fondos públicos destinados a asistir a una estrategia de crecimiento productivo y mucho menos para morigerar la tendencia a la desigualdad y a la concentración económica que se produjo a partir de la vigencia de este modelo económico.

Cuando se habla del fondo fiduciario para financiar obras de infraestructura regional nos llegan a la memoria viejas promesas incumplidas del oficialismo, cuando allá por 1991 ante cada privatización decía que los recursos a obtener serían destinados a créditos blandos para la pequeña y mediana empresa.

Cuando se privatizó YPF dijeron que los fondos provenientes de la venta de esas acciones tendrían por objeto mejorar sustancialmente la situación de los jubilados y pensionados. Cuando se redujo la alícuota aplicable a las bebidas cola, por medio de un proyecto de ley que tenía nombre y apellido, se dijo que a partir de esa baja mejoraría el empleo en la Argentina.

No mejoró la situación social ni el empleo, y la brecha entre lo público y lo privado se fue agrandando. Hoy tenemos fragmentado el sector de la educación; tenemos segmentado el mercado de la salud. Tenemos una educación cada vez más deficiente en lo que respecta a la escuela pública, tenemos una salud cada vez más deficiente respecto de quien tiene que ir al hospital público. Ahora vamos a tener una política de vivienda que se quedará sin el principal instrumento para que no se segmente el mercado inmobiliario y el de la vivienda.

Yo pregunto: ¿no era el momento en la Argentina de discutir cómo se reconstruye lo público a partir de las necesidades estratégicas de los argentinos? A nadie escapa que la necesidad vital de los argentinos es el tema de la vivienda. Los censos de 1990 y 1991 arrojan un déficit de vivienda cercano a las 2.300.000 unidades habitacionales. ¿Quién de los aquí presentes puede pensar que a partir de la privatización del Banco Hipotecario Nacional se va a implementar una política de vivienda que contemple la situación de los sectores medio y bajo de la sociedad y de los sectores populares?

Entonces, haciendo nuevamente hincapié en lo privado, vamos a satisfacer la demanda de un segmento de la sociedad y seguir agrandando la brecha de desigualdad y de fractura que tiene nuestro país hoy. Justamente un Estado ya transformado debería ser el instrumento equilibrador de las relaciones productivas, laborales y sociales de la Argentina. Se sigue insistiendo en mecanismos que en materia de vivienda van a seguir acentuando la fractura social en la Argentina de hoy.

Quando planteamos el debate del empleo dijimos que había que aprovechar la liquidez del mercado internacional para poder endendarnos a veinte años con un bono destinado a la construcción de viviendas para los sectores medios y populares, porque sabíamos y sabemos que la industria de la construcción es una industria de mano de obra intensiva y también es multiplicadora de la actividad económica en nuestro país. En cuanto al tema de la infraestructura sostuvimos que debíamos aprovechar la integración del Mercosur a fin de que cada uno de los países que lo conforman aportara un porcentaje del producto bruto interno para mejorar sus infraestructuras. No solamente íbamos a mejorar la infraestructura sino también crear empleo en las zonas marginales y más desfavorecidas del país.

Hoy estamos prácticamente desmantelando una de las instituciones más importantes para los sectores populares, y como ya se ha dicho aquí en varias oportunidades se lo está haciendo para beneficiar la campaña electoral del oficialismo.

No me quejaría si algunas transformaciones económicas y sociales durante el período electoral mejorarán las chances del oficialismo, si beneficiaran centralmente a la soledad, a los sectores que más carencias tienen en la Argentina.

Pero este proyecto no sólo se inscribe en la lógica electoral, sino que además desampara a las personas y a las familias que miran al Estado con la esperanza de que éste aplique políticas eficientes para mejorar sus condiciones elementales de vida.

Nos hubiera gustado —ésta es una necesidad de la gente— que la transformación de estas instituciones, su apertura al capital privado y su capitalización no se discutieran, desde la lógica de las necesidades de coyuntura o electorales. Aquí se piensa en obras públicas para seis meses o un año, en caso de que las haya.

No sólo hay un tironeo para ver cómo se distribuyen los fondos sino también en el seno del

gobierno nacional acerca de si estos fondos tienen que ir —como sostiene el principal asesor del ministro de Economía— a pagar la deuda externa argentina.

No sólo se trata de una política de *lobby* o de ver cómo se distribuyen los fondos, sino que también hay otro actor que está condicionando a la Argentina para los próximos tres años —inclusive después de que termine el mandato del presidente Menem—, en relación con su política económica. Como parte de ese condicionamiento va a presionar para que los fondos provenientes de la privatización del Banco Hipotecario Nacional se destinen al pago de la deuda externa.

Ya sabemos cuál es la resolución del conflicto en la Argentina cuando por un lado tironea la concepción nacional de un Estado que quiere impulsar políticas de producción y políticas sociales, y por otro lado presionan los organismos multilaterales de crédito. En los últimos años siempre ha terminado por prevalecer la política de condicionamiento y de presión de los organismos multilaterales de crédito.

Advertimos a los legisladores de la provincia de Buenos Aires y a los diputados del bloque oficialista que estamos creando un antecedente que nos puede costar muy caro porque la voracidad de estos sectores concentrados no va a terminar con el Banco Hipotecario Nacional; van a volver a la carga con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y con el Banco de la Nación Argentina.

Si a un peronista le planteaban la privatización del Banco Hipotecario Nacional no dos o cuatro años atrás, cuando se produjo la reconversión liberal del peronismo, sino hace sólo seis meses, hubiera dicho que era algo imposible porque el Estado debía conservar instituciones estratégicas que dieran cuenta de la situación de aquellos que el sector privado no podía proteger.

Y esto no se debe a la maldad del sector privado sino a la lógica que aplica, que es la de máxima rentabilidad. La lógica del Banco Hipotecario Nacional no es la de máxima rentabilidad sino la de una institución confiable, sin déficit, pero al mismo tiempo con una función social.

Sr. Presidente (López Arias). — Ruego al señor diputado que redondee su exposición porque se ha agotado el tiempo del que disponía.

Sr. Alvarez (C.A.). — Creímos que había llegado el momento en la Argentina, después de la experiencia privatizadora, después de la crisis de los marcos regulatorios, de discutir una estrategia de crecimiento productivo. Creímos que

podíamos debatir en serio, más allá de lo táctico, un nuevo tipo de Estado en la Argentina. Pero no fue así. Evidentemente, nos equivocamos; sigue dominando casi compulsivamente la lógica más crudamente mercantilista, hoy disrazada de un falso federalismo en el terreno de la vivienda.

No veo por qué no discutimos la ley de participación federal, como lo establece la Constitución, para que no tengamos que discutir con las provincias qué zanahoria se les va a dar en cada caso para que ayuden en la votación, cosa que los mismos diputados del bloque oficialista saben que es irracional desde el punto de vista de los intereses e irresponsable en el sentido de mantener una relación distante entre el Estado y el mercado en nuestro país.

Por todo ello solicitamos el pase a comisión de este proyecto de ley y apoyamos la propuesta formulada por el señor diputado González Gaviola en el sentido de que la votación sea nominal a fin de dar cuenta de cada postura a aquellos hombres y mujeres que a nivel nacional están desesperados sintiendo que ni siquiera van a poder disfrutar de la vivienda propia a la que antes podían acceder en la Argentina. (Aplausos.).

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Le recuerdo, señor diputado, que a su bloque le resta muy poco tiempo.

Sr. Storani. — Señor presidente: este debate está inscrito en una falsa polarización, que ha sido la tendencia que permanentemente planteó el actual gobierno.

Se ha dicho con mucha frecuencia que el proyecto privatizador en la Argentina es equivalente a un proceso de modernización. De este modo se intenta dividir las aguas entre quienes alzan la bandera de la modernización y las transformaciones, y quienes se oponen a la modalidad de la privatización propuesta por el gobierno, que serían los retardatarios, arcaicos y conservadores que no están a tono con los nuevos tiempos. Nada más falso. En realidad sí confrontan dos concepciones que, por supuesto, encierran valores, ideas y creencias; en definitiva, ideología.

Nosotros hemos dicho reiteradas veces que no nos oponemos al concepto de reforma del Estado. Es más: el bloque de la Unión Cívica Radical inició el debate cultural y político en la Argentina sobre las privatizaciones en momentos, por ejemplo, en que el senador Eduardo Menem señalaba que la privatización de Aerolíneas Argentinas o de la empresa de teléfonos

equivalía a la entrega de la soberanía nacional y del patrimonio de nuestro país. Sin embargo, decimos que el concepto de reforma del Estado es infinitamente más profundo que la mera privatización y que la simplificación hecha por parte de este gobierno respecto de la incorporación de una política masiva de privatizaciones es altamente perjudicial para los intereses del país. Digo esto porque la primera oleada de privatizaciones estuvo orientada a satisfacer algunas expectativas inmediatas; entre ellas, el pago de la deuda externa de la peor manera posible, por vía de la capitalización de la deuda. Si uno utiliza los ejemplos comparados en el mundo llegará a la conclusión de que la mayoría de los países desarrollados que reformaron su Estado iniciaron la política de privatizaciones por empresas de producción y no por empresas de servicios, que son las que garantizan mayor rentabilidad.

En estos días dio la sensación de que el gobierno ha sido ganado completamente por la conversión ideológica del neoliberalismo. Asimismo cuando algunos interrogan sobre el porvenir y el futuro del Estado-Nación —como nosotros lo concebimos—, hay quienes responden que ha llegado a su fin, porque se entró en la aldea global y en la globalización.

Un artículo reciente de Alain Touraine considera a la globalización como una expresión de la ideología del neoliberalismo. ¿Por qué lo expreso en este debate? Porque las transacciones supranacionales, que son incontrolables para los Estados nacionales, corresponden en un 98 por ciento a capital financiero, y solamente en el 2 por ciento restante a transacciones de bienes y servicios. Con esto quiero señalar que, como bien decía el autor citado, una cosa es reconocer los datos objetivos que muestran que existen ciertos patrones y dogmas universales de globalización, y otra muy distinta renunciar a los instrumentos que debe tener el Estado nacional para planificar de manera indicativa en favor de los intereses de su pueblo y de su Nación, que por otra parte no ha sido sustituida.

La Comunidad Europea, no obstante ser un conglomerado de naciones que ha intentado superar la expresión de los Estados nacionales, reserva para sus Estados miembros la política de defensa, la política internacional y, por sobre todas las cosas —lo que produce mayor preocupación—, la política financiera que, como se sabe, presenta una polémica fuerte por el dominio que ejerce el Banco Central de la República Federal Alemana sobre el resto de los miembros de la Comunidad.

La pregunta es obvia y flota en el ambiente: ¿por qué no utilizamos este mismo criterio —el que aplicamos a la privatización del Banco Hipotecario Nacional—, para privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como nos propone, por ejemplo, el señor Escasany, banquero del sector privado?

¿Qué hicieron este bloque y el resto de la oposición? ¿Intentaron sacar rédito de esa situación? No; por el contrario, cerramos filas solidariamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con la mayoría de los legisladores de ese distrito en defensa no del gobierno, sino del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el único que se acordó de los productores agropecuarios cuando en medio de la crisis concurren a esa institución para refinanciar sus deudas, evitando así que muchos de esos productores fueran llevados a remate.

Si en la primera etapa el criterio de caja fue pagar deuda externa, si se realizó patrimonio nacional por 20 o 25 mil millones de dólares, y hoy tenemos más deuda externa que en ese momento, ¿qué pasará cuando no haya tanta liquidez en el mercado? ¿Qué va a pasar cuando falte una entidad que ha tenido la capacidad de regular naturalmente el mercado?

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Storani. — Entonces, en homenaje a la síntesis que se nos pide, deseo expresar que no hay ninguna duda de que el criterio que se utiliza en esta oportunidad es cortoplacista, y que no favorece los intereses nacionales ni mucho menos los intereses del pueblo. Es un criterio que está regido fundamentalmente por la realización de caja, no ya para el pago de deuda sino también para la utilización inmediata con un objetivo político mezquino, cual es la posibilidad de obtener un rédito electoral de corto plazo.

Se trata de una entidad de más de cien años en el país, de un banco mayorista y de fomento que tiene superávit; se trata de un regulador natural del mercado, ya que sin su volumen y eficiencia el criterio de rentabilidad del sector privado seguramente imposibilitaría a los sectores de menores recursos su acceso al crédito. ¿Qué va a pasar cuando este banco no exista con las características que tuvo en otros momentos de la historia, que requieren ser custodiados hoy como instrumentos imprescindibles para fijar políticas nacionales? De la misma forma

necesitamos manejar Yacypetá, contar con centrales nucleares que permitan un desarrollo tecnológico independiente y mantener el Banco de la Nación Argentina dentro de la órbita del Estado, pues estos son instrumentos imprescindibles a los que ninguno de los países más desarrollados del mundo —y los que también han abrazado este sistema de producción— está dispuesto a renunciar. ¿Por qué debe hacerlo entonces la Argentina, que es un país que lamentablemente no se ubica en el centro del mundo sino que está en vías de desarrollo y tiene gravísimos problemas sociales, que se agudizarán en la medida en que desaparezca la posibilidad del control de las políticas habitacionales mediante la capacidad y el volumen del Banco Hipotecario?

Por eso el bloque de la Unión Cívica Radical adelanta su voto negativo a la malventa y a la entrega del Banco Hipotecario Nacional. No nos convencen los argumentos esgrimidos. Incluso, creemos que quienes hoy habrán de acompañar la malventa de este instrumento imprescindible para las políticas nacionales en defensa de los intereses populares serán marcados por la historia cuando cambien las condiciones en el país y se requiera de estos instrumentos para preservar los intereses de las mayorías. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: hace algo más de seis meses ingresó a esta Cámara una iniciativa del Poder Ejecutivo; es este proyecto de ley que hoy está siendo examinado por esta Cámara.

Recuerdo que al día siguiente de haber tenido ingreso este proyecto un diputado de mi bloque vino a verme con esta iniciativa en sus manos y me preguntó por qué razón íbamos a privatizar el Banco Hipotecario Nacional si da ganancias. De inmediato, con una respuesta directa y simple, le dije: "Si da ganancias, se venderá más caro; si da pérdidas, se venderá más barato". Ni en la pregunta ni en la respuesta se dijo mucho; casi ni explicaban cuál era la realidad, el contexto, el objetivo o el sentido de la propuesta que nosotros aspiramos sancionar en el día de hoy. En todo caso lo único que hacían era dar la explicación contable de un hecho.

A partir de ese momento —y en un acto casi inusual—, el bloque Justicialista empezó a participar activamente del análisis del proyecto, a los fines de su mejoramiento. Hubo larguísimas

discusiones en nuestro bloque y de parte de los miembros de la comisión y, a la vez, encuentros con el Poder Ejecutivo. Ello, hasta que en un momento determinado dijimos: desde nuestro punto de vista hemos rediseñado este proyecto como una ley programa. Es decir, que es una ley que pretende ir mucho más allá de lo que es una privatización. Es esto lo que queremos explicar con absoluta claridad. Se trata de una ley programa que se engloba dentro de un cambio mucho más amplio.

¿Acaso alguien podría comprender la realidad de la necesidad de viviendas y su solución si nos pusieramos anteojeras y sólo miráramos al Banco Hipotecario? Decididamente no.

Entonces la cuestión debe ser puesta en un contexto mucho más general y amplio, dentro de un objetivo que, me animo a decir, es compartido por la totalidad de los integrantes de esta Cámara: me refiero al derecho a una vivienda digna.

Se trata de un objetivo compartido por todos. Seguramente coincidiremos todos a la hora de formalizar las propuestas y de utilizar los instrumentos que nos van a llevar a salir de los recursos y presentar las proposiciones concretas vinculadas con un derecho de la gente y con una obligación que nos corresponde como legisladores.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Matzkin. — Desde un punto de vista macro nos preguntamos qué necesitaba el país en materia de vivienda. También indagamos en lo que han hecho los países que se encontraban en condiciones similares a las nuestras. Y, a la hora de encontrar respuestas, hemos descubierto que esos países han hecho cosas muy parecidas a las que estamos proponiendo.

Si se pretende ver en este proyecto de ley una solución encajonada al tema de la vivienda, se comete un primer error, el mismo error de la pregunta inicial; es el país en su conjunto el que avanza en soluciones concretas para la gente en materia de vivienda.

Leyendo los diarios se advierten páginas completas donde se ofrecen nuevos créditos hipotecarios, que incluso superan los propuestos por el Banco Hipotecario Nacional, financiando hasta el ciento por ciento.

Hay créditos en dólares o en pesos y avisos como éste: "Basta de alquilar, tome un crédito hipotecario." Se eliminan los gastos ocultos,

aquellos que antes aumentaban las tasas de interés. Van desapareciendo esos gastos y aumentan los plazos. Se habla de veinte años y, en algunos casos, de cuarenta. Así podríamos dar distintos ejemplos; no se trata de la Argentina a la que aspiramos, prometemos o conjeturamos sino del país que hoy estamos viviendo.

Sr. Neder. — ¿Me permite...?

Sr. Matzkin. — Señor presidente: deseo mantener la unidad de mi exposición y no voy a conceder interrupciones.

Este crédito para la vivienda —que se está ofreciendo en la Argentina de hoy en forma indiscriminada— no existía en la Argentina de los siete días. En esa época no había crédito para la vivienda. Tengo que confesar que hace algunos años muchos de nosotros no creíamos posible lo que está ocurriendo hoy. Y es una realidad que seguirá incrementándose con el tiempo porque la tendencia es favorable. Se observa día a día que se compite, hay mejoramiento en las tasas, en los plazos, en las condiciones de acceso al crédito, en el porcentaje que cubre; ello es así desde el punto de vista general y macroeconómico.

¿Alguna vez, señor presidente, se puso a pensar qué piensa una persona que precisa vivienda y no la tiene? ¿Qué piensa alguien que puede tener acceso a la vivienda? ¿Acaso dice que quiere un crédito del Banco Hipotecario o nada? Racionalmente expresa que quiere un crédito para acceder a la vivienda, que tenga una cuota accesible, que la tasa de interés sea cada vez menor, que el plazo sea cada vez mayor y que la cuota esté relacionada con sus ingresos y capacidad de pago, que no haya gastos ocultos y que las reglas de juego sean claras en el funcionamiento del sistema. ¿Por qué razón está ocurriendo esto en la Argentina?

Coincido con lo expresado por muchos señores diputados con respecto a que los banqueros no son dadores de sangre, muy lejos están de ello; por supuesto, hacen negocios, pero en una Argentina creíble, sin inflación, con inversión y estabilidad, donde los recursos que antes se iban del país ahora se invierten en préstamos, y los fondos que en otras épocas no venían, ahora vienen. (*Aplausos*.) Esta es una diferencia sustancial y constituye dentro de un ejemplo macro una verdadera política de vivienda.

Hoy la gente tiene acceso a la vivienda, pero esta posibilidad será mayor en el futuro.

Es cierto que el Banco Hipotecario Nacional ha realizado una tarea magnífica. No olvidemos que tomamos un banco fundido, que práctica-

mente no existía y que se utilizó como ejemplo de una política.

He escuchado atentamente lo expresado por los representantes de la oposición, fundamentalmente de la Unión Cívica Radical, y debo reconocerles un mérito: ninguno señaló como ejemplo la conveniencia de volver al sistema que ellos ensayaron. Nadie lo dijo... (Aplausos) ..., nadie lo propuso ni lo sugirió, porque es una experiencia a la que los argentinos no quieren volver.

Por ello reconozco como mérito el hecho de no querer volver a una experiencia donde había un banco en el que a veces se conseguían créditos si se era amigo de alguien. Así terminamos con un banco fundido y sin soluciones crediticias para la gente.

Esta experiencia no la vamos a repetir, porque nadie la quiere en este país; ni siquiera, aquellos que fueron los responsables de esta situación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Esta es una diferencia notable. Por supuesto que tenemos puntos de vista diferentes con la oposición. Compartimos objetivos, pero tenemos grandes diferencias en los instrumentos. Nosotros no dogmatizamos las herramientas, que es un error que se cometió. Jamás vamos a hacerlo, ya que ello sería una equivocación imperdonable.

Nosotros formulamos las propuestas más convenientes, cabalgando en la realidad que más sirve al país e interesa a la gente. Hemos elaborado una ley programa que contiene cinco capítulos, que trataremos en particular en forma inminente luego de la votación en general. Vamos a hablar de cuestiones muy concretas, que sirven y que la gente entiende.

Vamos a discutir la creación de un fondo fiduciario, que se integrará con el producido de la venta del Banco Hipotecario Nacional. Esto lo decimos porque hemos tomado una decisión política. El crédito para la vivienda ha aparecido en la Argentina, está creciendo y todavía será mejor. Pruebas al canto: eso es lo que está sucediendo en nuestro país. No hablo de lo que va a ocurrir.

Entonces resulta razonable, comprensible y aceptable una decisión política de quienes tenemos la responsabilidad de conducir, a fin de ocuparnos de otros temas que también están postergados en la Argentina. Se trata de obras de infraestructura económica y social a realizarse en todo el territorio del país.

Este es el sentido de la creación del Fondo Fiduciario, que tiene un diseño realmente bueno. Está previsto que sólo se puedan realizar obras de inversión y que los fondos estén garantizados, a fin de que no se acaben. Existe una garantía a partir de la coparticipación federal. Las provincias tendrán acceso en forma directa a formular y proponer programas, de la misma forma en que lo hará la Nación. Existirá un control público y habrá una comisión bicameral creada por esta iniciativa, la que también hará el seguimiento de este tipo de inversiones. En la discusión en particular nos extenderemos sobre la utilización del Fondo Fiduciario.

He escuchado algunos discursos de la oposición y creo que se podrían haber ahorrado algunos errores de apreciación si hubiesen atendido a la exposición del miembro informante, el señor diputado Suárez, cuando se refirió con absoluta precisión a cada uno de los capítulos del proyecto.

El diseño de la privatización del Banco Hipotecario Nacional, ha sido muy discutido y presenta conceptos muy valiosos en lo que atañe fundamentalmente a resguardar la función de la entidad. En este sentido hemos reservado una acción de oro con derecho a veto. Si esta función no se cumple, podemos imponer condiciones similares a las que existen actualmente para que dicha función no se discontinue.

Además mediante este proyecto de ley proponemos que, antes de que el Banco Hipotecario Nacional sea privatizado, pueda generar en forma masiva e inmediata una cantidad aproximada de cincuenta mil nuevos créditos para vivienda, en condiciones que cubran hasta el 95 por ciento del valor de su compra o construcción. Es decir que habrá cincuenta mil familias argentinas, que hoy están fuera de la franja de acceso y que tendrán la posibilidad de contar con un crédito para su vivienda. Seguramente, con lo que en la actualidad destinan al pago de un alquiler, podrán solventar la cuota del crédito para la adquisición de su vivienda.

Esta es una propuesta concreta y no forma parte de un discurso. Es algo creíble, cierto y demostrable. Además cincuenta mil nuevas viviendas generarán —según el mismo cálculo que se ha hecho antes— doscientos mil nuevos puestos de trabajo directos en la Argentina. Concretamente, hablamos de una necesidad que tiene el país y formulamos una propuesta que es factible.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — La bancada Justicialista escuchó atentamente a todos los señores diputados, quienes pudieron exponer con total tranquilidad.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Solicito que se nos permita expresar nuestras verdades.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita que se respete a quien está haciendo uso de la palabra, a fin de ordenar la sesión.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: esta iniciativa contempla muchas otras cosas importantes que con seguridad serán analizadas en el debate en particular.

El gobierno no será indiferente ni bobo en relación con el futuro de los préstamos para la vivienda social porque el Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima deberá seguir cumpliendo con la misma función. Además, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina se creará una importante sección hipotecaria capitalizada y que tendrá presencia en todo el territorio de la República Argentina por medio de sus 500 sucursales.

No estamos molestando ni echando al personal del Banco Hipotecario Nacional. Estamos ofreciendo una solución razonable conocida por el propio personal y asimismo intentando hallar una solución para los actuales deudores del Banco Hipotecario Nacional. Al respecto no formulamos una propuesta demagógica ni proponer un jubileo o una salida demagógica, tal como lo propicia el proyecto del Frepaso: lo nuestro es responsabilidad. Por eso queremos explicar nuestra propuesta y cuáles son sus límites.

Este proyecto estuvo durante seis meses en el ámbito de la Cámara de Diputados y sin embargo no existe una sola hoja escrita por el bloque de la Unión Cívica Radical presentando una propuesta alternativa.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Sí, hemos visto cincuenta y cinco observaciones del mismo tenor que nada dicen; todas expresan que las razones serán expuestas en el recinto. No hay una sola propuesta alternativa o superadora vinculada con este tema que pueda ser sometida a discusión. Esa

es la responsabilidad institucional de la oposición en relación con este asunto.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — ¡Acá no hay ninguna propuesta escrita! Sólo existen cincuenta y cinco observaciones cuyo claro objetivo nadie ignora en este recinto, y que es cualquiera menos el de discutir realmente esta cuestión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Hemos escuchado los análisis críticos que se efectuaron desde algunos sectores de la oposición, y el más común es que se trata de una iniciativa electoralista.

¿Qué es una ley electoral? ¿Es electoral una norma que crea 200 mil puestos de trabajo, brinda 50 mil nuevas viviendas, y un modelo de país que permite el acceso a la vivienda?

Es necesario entender cómo funciona el sistema de créditos para la vivienda. Ya hace rato que el Banco Hipotecario Nacional ha privatizado el otorgamiento de préstamos directos; no presta en forma directa sino por medio de casi medio centenar de bancos, la mayoría de ellos privados. Por eso trato de imaginar cuál es la propuesta electoral de los 50 mil nuevos créditos. ¿Una persona irá a la entidad privada a solicitar un crédito y el gerente le pedirá el carné de afiliado peronista? ¿Un albañil, un gasista o un electricista sólo podrán trabajar en las obras de construcción si están afiliados al justicialismo? Por favor, señor presidente: debemos ser más serios en este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la propuesta electoralista?

Además, si entendemos que una propuesta electoralista es aquella que sirve a la gente, yo pregunto si en algún rincón de cada político no existe la sana y legítima intencionalidad de lograr triunfos electorales, porque ese es el sentido del funcionamiento del sistema político.

Cuando las propuestas son para el país y sirven, cuando son creíbles y demostrables, sólo se las contrarresta con iniciativas superadoras, no con simples discursos.

Estamos por votar esta iniciativa porque pensamos que sirve. Formamos parte de un movimiento político que no hace un dogma de los instrumentos, que no adhiere a la teoría del pragmatismo, pero para que se comprenda nuestro pensamiento, que a veces nos separa del resto en cuanto a los instrumentos, creemos que en la realidad hay una parte sustancial de la verdad.

Por lo señalado y lo que expondremos durante el tratamiento en particular de esta iniciativa, apoyamos el proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

—Manifestaciones en las galerías y aplausos en las bancas.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia informa a los señores diputados que quienes deseen insertar su discurso pueden hacerlo directamente por Secretaría.

Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre las mociones de vuelta a comisión formuladas por los señores diputados Trettel Meyer, González Gaviola y Pando.

—Varios señores diputados solicitan que la votación sea mecánica.

Sr. Camaño. — Solicito que la votación se realice en forma nominal.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia desea conocer si la indicación del señor diputado por Buenos Aires es suficientemente apoyada.

—Resulta suficientemente apoyada.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente la moción de orden formulada por varios señores diputados en el sentido de que el proyecto en consideración vuelve a comisión.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretaría (Pérez Pardo). — Sobre 221 señores diputados presentes, han votado 93 por la afirmativa y 122 por la negativa. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abalovich, Adaime, Alessandro, Allende, Alvarez (C.R.), Alvarez García, Aramburu, Ayetz, Balter, Banzas de Moreau, Barberis, Barrios Arrechea, Baylac, Becerra, Benedetti, Bonino, Bordenave, Bravo (A.P.), Bravo (L.P.), Bulacio, Caballero, Martín, Cafferata Nares, Cafiero, Callaba, Cambareri, Carró, Ceballos, Closs, Cruchaga, Del Fabro, Domínguez, Drisaldi, Dumón, Estévez Boero, Fabrisin, Fadel, Fayad, Fernández de Combes, Flores, Fragoso, Gianni, Gómez Diez, González Gaviola, Gorini, Goñi, Guevara, Gutiérrez (G.E.), Illia, Jaumarena, Juncosa, Martínez (M.

L.) Martínez Zuccardi, Mathov, Mercado, Mercado Luna, Mondelo, Montiel, Murie, Mussa, Natale, Neder, Negri, Nieva, Ocampo, Olima, Pando, Parentella, Pascual, Pasqualini de Acosta, Passo, Peláez, Pellin, Perreyra de Montenegro, Piñón Avila, Polino, Polo, Raimundi, Rodil, Rodríguez (J.), Sánchez Sarquiz, Sobrino, Solanas, Storani, Stubrin, Teodosio, Trettel Meyer, Vázquez, Veuventin, Viechi, Viglione, Villalba, Viqueira, Vitar, Zavalía y Zuccardi de Flamarique.

—Votan por la negativa los señores diputados: Abán de Abalos, Abasto, Alarcía, Alsogaray, Alterach, Alvarez (C.R.), Alvarez Echagüe, Aragonés de Juárez, Arias, Atanasof, Ayala, Ayala, Balestrini, Barrios, Benzi, Bianculli, Bizzotto, Borda, Bordín, Bortolozzi, Breser, Brunelli, Cailet, Cámara, Camaño, Cardoso, Carrara, Casari de Alarcía, Castillo (J.L.), Castro, Chica, Corchuelo Blasco, Das Neves, Dellepiane, Díaz Lozano, Díaz Martínez, Dión, Dómina, Domínguez (D.C.), Domsic, Dragicevic, Escalante Ortiz, Estrada, Fernández, Funes, Gabrielli, Galmarini, Gazia, Giménez, Godoy, Golly, Golpe, González (M.L.), Granados, Guadío, Gutiérrez (D.B.), Haquin, Herrera, Irrazábal, Isequilla, Joga, Kaehler, Lahoz, Lambert, Lence, Liponezky de Amavet, López (E.I.), López Arias, Macedo, Maqueda, Martínez (S.V.), Martínez Garbino, Matzkin, Maurette, Melogno, Menem, Migliorzi, Miralles de Romero, Mondino, Morello, Mossello de Benzo, Obarrio, Parra, Pepe, Pérez, Perrini, Pezoa, Pichetto, Pruyas, Rampi, Remedí, Rico, Rivadere, Rodríguez (M.E.), Roggero, Rojo, Rollano, Roy, Rubeo, Rubini, Salim, Salino, Saho, Santander, Sat, Schiaretta, Scrimizzi, Sebastiani, Soria (C.E.), Soria (E.V.), Speratti, Suárez, Tagliafico, Tenev, Tognoli de Vely, Tolomeo, Toma, Tulio, Valcarcel, Varamendi, Viaña y Vilehe.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Sr. González Gaviola. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: la moción que formulé no sólo contemplaba la vuelta a comisión del proyecto sino también su desdoblamiento para que en forma previa al pronunciamiento sobre la privatización se votara acerca de la situación de los deudores.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general el dictamen de mayoría.

Sr. Camaño. — Solicito que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente.

— Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 222 señores diputados presentes, han votado 114 por la afirmativa y 101 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Abán de Avalos, Abasto, Alarcía, Alsogaray, Alterach, Álvarez (C. R.), Álvarez Echagüe, Aragonés de Juárez, Arias, Atanasof, Ayala, Ayala, Balestrini, Barrios, Benzi, Bianculli, Bizzotto, Borda, Bordín, Bortolozzi, Breser, Cailet, Cámara, Camaño, Cardoso, Carrara, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Chica, Corchuelo Blasco, Delepiane, Díaz Lozano, Díaz Martínez, Digón, Dómina, Domínguez (D. E.), Domsic, Dragicevic, Escalante Ortiz, Estrada, Funes, Gabrielli, Gahmarini, Gazia, Giménez, Godoy, Golly, Golpe, González (M. L.), Granados, Gudino, Gutiérrez (D. B.), Haquim, Herrera, Irizabal, Isequilla, Joga, Kaehler, Lahoz, Lambert, Lence, Liponezky de Amavet, López (E. I.), López Arias, Maqueda, Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Maurette, Melogno, Menem, Migliozi, Mirales de Romero, Mossello de Benzo, Obarrio, Parra, Pérez, Perrini, Pozoa, Pichetto, Pruyas, Rampi, Remedi, Rivadera, Rodríguez (M. E.), Roggero, Rojo, Rollano, Roy, Rubco, Rubini, Salim, Salino, Sampietro, Santander, Sat, Schiavetti, Scrimizzi, Sebastiani, Soria (C. E.), Soria (E. V.), Speratti, Suárez, Tagliafico, Tenev, Togni de Vely, Tolomeo, Toma, Tulio, Valcarcel, Veramendi, Viaña y Vilche.

— Votan por la negativa los señores diputados: Abalovich, Adaime, Alessandro, Allende, Álvarez (C. A.), Álvarez García, Aramburu, Ayetz, Balter, Banzas de Moreau, Barberis, Barrios Arcechea, Baylac, Becerra, Benedetti, Bonino, Bordenave, Bravo (A. P.), Bravo (L. A.), Bulacio, Caballero Martín, Cafferata Nore, Cafiero, Callaba, Cambareri, Carrió, Ceballos de Marín, Closs, Cruchaga, Das Neves, Del Fabro, Domínguez (L. S.), Drisaldi, Dumón, Estévez Boero, Fabrissin, Fadel, Fayad, Fernández de Combes, Flores, Frago, Carré, Gianni, Gómez Díez, González Gaviola, Gorini, Goffi, Guevara, Gutiérrez (G. E.), Illia, Jaunarena, Juncosa, Martínez (M. L.), Martí-

nez Zuccardi, Mercader, Mercado Luna, Mondelo, Mondino, Montiel, Morello, Muriel, Musasa, Natale, Nader, Negri, Nieva, Ocampos, Olina, Pando, Parentella, Pascual, Pasqualini de Acosta, Passo, Peláez, Pellin, Pereyra de Montenegro, Piñón Ayala, Polino, Polo, Raimundi, Rico, Rodil, Rodríguez (J.), Salto, Sánchez, Sarquíz, Sobrino, Solanas, Storani, Sturbin, Teodosio, Trettel Meyer, Vázquez, Ventesini, Vicchi, Viglione, Villalba, Viqueira, Vitar, Zavallia y Zuccardi de Flamarique.

— Se abstienen de votar los señores diputados: Fernández, Macedo y Pepe.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el capítulo I, que comprende los artículos 1º y 2º.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: se han introducido modificaciones al proyecto contenido en el dictamen de mayoría, que entiendo han sido distribuidas en las bancas.

Sr. Presidente (Pierri). — Así es, señor diputado, pero el capítulo en consideración no ha sufrido modificaciones.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Allende. — Señor presidente: éste es un capítulo que podemos considerar "inflacionariamente" programático porque tiene disposiciones que constituyen esperanzas pero que no son de concreción legislativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Ruego a los señores diputados que permanezcan en sus bancas porque vamos a votar en forma continuada y si se retiran corremos el riesgo de quedar sin quórum.

Sr. Allende. — Modestamente cabe hacer una advertencia e insinuar una sugerencia para que tenga en cuenta la comisión de redacción.

El inciso b) del artículo 1º, dice así: "Disminuir los desequilibrios socioeconómicos produciendo un alto impacto en los niveles de empleo y en la distribución del ingreso". Efectivamente, va a haber un alto impacto, pero no es precisamente ése. Tal como lo dice la Asociación Bancaria y el sector gremial del Banco Hipotecario Nacional —y creo que en el fondo todos lo sabemos—, ese alto impacto se va a producir de inmediato con el desempleo que van a sufrir los desguarnecidos empleados de la entidad bancaria.

Resulta extraordinario que cuando se trata el tema de las privatizaciones por un lado aparezca la determinación, en teoría, de pautas favorables a los sectores laborales, mientras por otro, en el plano concreto, sucede lo que todos conocemos. Se nos dice que las privatizaciones están hechas para favorecer a la sociedad en

su conjunto y se comienza por agredir a los propios trabajadores de las empresas privatizadas con despidos, precarizaciones, ajustes salariales y contrataciones de privilegio que acentúan la dualización social ya existente. Es cierto que se podría añadir que dentro de este contexto programático existen otros artículos que cuidan al personal: por ejemplo, el que se refiere al programa de propiedad participada. Sin embargo, la eficacia de este programa es muy dudosa. En algunos casos los llamados programas de propiedad participada han resultado un fiasco grave, como el telefónico, hoy sometido a trámites penales con serios indicios de flagrantes delitos en perjuicio de los supuestos destinatarios.

Me parece que estas cosas las tenemos que señalar como advertencia. No por llevarse a cabo drásticas privatizaciones serán beneficiados los empleados, técnicos, científicos, etcétera. En general ocurre exactamente lo contrario, como ha sucedido en tantas partes del mundo en donde los sectores privados son infinitamente más numerosos que los estatales y viven sumidos en miserias desgarradoras.

La dicotomía Estado-Nación la inventó un tirano y no creo que nosotros debamos continuarla, porque en ese sentido tendríamos que despreciar a Francia, Italia, Alemania y exigir...

Sr. Presidente (Pierri). — Disculpe que lo interrumpa, señor diputado, pero se ha agotado su tiempo, que era de cinco minutos.

Sr. Allende. — Ya concluyo, señor presidente; creía que me correspondían diez minutos.

Traemos como acotación que se tenga en cuenta fundamentalmente a los trabajadores del Banco Hipotecario Nacional. En este aspecto el artículo 22 es de una hermenéutica imposible de dilucidar ya que establece que se deben aplicar las leyes laborales vigentes. Esto indica la existencia de alguna norma que va a recortar beneficios que estos trabajadores tenían. Por eso la Unión Cívica Radical volvió a renovar su adhesión al pacto permanente que tiene con el pueblo, sobre todo en esta instancia cercana a un 1º de mayo.

Finalmente, solicito que se tenga en cuenta a los funcionarios, empleados y personal de maestranza del Banco Hipotecario Nacional a fin de que se les asegure su reinserción con el mismo nivel salarial, jerárquico y sin menoscabo espiritual o moral, en sectores del Estado central o descentralizado, si es que llegaran a ser cesanteados sin justa causa dentro de los tres años de privatización.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. Carrió. — Señor presidente: solicito la suspensión del artículo 1º.

Si realmente se ha aplicado el poder para privatizar el Banco Hipotecario Nacional, si se ha utilizado el poder del número para conseguir este Fondo Fiduciario, al menos que no se pervierta el poder de la palabra. Cuando las palabras son utilizadas sin significado real para trampear la realidad, entonces lo que se hace es que no haya significados, y cuando no hay significado hay nihilismo moral en un país.

No se pueden utilizar las palabras del artículo 75, inciso 19, de la Constitución: "para el desarrollo armónico de las regiones en el país", con esta perversión. Si es que se va a aplicar el poder de sancionar la ley, al menos que no se utilicen palabras que están en la Constitución para trampear su texto; porque además, esta Cámara es incompetente para resolver esto, ya que la Cámara de origen es el Senado de la Nación, de acuerdo con el segundo párrafo del inciso 19 del artículo 75. Si ninguno de esos objetivos se está por cumplir con las otras disposiciones de la ley, al menos que quede el nudo de poder privatizar el Banco Hipotecario Nacional, sin que se malgaste en esta forma el poder de las palabras constitucionales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: en el mismo sentido que la señora diputada Carrió, en homenaje a la verdad deseo solicitar que a este proyecto de ley no se lo denomine "de desarrollo regional y generación de empleo", sino como lo que verdaderamente es: "proyecto de ley de privatización del Banco Hipotecario Nacional".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo I, que comprende los artículos 1º y 2º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo II, artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: manteniendo la línea de pensamiento que hemos desarrollado en la discusión en general, deseo señalar, en cuanto al artículo 3º, e incluso refiriéndome al 7º, porque están conectados, que estamos en contra de la creación del Fondo Fiduciario, y fundamentalmente en contra de destinar los dineros que se obtengan de la venta del Banco Hipotecario Nacional en la forma imprecisa e ineficiente en que se piensa hacerlo.

No tendría mayores inconvenientes en que se creara este fondo, si simplemente se tratase de un procedimiento para canalizar determinados fondos, pero éstos deben existir. De acuerdo con lo que aquí está escrito, salvo en lo que se refiere al Banco Hipotecario Nacional, no existen.

En realidad, la creación del Fondo es una manera de escapar a la disciplina del presupuesto. Todo lo que se quiere hacer con el Fondo es posible dentro del orden normal de la administración pública, pero el presupuesto impone cierta disciplina, y esto muchas veces molesta. Se van a destinar 3 mil millones de pesos en la forma que he señalado, en momentos en que estamos pidiendo prestados en el extranjero y en el país más de 15 mil millones de dólares. Aunque sea monótono escucharlo, repito que este año, por el presupuesto nacional estamos pidiendo prestados más de 15 mil millones de dólares. Mientras tanto, utilizamos 3 mil millones de pesos de una venta afortunada que podríamos disponer para otros usos.

No estamos hablando de destinar esa cantidad al pago de deuda; de lo que se trata es de no aumentarla en 3 mil millones de dólares. De tal manera que proponemos a la comisión que lo que se obtenga de la venta del Banco Hipotecario Nacional ingrese al Tesoro, y que dentro del presupuesto se le dé el destino que corresponda.

Como siempre ocurre en nuestras discusiones en general, hoy han aparecido muchos aspectos ideológicos. No hemos sido nosotros quienes los trajimos al debate, pero a veces no hay más remedio que referirse a ellos.

En el país todavía quedan resabios de estatismo, de dirigismo y de controles, como han existido desde 1946 hasta 1989. En el fondo son tendencias socialistas, aunque con otro nombre. Al respecto quiero llamar la atención con una anécdota de hoy.

Se ha defendido mucho el mantenimiento del Banco Hipotecario Nacional en la órbita del Estado, considerándose que ésa es una tendencia adecuada. El líder socialista de Gran Bre-

taña, señor Blair, —socialismo disimulado bajo el nombre de "laborismo"—, acaba de transferir al sector privado el Banco de Inglaterra, que funcionó en el Estado durante cuatrocientos años. Es un líder socialista el que ha hecho la transferencia. Claro que es admirador de la señora Thatcher; pero su decisión indica que ha tenido la capacidad de reacción para escapar a una mala organización que funcionó en Inglaterra durante muchos años, y orientarse así a las nuevas formas. Ojalá aprendamos y tengamos en cuenta estos factores al momento de iniciar las discusiones ideológicas.

Sr. Vitar. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: deseo señalar que no se está cumpliendo con lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde acordamos que respecto de los capítulos II y III se debatiría cada uno de sus artículos.

Sr. Presidente (Pierri). — De esa manera estamos procediendo, señor diputado.

Sr. Vitar. — Pero el diputado por la Capital ha hecho referencia a los artículos 7º y 8º.

Sr. Presidente (Pierri). — Esta Presidencia fue clara al poner en consideración el artículo 3º del capítulo II, y a tal fin concedió el uso de la palabra al señor diputado Alsogaray. No obstante ello, no puedo impedir que un diputado se refiera a otros artículos. De todas maneras, de acuerdo con lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, el capítulo en tratamiento será considerado artículo por artículo.

Sr. Vitar. — Que quede claro que luego que se debata un artículo, éste debe ser puesto a votación.

Sr. Presidente (Pierri). — Así vamos a proceder, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: sin perjuicio de que me sujete a lo que se ha acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, permítaseme que insista en lo siguiente.

En relación con el artículo 2º, quiero señalar que presenta dos defectos de redacción: cuando habla de la reserva especial no determina el monto y cuando dice "...destinada a constituir una línea de créditos que financie hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de las viviendas", debería decir "...hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) del precio de las viviendas".

Solicito que se reconsidere el texto y que se acepte esta sugerencia, a fin de que la redacción sea adecuada.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia señala que estamos considerando el artículo 3º. Sin embargo, el señor diputado Fayad se refirió al artículo 2º. En ese sentido, y para terminar con esta cuestión se solicita al señor diputado Suárez que se expida sobre la inquietud planteada.

Sr. Suárez. — Señor presidente: tengo entendido que estamos tratando el capítulo II, que comienza con el artículo 3º. En cuanto a la observación del señor diputado Fayad, le aconsejaría que si no ha tenido tiempo de leer el dictamen y sus modificaciones, que lo haga porque allí va a encontrar respuesta a lo que él plantea.

Sr. Presidente (Pierri). — En definitiva no se aceptan las modificaciones propuestas. Se va a votar el artículo 3º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. Pando. — Señor presidente: conforme a lo sostenido durante la consideración en general, pedimos que se extraiga del artículo 4º, última parte, la expresión: "El Fondo tendrá carácter extrapresupuestario". Porque el dictamen que viene en forma adicional y que dice en el artículo 8º que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional no subsana el gran inconveniente que significa que este Fondo tenga carácter extrapresupuestario. En primer lugar, porque no pueden existir fondos de esta naturaleza con ese carácter, y en segundo lugar porque no podemos facultar al ministro coordinador para que tenga la posibilidad o no de incorporar dichos fondos al presupuesto. Por lo tanto, la propuesta es que el Fondo tenga carácter presupuestario.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: resulta totalmente contradictorio que el último párrafo del artículo 4º exprese que el Fondo tendrá carácter extrapresupuestario mientras que por el artículo 8º se faculta al jefe de Gabinete a disponer las reestructuraciones presupuestarias para incorporar los recursos provenientes del fondo federal.

Por lo expuesto, considero que debe eliminarse el párrafo del artículo 4º al que he alu-

dido porque, de lo contrario, vamos a pensar que la contradicción tiene un sentido voluntario.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: a lo expresado por los señores diputados preopinantes quiero agregar que es imprescindible eliminar la última frase del artículo 4º porque no puedo entender que la Cámara de Diputados de la Nación otorgue el manejo de alrededor de 2.500 millones de dólares al jefe de Gabinete de Ministros sin ningún control de nadie. Ello significaría una violación a cualquier norma constitucional, porque el hecho de que esté fuera del presupuesto lleva aparejado que no tenga ningún tipo de control parlamentario.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso. — Señor presidente: he de expresarme en el mismo sentido en que lo hicieron los señores diputados preopinantes habida cuenta de que al establecer la modificación del artículo 8º por la que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias, queda vigente el criterio de que siga siendo un fondo extrapresupuestario y como tal y para el futuro, extraño a todo tipo de contralor por parte de los órganos que la Constitución establece para verificar la aplicación correcta del presupuesto de la Nación, que incluso dependen del propio Congreso de la Nación.

De esta manera no sólo estamos delegando facultades sino también renunciando a la posibilidad, como Cámara de Diputados y participantes en la designación de ese órgano de contralor, de verificar la aplicación futura. Y esto va más allá de la comisión bicameral que hará el seguimiento; ésa es otra cuestión que no tiene nada que ver con la forma de resolver este problema. Por esta razón insisto en la necesidad de eliminar la frase que indica que este fondo tiene carácter extrapresupuestario.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Martínez Zuccardi. — Señor presidente: el párrafo del artículo 4º observado por los señores diputados preopinantes merece las siguientes consideraciones. El hecho de que al fondo se le asigne carácter extrapresupuestario significa que también se está pretendiendo soslayar el régimen de adjudicación del sistema de licitación pública en las obras en las que eventualmente este fondo sea aplicado, con lo cual se genera un esquema de discrecionalidad absoluta en su administración y en el mecanismo de ad-

judicación de las obras. A ello debemos agregar la ausencia de los mecanismos de contralor legales y constitucionalmente vigentes.

Es atinente la observación efectuada en relación con la contradicción existente entre lo establecido en el artículo 4º y el párrafo que se pretende incorporar al artículo 8º, ya que la correcta técnica legislativa de un esquema presupuestario en un sistema republicano significaría que cualquier ingreso del Estado debe ser motivo de una ampliación del presupuesto. Consecuentemente, el presupuesto debe ser ampliado por ley de la Nación. Además, si aquí se busca la liquidación de una porción del patrimonio estatal, ello significará nuevos ingresos a sus áreas, y lo que correspondería técnicamente en materia presupuestaria es la ampliación del presupuesto y la asignación de estos gastos.

Esta contradicción también figura en el inciso d) del artículo 9º, donde se hace una referencia genérica a un determinado tipo de obras de infraestructura. Técnicamente, en un sistema republicano de base presupuestaria y en el Estado de derecho moderno correspondería la asignación del gasto en función de la determinación de su destino, sin dar lugar a una bolsa en la que cualquiera puede introducir la mano.

Consecuentemente, las propuestas contenidas en este capítulo realmente destruyen y vulneran el presupuesto, convirtiéndolo en una masa amorfa que queda sometida a la discrecionalidad del administrador. Esta es la prueba más fehaciente, más allá de los discursos, de que el objetivo de este Fondo es absolutamente electoralista.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. López. — Señor presidente: comparto la mayoría de los fundamentos expresados por los señores diputados preopinantes. Propongo la siguiente redacción para el último párrafo del artículo 4º: "El Fondo, las transferencias a las provincias y las partidas para financiar las obras deberán incorporarse a los presupuestos de las respectivas jurisdicciones".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: siguiendo la línea de razonamiento expresada sobre la última parte del artículo 4º, que declara que el Fondo tendrá carácter extrapresupuestario, estimo que lo correcto sería que se incluyera en el presupuesto. Además, no debería hacérselo de modo facultativo, como lo indica la última parte del artículo 8º que se propondrá como agregado,

donde se otorgan facultades al jefe de Gabinete de Ministros. Esa norma debería ser imperativa, a fin de que los recursos de este fondo se incluyan necesariamente en el presupuesto para la administración nacional.

Incluso, se va más allá, porque en el inciso c) del artículo 9º se indica, en relación a las provincias, que este fondo conserva autonomía operativa y funcional, con lo que la iniciativa se inmiscuye en las facultades que son propias de las provincias con respecto a incluir o no este dinero en sus presupuestos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Domínguez. — Señor presidente: son tan claras las argumentaciones de los señores diputados preopinantes con respecto a la inconveniencia de incluir en la redacción final del artículo 4º el tema de que este fondo tenga carácter extrapresupuestario, y en el artículo 8º la facultad al jefe de Gabinete de Ministros para disponer de esos recursos, que me voy a permitir no abundar en mayores detalles con respecto al aspecto legal. Por otra parte, estoy seguro de que estas observaciones serán debidamente consideradas y acogidas por la comisión; pero para el caso de que así no fuera quiero que quede constancia de mi voto negativo respecto de ambos artículos. En caso contrario quedaría involucrado en algo que considero inconstitucional e ilegal.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — Señor presidente: aprecio la preocupación manifestada por los diputados que han hecho uso de la palabra y que en forma coincidente se han referido al párrafo final del artículo 4º. Sin embargo, hay un error de interpretación: el Fondo Fiduciario federal se constituye con la finalidad de otorgar créditos tanto a la Nación como a las provincias. Por eso es extrapresupuestario.

El 50 por ciento de esos recursos será destinado a las provincias, y no se pueden incluir en el presupuesto nacional. Cuando la Nación tome el crédito obligadamente lo tiene que incorporar al presupuesto, y especificar asimismo cómo lo va a gastar. En este caso, como ya está sancionado el presupuesto correspondiente al ejercicio 1997, se faculta a la Jefatura de Gabinete para que efectúe la reestructuración pertinente para dar entrada al crédito que eventual y no necesariamente tome, afectándolo al financiamiento de la obra que corresponda.

Por su parte también las provincias deberán incorporar los créditos que eventualmente to-

men a su presupuesto porque carecerán de autorización para aceptarlos y gastarlos.

La situación se repite en las provincias. Por eso es necesario separar el fondo, que es una institución de crédito, del uso del crédito. Cuando la Nación o una provincia tome un crédito del fondo necesariamente deberá incorporarlo a su presupuesto como tal. Además, debe requerir la autorización para gastarlo y destinarlo a la obra que corresponda.

Se habla de la incongruencia con el listado de obras anexo, pero en realidad eso se refiere al tipo de obras que el fondo puede financiar. En realidad, cuando la Nación o las provincias tengan que ejecutar una obra deberán conseguirlo de modo taxativo en la autorización que necesariamente tendrán que requerir en sus respectivas leyes de presupuesto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini. — Señor presidente: es comprensible la preocupación de los señores diputados que han formulado un planteo desde el punto de vista técnico, pero lo incorrecto e inaplicable sería que este fondo fiduciario fuera presupuestario.

Lo que crea el proyecto de ley es un ente de financiamiento, como existen tantos otros, aunque reviste un carácter particular.

Tanto en el presupuesto nacional como en los de las provincias deberá existir la partida y las modificaciones pertinentes con origen y aplicación de fondos que tomen los préstamos del fondo fiduciario, pero no corresponde a la cuenta de gastos e inversiones de cada período tanto de la Nación como de las provincias, incorporar la totalidad o parte del fondo fiduciario, que simplemente es un ente de financiamiento.

En cuanto al control, señalo que no puede existir imputación alguna, tanto en el presupuesto nacional como en los de las provincias, que se financie con este fondo, que no siga el límite de rigor presupuestario en ambos niveles de gobierno.

En consecuencia, cada peso de gasto que se financie a través del fondo fiduciario tendrá el control presupuestario de la Nación cuando la obra sea nacional y tendrá el control presupuestario de la provincia cuando tenga tal carácter. En ambos casos, lo único que va a hacer el fondo es actuar como fuente de financiamiento.

Si analizamos los presupuestos nacional y de las provincias advertiremos que contienen inversiones y gastos con diversas fuentes de financiamiento. Lo que estamos haciendo es agregar una más de esas fuentes de financiamiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Viana. — Señor presidente: si bien el artículo 4º determina que el fondo tendrá carácter extrapresupuestario, la aclaración brindada por el señor diputado Balestrini indica que no es presupuestario ni extrapresupuestario; simplemente es un fondo financiero. Por lo tanto, no sería válida la cláusula final. Esto lo acaba de confirmar el señor diputado Balestrini con su aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 4º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Fraguoso. — Señor presidente: solicito que quede constancia de que el bloque radical ha votado por la negativa.

Sr. Presidenta (Pierri). — Quedará debida constancia, señor diputado.

En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Cayula. — Señor presidente: estamos discutiendo la creación de un fondo fiduciario federal y paradójicamente en este fondo que se dice federal los recursos se asignan en una proporción inferior a la mitad para los estados federales y en el consejo de administración que tiene a su cargo el manejo de estos fondos la participación de los gobernadores que representan a los Estados federales también se encuentra en una proporción absolutamente minoritaria.

Por eso sugiero efectuar una modificación al artículo 5º por la que se propone aumentar la participación de las provincias en el fondo llevando a cinco los miembros nombrados por la asamblea de gobernadores del Consejo Federal de Inversión.

Como se trata de un tema sustancial pido que huya a la administración de este fondo, solicito que se vote nominalmente a fin de que quede registrado quiénes son los que avalan un funcionamiento realmente federal y quiénes con el nombre de federal, están avalando un funcionamiento realmente unitario con baja participación de los estados provinciales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Bravo (L. A.). — Señor presidente: si bien había efectuado una propuesta que contemplaba otro número, apoya la modificación formulada por el señor diputado preopinante respecto del número de miembros de este consejo de administración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Martínez Zuccardi. — Señor presidente: a medida que se van desarrollando los temas van apareciendo con claridad las contradicciones de orden técnico y la naturaleza de discrecionalidad básicamente política que tiene este fondo.

Las contradicciones de esta iniciativa se van poniendo de manifiesto a medida que profundizamos el debate. Con las recientes explicaciones que dio la comisión aparecen más nítidamente en este artículo 5º por el que se determina que el fondo funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En consecuencia, surgen algunas preguntas elementales que hacen no sólo al aspecto técnico de la cuestión sino también, y fundamentalmente, al sentido común de las cosas. ¿La Jefatura de Gabinete de Ministros no tiene asignado presupuesto? ¿El Banco de la Nación Argentina —que es una institución del Estado que actúa según su carta orgánica como un organismo financiero—, tampoco figura dentro del presupuesto nacional? Por los argumentos que aquí se han dado en cuanto al carácter extrapresupuestario de este fondo ni el Banco de la Nación Argentina ni la Jefatura de Gabinete deberían figurar en el presupuesto nacional. De allí la endeblez de las explicaciones de la comisión.

No sólo predominan las contradicciones sino que también se ubica a este fondo en una zona gris o confusa en donde la claridad de lo que significa lo presupuestado aparece confundido en la telaraña del marco extrapresupuestario que no se puede definir. Por eso, hago estas observaciones respecto de la ubicación de este fondo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ello se encuentra en absoluta y total contradicción con el carácter extrapresupuestario y cada vez más explícito en cuanto a la pretensión del manejo discrecional no sólo del fondo sino también de la aplicación y definición del sentido de éste.

Comparto las observaciones que se han efectuado en cuanto a la composición del órgano político institucional que se está creando para la administración de este fondo en el sentido de su carácter paritario entre Nación y provincia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: creo que se está confundiendo los artículos, porque he escuchado hablar del artículo 4º que ya ha sido votado y del artículo 6º que no está en tratamiento.

Si bien se efectuaron otras observaciones respecto de la naturaleza y la composición del consejo de administración, la comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 5º.

Sr. González Gaviola. — Solicito que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—Resultado suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 149 señores diputados presentes han votado 96 por la afirmativa y 43 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha registrado el voto de 5 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abán de Abalos, Abasto, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Arias, Atanasof, Ayala, Ayala, Balestrini, Barrios, Benzi, Bianculli, Bizzotto, Borda, Bordin, Bortolozzi, Breser, Caillet, Cámara, Camaño, Cardoso, Carrara, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Chica, Corchuelo Blasco, Dellepiane, Díaz Lozano, Díaz Martínez, Digón, Dómina, Domínguez (D. C.), Domsic, Dragicevic, Escalante Ortiz, Estrada, Funes, Calmarini, Gazia, Gelly, Golpe, González (M. L.), Granados, Gudino, Herrera, Irrazábal, Isequilla, Joga, Kaehler, Lahoz, Lamberto, López (E. I.), Macedo, Maqueda, Martínez (S. V.), Matzkin, Maurette, Menem, Miglioni, Miralles de Romero, Mosse, Nello de Benzo, Obarrio, Parra, Pérez, Perrini, Pezoa, Pichetto, Polo, Pruyas, Rampi, Rivadeneira, Rodríguez (M. E.), Rojo, Roy, Rubeo, Rubinini, Salino, Sampietro, Santander, Sat Schiavetti, Scrimizzi, Sebastiani, Soria (C. E.), Soria (E. V.), Speratti, Suárez, Tagliafico, Tenen, Togni de Vely, Tolomeo, Toma, Tulio, Verazaendi y Vilche.

—Votan por la negativa los señores diputados: Adaime, Alessandro, Alvarez (C. A.), Barberis, Barrios Arrechea, Bravo (A. P.), Bravo (L. A.), Callaba, Cambaveri, Carrió, Closs, Domínguez (L. S.), Drisaldi, Estévez Boero, Fabrisin, Fayad, Fragos, Garay, González Gaviola, Guevara, Illia, Martínez Zuccardi, Mercado Luna, Mondelo, Musa, Neder, Ocampa, Parentella, Pascual, Pasqualini de Acosta, Preyra de Montenegro, Raimundi, Rodil, Rod

dríguez (J.), Sánchez, Stubrin, Trettel Meyer, Viaña, Vicchi, Viglione, Vilalba, Visqueira y Vitar.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Alterach, Fernández, Gutiérrez (D. B.) y Liponezky de Amavet.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: solicito al bloque del oficialismo que aclare si el fiduciario va a ser el Banco de Comercio Exterior o el Banco de la Nación Argentina.

De todas formas, en cualquiera de los dos casos, queremos proponer una nueva redacción para el artículo 6º, en la que se establezca que el fiduciario del Fondo será el banco, quien garantizará las operaciones del Fondo atendiendo las instrucciones emanadas del consejo de administración. El fiduciario podrá actuar por cuenta y orden de las jurisdicciones que lo soliciten en la contratación y ejecución de obras de infraestructura financiadas por el Fondo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Con las modificaciones que proponemos al artículo 6º queda implícita la respuesta a la inquietud del señor diputado.

El nuevo texto de este artículo 6º, que me permitiré leer al señor diputado, es el que sostenemos y sobre el que no aceptamos modificación.

Dice así: "El fiduciario del Fondo será el Banco de la Nación Argentina, quien administrará el Fondo de acuerdo a las instrucciones otorgadas por el consejo de administración. El fiduciario podrá actuar por cuenta y orden de las jurisdicciones que lo soliciten".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 6º con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: solicito a la comisión que reconsidere el texto del artículo 7º, fundamentalmente a partir de la modificación del inciso c).

Tal cual está estructurado este artículo existe la posibilidad de que gran parte del Fondo

quede inmovilizada en la medida en que se lo puede ofrecer como garantía de un empréstito; no cumpliendo así con la función que se ha planteado en esta sesión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: quiero formular una objeción respecto de la segunda parte del inciso c) del artículo en consideración.

El artículo 7º se refiere al patrimonio del Fondo y establece qué bienes lo integran. El inciso c) dice lo siguiente: "El producido de los empréstitos que contraiga...". Hasta aquí está bien porque se hace referencia al patrimonio, pero a continuación dice: "los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran". Esta es una autorización velada para afectar los recursos del Fondo y por tal razón sugerimos su eliminación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Neder. — Señor presidente: con referencia al artículo 7º, que habla sobre el patrimonio del Fondo —y, naturalmente, sobre los destinos de la privatización del Banco Hipotecario Nacional—, quisiera recordar, con su anuencia, a un filósofo popular que, entre otras cosas, jugaba muy bien al fútbol. Se llamaba Adolfo Pedernera, quien alguna vez me enseñó algo en mi anonimato silencioso en un bar. Me dijo aquel filósofo: "El agradecimiento es la memoria del corazón". Por eso, en nombre del corazón y de la memoria quiero decir gracias al Banco Hipotecario Nacional por haber permitido que mucha gente, durante más de una centuria, tuviera por lo menos la posibilidad de soñar y de tener su casa.

Quisiera hacer referencia a algo que me animo a calificar como el testamento del Banco Hipotecario Nacional. Se trata de un aviso escrito en simpático lunfardismo porteño, que fue publicado el 25 de abril de este año —hace pocos días— en el diario "Clarín" y también en otros diarios de difusión nacional. Allí la picaresca porteña formula una pregunta: "¿Usted es medio gilastrún?". Luego aparecen dos pequeños recuadros: uno para contestar que sí y otro donde dice: "Acceso inmediato. Cero gastos de otorgamiento. Empieza a pagar a los tres meses. Cuota y tasa fija más baja del mercado. Financiación de hasta el 75 % en vivienda nueva o construcción y de hasta el 70 % para vivienda usada, ampliación y refacción. La cuota no puede superar el 30 % del ingreso de sus titulares. Si leyó atentamente todo esto, cooconfirmado: usted no es ningún gilastrún,

El Banco Hipotecario Nacional es el banco que le permite dormir, y Acceso Inmediato es el crédito que le permite soñar”.

En nombre de aquellos que no quieren padecer de insomnio, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del texto del aviso testimonio del Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — Es inentendible la propuesta, señor presidente.

La comisión ha propiciado unos cambios, que obran en Presidencia.

Se propone sustituir el inciso a) por el siguiente texto: “a) Las acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. y el producido de su venta, con excepción de aquellas acciones que conserve el Estado nacional, de acuerdo a lo que dispone el capítulo III, a lo que determina el artículo 35 de esta ley, y las acciones destinadas al Programa de Propiedad Participada”.

En el inciso d), donde dice: “...con excepción de lo previsto en el artículo 30 de la presente ley”, debe decir: “...con excepción de lo previsto en el artículo 36 de la presente ley”.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: estamos hablando de lo que conforma el patrimonio del Fondo, y en el inciso c), a más de determinar qué es lo que lo integra, se está incluyendo una cláusula que autoriza veladamente a afectar los recursos. En todo caso, si el oficialismo considera la procedencia de esta cláusula, no es este el lugar adecuado para su incorporación.

Que el señor diputado Suárez lea el inciso c) del artículo 7º.

Sr. Suárez. — Es una argucia del señor diputado y no me voy a prestar a su juego, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 7º con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical, en reiteradas intervenciones del día de hoy, planteó su cuestionamiento de fondo a esta iniciativa que estamos considerando. Se lo hizo desde la caracteriza-

ción de dogmatismo e ideologización para mantener esta norma, sosteniéndose además que, más allá de lo que algunos quieramos expresar, como que estamos frente a las reformas estructurales pendientes, en realidad estamos frente a un negocio.

Se trata de un negocio rentable y lucrativo para algunos actores del sistema financiero. También se dijo aquí, desde la presidencia de nuestra bancada, que si algunos piensan que hasta aquí llegamos y en consecuencia no habrá más privatizaciones, se equivocan. Prepárense aquellos que piensan que no habrá más privatizaciones. Las que hoy parecen insólitas mañana parecerán necesarias.

Dicho esto me gustaría referirme a la actitud discrecional y arbitraria que existe en la distribución de los recursos provenientes de la venta del banco. Quisiera conocer alguna fundamentación —si es que la hay— para la explícita exclusión de la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de los recursos. Quisiera saber si hay alguna razón de fondo o algún criterio objetivo y sólido que le permita sostener al oficialismo que es bueno que la Ciudad de Buenos Aires esté ausente de la distribución de los recursos derivados de la venta del banco; o si, por el contrario, lo que está diciendo el oficialismo es que, así como a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se les niega —mediante la manipulación de la Justicia— la posibilidad de elegir a sus propios representantes, también se los castiga con la decisión de no transferírseles recursos porque no comulgan con las ideas políticas del gobierno nacional.

Entonces, sería bueno que el oficialismo se sacara la careta y formulara, con absoluta claridad, el reconocimiento de que existe de su parte una penalización legislativa a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en razón de que en ella la suerte electoral le resulta adversa.

Se habla de que si el señor Scioli, motonauta internacional, es candidato, el justicialismo podría acceder al quinto lugar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro de que el señor diputado Toma está de acuerdo conmigo; por eso hablo del motonauta Scioli, quien seguramente no tiene idea de lo que acá estamos discutiendo, y tampoco tiene problemas de vivienda...

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia niega al señor diputado por la Capital que no entre en cuestiones que nada tienen que ver con el artículo en discusión.

Sr. Rodríguez. — Me permitiré expresar algunas pocas palabras y citar algunas cifras para que los señores diputados de todos los bloques y de todos los distritos tengan cabal idea de lo que estamos hablando.

Sr. Presidente (Pierri). — Si me permite, señor diputado, la Presidencia le informa que resta un minuto del término del que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Rodríguez. — En todo caso, oportunamente solicitaré la extensión de ese término.

En la Ciudad de Buenos Aires — a la que se pretende penalizar con la no transferencia de dos recursos provenientes de la privatización del Banco Hipotecario —, viven 15.385 familias en viviendas de emergencia. Estamos hablando de 13.901 viviendas y de 64.113 personas. La decisión contenida en el artículo correspondiente del dictamen del oficialismo condena a más de 64.000 compatriotas — y no vengán con el argumento de que muchos son inmigrantes —, a la imposibilidad de atender su problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega al señor diputado que redondee, pues se ha vencido su término.

Sr. Rodríguez. — Es algo muy serio lo que estoy diciendo, señor presidente. No se trata de una chicana ni de una chiquilina.

Sr. Presidente (Pierri). — El reglamento establece en esta instancia cinco minutos para cada diputado, y hemos venido cumpliéndolo.

Sr. Rodríguez. — Solicito una prórroga de cinco minutos.

Sr. Presidente (Pierri). — Si la Cámara se la concede no hay ningún inconveniente.

Señor diputado Matzkin: el señor diputado Rodríguez ha solicitado una prórroga de cinco minutos.

Sr. Matzkin. — Estamos de acuerdo, pero que hable algo de la interna radical.

Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez. — Señor presidente: continuando con mi línea de razonamiento, en nuestra ciudad el 12 por ciento de los hogares está en situación irregular de tenencia de la vivienda.

Quiero decir también que en la provincia de nuestro colega, el señor presidente del bloque oficialista, la misma del presidente de la comisión que informa este dictamen, el 10 por ciento de las viviendas se encuentra en esta situación.

Desde el punto de vista de esta perspectiva un distrito que tiene una situación más favorable va a obtener recursos que no van a estar dis-

ponibles para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del mismo razonamiento quiero señalar — y no estoy hablando de todos —, que existen muchos compatriotas y seguramente algunos extranjeros que creen que la Ciudad de Buenos Aires es Puerto Madero; esa zona tan elegante que tiene la ciudad. Quiero transmitir a todos los legisladores que en nuestra ciudad hay muchos barrios con indicadores sociales que producen alarma, preocupación y angustia, tal vez superiores a otras provincias de la Argentina. Puedo citar el barrio de La Boca y el de Barracas, aquí nomás, a quince o veinte cuadras de este lugar, donde el 25 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas. En La Boca es del 26,3 y en Barracas, del 24,8 por ciento.

En la provincia de La Pampa el 21,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; en la de Mendoza alcanza al 29,4; y en Santa Fe es del 24,5 por ciento. Todos estos datos corresponden al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Constituye una verdadera actitud de condena y de sanción política suponer que porque se piensa distinto en la ciudad, habrá compatriotas y jurisdicciones que tendrán mayores posibilidades de acceder a financiamientos para la construcción de obras de infraestructura y vivienda. ¿Hay alguien que esté en condiciones de sostener, con una mano en el corazón, que los vecinos de Buenos Aires no tienen este derecho? Si se piensa eso, entonces hay que votar el despacho de mayoría. Si pensamos que todos los argentinos tenemos derecho a una vivienda digna, hay que modificar ese despacho.

Sr. Alvarez Echagüe. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Rodríguez. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alvarez Echagüe. — Señor presidente: deseo saber si estos datos los obtuvo el señor diputado Jesús Rodríguez cuando fue ministro de Economía. Por lo tanto no serían datos actualizados. (Risas.)

Sr. Rodríguez. — Los obtuve ahora y corresponden al año 1996.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: sé que en el espíritu de muchos legisladores, además de las preocupaciones de carácter general que genera esta norma existe una serie de preocupaciones

puntuales. Entre ellas me preocupa especialmente el fondo especial de cien millones de pesos que está destinado a la demanda de las provincias de menor densidad poblacional y de menor desarrollo relativo.

Sobre el particular deseo proponer a la comisión una pequeña modificación, que permita por lo menos una cuota de tranquilidad para aquellas provincias que pueden verse involucradas.

La modificación que propongo expresa que ninguna de las provincias involucradas por este monto especial podrá acceder a más del 15 por ciento de estos fondos. Formulo esta propuesta en razón de que existen los ATN, que son equivalentes y todos sabemos cómo se distribuyen. Por ello, a efectos de dar tranquilidad a aquellas provincias que no son La Rioja, propongo que se agregue ese párrafo limitando el máximo al 15 por ciento.

De las distintas intervenciones de los señores diputados quedó flotando una posible interpretación de la ley que estoy seguro de que no está en el ánimo de los integrantes del bloque mayoritario. Por lo tanto propongo que donde dice: "De los fondos resultantes, se destinarán 50 por ciento a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias" se exprese: "De los fondos resultantes, se destinará 50 por ciento a la financiación de proyectos propuestos por las provincias y el porcentaje restante a proyectos propuestos por la Nación".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Trettel Meyer. — Señor presidente: deseo saber si al final del artículo 8º se agregará el párrafo que dice: "Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto del año 1997, para incorporar los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los gastos destinados a las obras correspondientes".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: aclaro que se han distribuido copias de las modificaciones que la comisión piensa introducir al proyecto en consideración; no sé si el señor diputado cuenta con ellas.

En relación con lo manifestado por el señor diputado Jesús Rodríguez expreso que no hemos inventado nada nuevo con respecto a la distribución, porque ésta se va a regir por lo

establecido en los incisos b) y c) del artículo 3º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego.

Con respecto a la inquietud planteada referida al artículo 8º aclaro que agregamos facultades a la Jefatura de Gabinete para que dentro del presente presupuesto, en el caso en que el Poder Ejecutivo tome algún crédito, lo incorpore a las partidas correspondientes.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Trettel Meyer. — Señor presidente: encontramos cuanto menos ante normas antitéticas que resulta imposible armonizar y demuestran que estamos en presencia de un desajuste fenomenal, ya que, cualquiera sea la interpretación o aplicación que se haga, caeremos en la inconstitucionalidad de la norma.

Se faculta al jefe de Gabinete a disponer la reestructuración del presupuesto; y aquí podemos marcar dos inconstitucionalidades. Por un lado podemos hacer referencia a la delegación legislativa que se hace para modificar la ley de presupuesto, que está expresamente prohibida por el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Por otra parte este agregado vulnera y conculca las atribuciones propias e indelegables del Congreso de la Nación de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Nación.

En la consideración en general expresamos que el agregado final propuesto para el artículo 8º significa un disfraz que no alcanza a tapar la cola del diablo. Digo esto porque si el fondo fiduciario tiene carácter extrapresupuestario y permanente —según surge del artículo 4º—, el agregado que se pretende incorporar al final del artículo 8º es una delegación transitoria, ya que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer la rectificación presupuestaria sólo para el ejercicio 1997.

Resulta lógico destacar que el jefe de Gabinete de Ministros podrá o no rectificar el presupuesto, pero el año que viene el Fondo Fiduciario recobra el carácter extrapresupuestario en forma permanente. Así adquiere total autonomía extrapresupuestaria, convirtiéndose en un Estado distinto, con vida propia y constituyendo una verdadera clonación de la Nación.

Quiero con un ejemplo hacer patente la gravedad que encierra este antecedente, sin pretender hacer ciencia ficción. La bancada Justicialista ya nos ha adelantado que ello podría suceder. Me refiero a la privatización de toda la riqueza ictícola no concesionada en el país. Así se podría formar Pesquera Argentina Sociedad

anónima y derivar los fondos de la privatización a un fondo fiduciario. Se trata de dinero de origen público y perteneciente a la hacienda pública. En consecuencia, no puede quedar fuera del presupuesto ni de los controles que señala el artículo 85 de la Constitución Nacional. Estamos ante un desaguisado fenomenal, que lleva a una confusión y a una inconstitucionalidad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado Rodríguez, quiero proponer la eliminación de la siguiente expresión del artículo 8º: "...reservada a la demanda de las provincias de menor densidad poblacional...", reemplazándola por: "...reservada a la demanda de las provincias con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas..."

Interpretando la inquietud del señor diputado Trettel Meyer, con respecto a la propuesta que se hace para el artículo 8º —que figura en el papel que se nos ha distribuido—, donde dice "...las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional del año 1997...", propongo que se reemplace "1997" por "que corresponda".

En relación a las observaciones que hemos formulado en el debate en general y considerando que los artículos 12 a 15 del presupuesto de 1997 facultan al jefe de Gabinete a realizar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, propongo que al último párrafo que se pretende incorporar al artículo 8º, que dice: "...y los gastos destinados a las obras correspondientes", se agregue: "no pudiendo alterar el monto de los recursos que corresponden al Fondo". El objetivo es evitar que los recursos que resultarían del manejo del Fondo sean destinados a otros fines, como por ejemplo el pago de intereses de la deuda externa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: me congratulo por la presencia de las bancadas que se habían retirado el miércoles pasado. Esto permite que la legislación tenga un mayor protagonismo y participación de los integrantes de esta Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita al señor diputado que se refiera al artículo 8º.

Sr. Corchuelo Blasco. — Lo haré de la misma forma en que lo hizo el señor diputado Jesús Rodríguez. En la reunión pasada intervine en tres o cuatro oportunidades y adelanté que durante el debate en particular completaría lo que

ese día expuse desde el punto de vista federal y de las provincias periféricas que en el ámbito de la coparticipación federal están absolutamente perjudicadas.

Me congratulo de que el resto de las bancadas esté presente en la sesión porque estoy seguro de que en particular la Unión Cívica Radical no sólo está en este recinto porque pudo hacer uso de la palabra en general y también en esta instancia, sino también porque sus miembros son responsables de la vida democrática, no quieren dar mal ejemplo para el futuro, y además porque los gobernadores radicales plantearon la necesidad de conseguir fondos que nos sirvan —no que les sirvan—, a los pueblos del interior, para lograr algunos objetivos que resultan muy difíciles de alcanzar con los magros recursos que llegan en concepto de coparticipación.

En el marco de un pacto basal de la República Argentina, en 1994 se acordó, en oportunidad de la reforma de nuestra Carta Magna, que en diciembre de 1996 debía existir una nueva ley de coparticipación. Se ha acordado no hacerla aún, pero ello no significa desconocer que los índices de coparticipación son inequitativos, injustos e irrazonables, como bien lo planteó la semana pasada el señor diputado Viana en representación del Movimiento Popular Fueguino, y como lo ratificamos los integrantes del gobierno y la Legislatura de la provincia de Chubut —radicales, peronistas y frepasistas— y los legisladores que en esta Cámara representamos al distrito de Chubut.

Por lo expuesto formularé una propuesta de modificación de la redacción del artículo 8º referida a la conceptualización de los dineros inicialmente destinados a la constitución de la cartera de créditos adicionales y en la modalidad de reparto de los fondos. El texto que proponemos es el siguiente: "El patrimonio del Fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales.

"Del total del patrimonio del Fondo se destinará la suma de doscientos millones (200.000.000) de pesos a la construcción de una cartera de crédito adicional, con los mismos fines, para la demanda de las provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico, que se asignará entre todas las provincias en proporción inversa a su densidad de población.

"Los fondos restantes se destinarán en un cincuenta por ciento (50 %) a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias.

"A su vez, del financiamiento correspondiente a las provincias se asignará un cincuenta por ciento (50 %) del mismo utilizando los índices de coparticipación federal de impuestos de acuerdo a lo determinado en la ley 23.548 y decretos complementarios, y el restante cincuenta por ciento (50 %) de acuerdo a los índices de distribución en partes iguales de los Fondos Vial Federal (FOVIAL), de Desarrollo Eléctrico del Interior (FDEI) y Nacional de la Vivienda (FONAVI)."

Esta disposición permitirá brindar mayor equidad, razonabilidad y justicia al índice de reparto de la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, que ya está perimido. Esta norma beneficiaría a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego; no implicaría cambios para las provincias de Salta, Tucumán y Mendoza, y requeriría de un esfuerzo de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en la búsqueda de una estrategia para el desarrollo de las provincias menos favorecidas.

Este es mi aporte a la discusión del artículo 8º, y aspiro a que se comprenda la intención que persigo desde el ámbito federal.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: llamo la atención en relación con este artículo 8º a fin de evitar que bajo lindos títulos se enmascaren aspectos no tan transparentes.

Muchas veces, bajo el carácter de provincias de menor índice de desarrollo relativo se esconden la posibilidad de manejos discrecionales efectuados por el Poder Ejecutivo nacional.

En este caso deberíamos hacer un esfuerzo para precisar la forma en que se van a distribuir estos 100 millones de pesos, y si este Fondo está ligado al empleo —uno de los grandes problemas que afronta la Argentina en este momento— creo que dentro de los indicadores que se están propiciando para distribuir estas partidas es indudable que debe tenerse en cuenta el nivel de desocupación de las provincias a las que hacemos referencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Martínez Zuccardi. — Señor presidente: este artículo tiene una redacción que va a generar confusiones y dificultades en su implementación porque no establece cuál es el criterio de prorrateo entre las provincias que se incorporen en el esquema de este Fondo puntual de cien millones de pesos.

Consecuentemente aparece como razonable que se adopte el procedimiento de distribución del régimen de coparticipación federal respecto de las provincias que eventualmente se incorporen como potenciales beneficiarias de este Fondo. En ese sentido dejo planteada la necesidad de modificar esta disposición.

Asimismo, apoyando las opiniones vertidas por los señores diputados Vitar y González Gaviola acerca de que el índice para medir el menor desarrollo relativo no es un parámetro que surge directamente de la información que suministran los organismos específicos de medición, sino que es un índice complejo que resulta de distintas variables y no está sistematizado a partir de algunos de los índices oficiales, surge la conveniencia de que para la definición de las provincias que podrían ser potencialmente beneficiarias se adopten índices que efectivamente sean confeccionados por los entes técnicos apropiados.

A tal fin, la pauta de la densidad poblacional podría ir acompañada del índice de necesidades básicas insatisfechas y del indicador de la mayor tasa de desempleo, que también son oficiales. De esa forma los tres índices servirán como parámetro y suministrarían una información directa, no sometida a opiniones o subjetivizaciones vinculadas con la medición del desarrollo relativo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Bravo (L. A.). — Señor presidente: voy a ser muy breve en mi exposición y, si el señor presidente de la comisión me escucha dos minutos, posiblemente podamos lograr que esta norma sea positiva, federalista y se convierta en una muy buena ley para el país. Pero para ello habría que hacer algunas modificaciones.

El señor diputado por la Unión Cívica Radical, ex ministro de Economía, estaba preocupado por la suerte de la Capital Federal, y ésta tiene los problemas que las provincias del interior del país le trasladamos. Me refiero a los problemas de hacinamiento, falta de vivienda y de todo aquello que planteó el señor diputado Jesús Rodríguez. Les aseguro que no se trata de gente de la Capital Federal sino que viene de las provincias a vivir aquí buscando mejores posibilidades de trabajo.

Nosotros tenemos formas de solucionar este problema: dando más dinero a las provincias que menos tienen. Si el señor diputado Suárez me escucha creo que con el espíritu federalista que tiene el bloque Justicialista —claro que he escuchado con atención al señor diputado Cor-

chuelo Blasco—, podremos llegar a un acuerdo que sea favorable para el país y que signifique una reparación histórica para el interior. En este sentido propongo que el segundo párrafo del artículo 8º quede redactado de la siguiente manera: "Del total del patrimonio del Fondo se deducirá la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000) que se aplicará a la constitución de una cartera de crédito adicional, reservada a la demanda de las provincias con excepción de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba". No es que tenga absolutamente nada contra estas provincias pero la realidad es que son las tres más ricas del país y que han crecido en demasía comparadas con el resto.

El artículo continúa diciendo: "De los fondos resultantes, se destinarán 50 % a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias". Aquí ni siquiera se ha respetado el porcentaje de la Ley de Coparticipación Federal, que establecía un 54 por ciento para las provincias y un 46 por ciento para la Nación. Como éste ha sido un número elegido al azar propongo otro que me parece más justo. De manera que quedaría redactado así: "De los fondos resultantes, se destinarán el 40 % a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante...", o sea, el 60 por ciento, "...a proyectos propuestos por las provincias".

Las provincias tenemos la seguridad de saber cuáles son las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior del país; esto es lo que nos está faltando. Siempre se ha dicho que este país es una cabeza gigante con pies de barro. Hoy podemos dar vuelta esta historia. Si de estos 3.500 millones futuros que le vamos a conseguir al Banco Hipotecario logramos destinar la mayor cantidad de fondos a las provincias relegadas del país, vamos a dar vuelta la historia de la República Argentina.

Si el bloque Justicialista, que es mayoría, acepta la modificación de este artículo podemos empezar la verdadera transformación del país. Estas son las dos modificaciones que propongo al artículo 8º y espero que el presidente de la comisión las comprenda y nos acompañe en nuestro deseo.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad.— Señor presidente: este artículo 8º es uno de los puntos centrales de la norma. Para desarrollar las objeciones que presenta, y aprovechando la presencia del señor presidente del Banco Hipotecario Nacional, el licenciado

Rojo, solicito se me informe cuál es el monto de la deuda que esta entidad tiene con el Banco Central de la República Argentina ya que en ninguna parte del proyecto se menciona.

Sr. Suárez.— El monto de la deuda que el Banco Hipotecario Nacional mantiene con el Banco Central es de 526 millones.

Sr. Fayad.— Agradezco la información, porque uno de los ejes centrales de la argumentación en favor de la aprobación de esta ley nos habla de la enormidad de recursos que va a posibilitar la constitución de este Fondo con el producido de la venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional.

Los vicios de redacción del artículo 8º nos llevan a objetarlo en su totalidad.

Si tomamos en cuenta un valor estimado del Banco, que según algunas publicaciones podría oscilar entre dos mil y tres mil millones de pesos, podemos arrancar de la cifra de dos mil millones.

Se inicia, entonces, retirando 100 millones de pesos para atender a algunas provincias y crear una cartera de crédito adicional para las provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo. Nos están quedando 1.900 millones de pesos.

Pero inmediatamente después la ley establece que de los fondos resultantes se destinará el 50 por ciento a la financiación de proyectos propuestos por la Nación.

Si al inicio ya estamos sustrayendo ese 50 por ciento, en este Fondo quedan 950 millones. La ley no es clara en este punto porque a continuación no dice "el 50 por ciento restante", sino que establece que el porcentaje restante será para proyectos provinciales.

Allí surge la primera duda, porque en virtud del artículo 26 el Banco Hipotecario Nacional asume la deuda que tiene con el Banco Central, y se trata, nada más ni nada menos, que de 525 millones de pesos.

¿Con cuál de las dos partidas se van a atender estos 550 millones de pesos? Siguiendo el orden de prelación que establece la ley, sustraido el 50 por ciento que se reserva la Nación —ya estamos en 950 millones—, si se llega a abonar la deuda con el Banco Central de 525 o 550 millones de dólares, van quedando en este Fondo 400 millones.

Sr. Balestrini.— ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Fayad.— Permítame terminar la idea, señor diputado, y después le concederé la interrupción.

Sr. Presidente (Pierri). — Advierto al señor diputado que resta un minuto para que finalice el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Fayad. — Decía, señor presidente, que en el minuto que me queda se le va a acabar la plata a este fondo que se propone distribuir entre las provincias.

Le quedan 400 millones, pero el artículo 35 indica que se capitalizará con 100 millones al Banco de la Nación, con lo cual quedan 300. A su vez, en el artículo 35 se hace referencia a que también se van a sustraer 100 millones para financiar la construcción de 50 mil viviendas, tal como dijo el señor diputado Matzkin. Sería bueno que después me indique cómo van a construir 50 mil viviendas con cien millones de dólares, porque ese dinero alcanza para construir 3.300 viviendas a razón de 30 mil pesos por unidad. O sea que para construir las 50 mil viviendas de las que habla el señor diputado Matzkin hacen falta 1.500 millones de dólares, y según lo que estamos viendo van a quedar escasamente 200 millones de dólares para repartir entre todas las provincias.

Solicito que el cuerpo prorrogue excepcionalmente por cinco minutos el tiempo que me corresponde a fin de que pueda hacer referencia a este tipo de cosas, si realmente es intención del bloque de la mayoría que legislemos en serio y que lo que contengan nuestras leyes no sólo se ajuste a la normativa de la racionalidad sino también de la viabilidad de la distribución de los fondos. En tal sentido solicito que someta a la consideración del cuerpo mi pedido.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: no es necesario someter su petición a consideración del cuerpo ya que los diputados del bloque Justicialista me han indicado que no conceden la prórroga solicitada.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Ocampos. — Señor presidente: atendiendo a lo menguado de las cifras que ha explicitado el señor diputado Fayad y que corroboran los dichos del señor diputado Suárez en cuanto a la deuda que tiene el Banco Hipotecario Nacional con el Banco Central, quiero decir que evidentemente estamos ante un engaño solapado que se les ha hecho a los gobernadores cuando se les hizo rubricar el acta para la aprobación del Fondo Fiduciario. No obstante esta situación, y tratando de dar un mínimo contenido federal a este Fondo, avalamos la propuesta del señor diputado Corchuelo Blasco en cuanto

a su distribución entre las provincias. Asimismo, solicito que la propuesta del señor diputado Corchuelo Blasco sea sometida a votación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: cedo la palabra para una aclaración al señor diputado Balestrini, presidente de la Comisión de Finanzas.

Sr. Balestrini. — Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración con respecto a lo que considero un error técnico involuntario en el que ha incurrido el señor diputado Fayad, quien seguramente opinó con la mejor buena voluntad. El confunde lo que son cuotas de financiamiento con las cuotas de recursos para gastar. Al hacer el cálculo que lo lleva a decir que las provincias se van a quedar con 200 millones de pesos, está sumando y restando conceptos que no pueden sumarse ni restarse porque son de naturaleza totalmente distinta.

Los importes provenientes de la venta del Banco Hipotecario Nacional van a constituir un fondo financiero. Lo que se distribuye entre las provincias son cuotas de financiamiento que tendrán que devolver en cuatro o cinco años o en el plazo de financiamiento que sea. Cuando se está hablando de la transferencia de la actual deuda que tiene el Banco Hipotecario Nacional con el Banco Central...

Sr. Vicchi. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado...?

Sr. Balestrini. — Enseguida concluyo; después con mucho gusto.

Decía que cuando hablamos de la transferencia de esa deuda nos estamos refiriendo a la transferencia de un crédito que tiene plazo de financiación íntegro, sin cuota de amortización en el tiempo intermedio de veinte años y a una tasa de interés del 2 por ciento anual. Vale decir que este Fondo Fiduciario nace con un activo producto de la venta del Banco Hipotecario Nacional, y con un pasivo producto de la deuda que éste tiene con el Banco Central. Esto significa que el total del activo que va a tener el Fondo Fiduciario —los 2.500 o 3.000 millones que se logren con la venta— van a ser cuotas de financiamiento que tomarán la Nación o las provincias en los porcentajes que les correspondan. No se pueden detraer los 500 millones que van a ser cancelados una vez que concluya el objetivo de este Fondo, que es el de financiar obras públicas.

En consecuencia, por mejor voluntad que pueda tener el señor diputado Fayad, creo que es incorrecto sumar y restar cosas que no tienen

sentido, y que no pueden compararse de la manera que él lo ha hecho.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Fayad. — Yo no he formulado ninguna propuesta...

Sr. Bravo (L. A.). — ¿Qué propuestas se van a votar?

Sr. Fayad. — La comisión propone reemplazar el último párrafo del artículo 8º por el siguiente: "A su vez, el financiamiento correspondiente a las provincias, se asignará conforme a los índices de los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a las disposiciones vigentes".

Asimismo, propiciamos agregar al final un nuevo párrafo: "Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional del año 1997, para incorporar los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los gastos destinados a las obras no incluidas en dicho presupuesto".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 8º con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: decíamos en la discusión en general que uno de los vicios que han tenido las privatizaciones menemistas es la concentración de privilegios en determinados sectores económicos.

Si sancionamos el artículo 9º en la forma en que está redactado estaremos abriendo un precedente a la posibilidad de que estos sectores sigan acumulando subsidios en una Argentina en donde el subsidio hacia los sectores vulnerables está prohibido, pero siguen subsidiados los concesionarios de ferrocarriles, de peajes y de subterráneos.

Creemos que la inversión de riesgo en aquellos servicios públicos que han sido concesionados corresponde hoy al sector privado. Pero mediante el inciso d) del artículo 9º —precisamente en el anexo del proyecto de ley— se abre la posibilidad de que el Fondo Fiduciario sea destinado a atender obras cuyo financiamiento

corresponde al riesgo privado de aquellos concesionarios de los servicios públicos privatizados.

Por lo tanto, a los efectos de no generar este precedente, proponemos a la comisión la supresión lisa y llana del inciso d) a fin de que para el financiamiento de obras públicas prime el criterio de la presentación de proyectos debidamente fundados por parte de las provincias y de la Nación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: más allá de las objeciones formuladas por el señor diputado González Gaviola, deseo referirme al inciso c) del artículo 9º, que con las modificaciones introducidas por la comisión ha quedado redactado de la siguiente forma: "En cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial, ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operativa y funcional".

Al respecto es válida la observación que formular en torno de la consideración de otros artículos. Mediante una ley nacional no se pueden sustraer recursos que en definitiva serán de las provincias. En función de la jerarquía y el respeto del federalismo, las provincias deben mantener la facultad necesaria para contemplar presupuestariamente los fondos de los que se trata, sobre todo si se comprometen regalías y coparticipación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Fayad. — Por lo tanto, proponemos la eliminación del inciso c) del artículo 9º.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: en caso de que persista el inciso c) del artículo 9º, en concomitancia con el artículo 7º y el carácter extrapresupuestario contenido en el artículo 4º, pregunto qué ocurrirá cuando parte de este Fondo sea prestado a una provincia y ésta deba avalar el monto del crédito con recursos de su coparticipación. ¿En tal caso esa provincia deberá sacar del presupuesto el monto de la coparticipación que le corresponde para depositarlo en

la cuenta del Fondo, pues éste no puede tener carácter presupuestario dentro de la provincia?

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: respecto del artículo 9º las modificaciones propuestas por la comisión son las siguientes: en el inciso c), donde dice "...ni de ningún otro mecanismo similar, guardando...", debe decir: "...ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando...".

En el inciso d), donde dice: "...con carácter indicativo las obras de infraestructura...", debe decir: "...con carácter indicativo los tipos de obras de infraestructura...".

En consecuencia, la comisión no hace lugar a ninguna otra propuesta de modificación.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 9º con las modificaciones propuestas por la comisión.

En razón de que no hay número suficiente para votar, la Presidencia ruega a los asistentes de bloque que arbitren las medidas necesarias a fin de que los señores diputados se hagan presentes en el recinto.

Sr. Fayad. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: habrá advertido usted un ánimo diferente respecto de la oposición en trabajar de manera seria en este proyecto de ley. Nosotros hemos formulado importantes observaciones a artículos rayanos en la inconstitucionalidad y la ilegalidad, e incluso se han introducido modificaciones en relación con las provincias más allá del tremendo y reconocido esfuerzo intelectual que hizo el señor diputado Balestrini, pero si la comisión, el señor diputado Suárez o quien represente al bloque de la mayoría tiene la determinación política de no aceptar ninguna de las sugerencias que formulamos, el bloque radical se va a retirar porque estamos considerando innecesaria nuestra presencia en el recinto. Si no aceptan nuestras modificaciones y si ni siquiera resisten con argumentos sólidos las observaciones que hemos venido formulando —en nuestro ánimo está trabajar en el mejoramiento de esta norma, que nos presenta numerosas objeciones—, entonces tendremos que tomar esa determinación.

Advertimos un "no" categórico ante cualquier observación que formulamos, incluso en los casos de artículos donde demostramos su confusa dación, rayana con la ilegalidad.

Por lo expresado, solicitamos al bloque mayoritario que tenga un cierto nivel de permeabilidad o por lo menos que nos den los argumentos por los que no aceptan las críticas tendientes a mejorar una ley que es un mamarracho.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño. — Señor presidente: deseo realizar una aclaración, teniendo en cuenta lo planteado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. En ese encuentro, el justicialismo escuchó la problemática de los distintos bloques. En ese sentido se abrió la lista de oradores para que los distintos bloques expresaran su opinión sobre esta norma, por supuesto cada uno desde su distinta posición.

Lo planteado por el señor diputado nada tiene que ver con lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Si sejeta la presencia en el recinto a que aceptamos las modificaciones, está equivocado porque eso no fue lo planteado en Labor. En ese caso, hubiésemos concurrido al recinto para votar la norma con el quórum estricto, terminando de inmediato este debate, que estamos llevando adelante y donde cada bloque plantea su posición. Cada señor diputado plantea lo que quiere y este bloque lo acepta o no. Esa es la forma en que funciona el Parlamento. Lo incorrecto es pensar que para permanecer en el recinto debemos aceptar las modificaciones propuestas.

Nuestro bloque cumplió lo acordado, se abrió la lista de oradores y todos pudieron expresar su opinión.

Incluso, si bien podrían votarse los capítulos II y III en forma directa, estuvimos de acuerdo en que se votara artículo por artículo. De manera que el recinto es el lugar adecuado para el tratamiento de la norma y cada bloque tiene que hacer todo lo necesario para que pueda mantenerse el quórum. Advierto que la presencia de diez diputados radicales no significa que esté presente la totalidad del bloque.

Todos debemos hacer el gran esfuerzo para poder seguir sesionando. Ese es el compromiso que nos pusimos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia reitera a los asistentes de los bloques que hagan todos los esfuerzos para lograr que los señores diputados que se encuentran en el Salón de Pasos Perdidos se acerquen al recinto para poder lograr el quórum.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: quiero aclarar al señor diputado Camaño que nadie está planteando a modo de chantaje la permanencia en el recinto a cambio de que se acepten las modificaciones.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Vitar. — Pero los diputados nos merecemos una explicación del presidente de la comisión cuando se rechazan las modificaciones propuestas. En ese sentido hemos estado proponiendo ideas por lo menos durante media hora en cuanto al artículo 8º y la única respuesta fue el silencio. Entonces, nadie está chantajeando; estamos pidiendo un trato acorde con la investidura que tenemos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri. — Señor presidente: lo que debe procurarse es no afectar un estado de ánimo. Lo que el señor diputado Fayad ha planteado está relacionado con un intenso trabajo que se ha hecho en torno a esta norma. Obsérvese que recién frente a una observación del señor diputado Fayad, el señor diputado Balestrini dio una explicación que uno puede compartir o no. El señor diputado hizo un razonamiento en relación con el significado de los fondos y la capitalización del Banco Nación, pero lo que ahora se está planteando es el respeto mínimo que nos debemos entre todos frente a propuestas serias y racionales. No puede ser que como respuesta se diga que no se acepta nada y ni siquiera se dé el respectivo argumento.

La expresión del señor diputado no tiene nada que ver con los planteos que se han venido formulando. No hay por qué enojarse, gritar o patotear. No estamos pidiendo que compartan nuestra posición sino que expliquen las cosas como corresponde.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — La Presidencia ha explicado cuál era el funcionamiento de la presente sesión y los compromisos adquiridos en la Comisión de Labor Parlamentaria. Esto es lo que debe respetarse si realmente se cumple con la palabra empeñada.

Observo que en este momento la Unión Cívica Radical no está respetando el compromiso acordado delante del resto de los bloques, porque sus diputados no están presentes en el recinto.

Nuestra intención es seguir trabajando y dar todas las explicaciones del caso; con algunas propuestas probablemente estemos de acuerdo y con otras no. Por ejemplo, hace instantes se acercó el señor diputado Fragoso e hizo una observación con respecto a un artículo que podemos considerar razonable y que será tenida en cuenta en su momento. No sé qué otras modificaciones se solicitarán al considerarse los próximos artículos, pero ante todo debemos dejar en claro que es necesario cumplir con los acuerdos porque si no resultará difícil que esta Cámara funcione no sólo ahora sino también en el futuro, porque no tendría credibilidad lo que acordemos en presencia de la totalidad de los bloques.

Debemos tomar conciencia de que si adquirimos un compromiso tenemos que cumplirlo, porque nadie fue a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria obligado a algo; todos somos libres y decimos lo que queremos, pero una vez que se ha sellado un acuerdo hay que cumplirlo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Viechi. — Señor presidente: en diversas oportunidades tratamos leyes sumamente conflictivas en donde se pactaban aspectos relacionados con el procedimiento. Pero en relación con el presente proyecto hay que reconocer que el procedimiento no ha sido tan santo como para pretender depender exclusivamente de lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Con todo respeto deseo expresar al señor presidente del bloque oficialista que la mayor responsabilidad la tiene su propia representación, es decir, si la totalidad de sus diputados estuvieran sentados a sus bancas respaldando un proyecto que pretenden sancionar podría tener algún tipo de exigencia con las minorías, a pesar de que éstas también cuentan con mecanismos que les permiten obstruir la aprobación de determinadas iniciativas. No obstante, vamos a tratar de contribuir para que esta norma se apruebe, pero no vamos a dejar de recordar que esta iniciativa tuvo muchas irregularidades en su procedimiento. La última de ellas fue que al comenzar esta reunión, que es continuación de la iniciada la semana pasada, apareció un escrito que reformuló una serie de artículos del proyecto que estamos considerando. Este es el marco de estudio que se ha dado a esta norma. Es reducido y pequeño y, además, cuando se quiere discutir para mejorarlo, ni siquiera se lo quiere hacer.

Entonces, aquí no es cuestión de que algunos tengamos que poner todo para que otros obtengan los beneficios concretos de una legislación que nosotros pensamos que le hará mucho daño al país. Esto hay que decirlo con absoluta claridad: nos comprometemos a continuar trabajando, pero la responsabilidad primaria es del bloque que debería contar con la totalidad de sus diputados en el recinto para aprobar esta iniciativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: he sido aludido y quiero hacer un comentario. No tengo ninguna duda de que en la oposición existen legisladores muy capaces e inteligentes. Tal vez yo no lo sea tanto, pero no tengo un grado de ingenuidad tan grande como para no darme cuenta de que algunas exposiciones simulan la no comprensión de cuestiones que son totalmente claras.

Entonces, se plantean aspectos que no guardan ninguna relación con la letra de los artículos. Se busca prolongar el debate a fin de esperar que los diputados se retiren del recinto y fracase la sesión. Yo he brindado explicaciones en varios artículos. Si hemos cambiado de procedimiento, lo hicimos porque hemos advertido que existe una simulación. Por supuesto que ha habido propuestas concretas, como la del señor diputado Vitar, que no hemos aceptado porque no estamos de acuerdo con ella. Sin embargo, en otros casos se mezclan artículos con cuestiones que están fuera del tratamiento y se realizan conjeturas incorrectas.

Si me dedicase a responder esas cuestiones, estaría formando parte del juego de ganar tiempo para que esta sesión fracase. No se trata de ninguna falta de respeto. No ofendan nuestra inteligencia. Si ustedes creen que son vivos y nosotros, tontos, entonces nos están faltando el respeto.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Sat. — Señor presidente: con el respeto que me merecen mis pares, no voy a dar ninguna cátedra, porque no soy profesor de nada. Sólo quiero señalar que estamos aquí para legislar. Elaboramos las normas y ellas son aplicadas por los jueces. Entonces, cualquier exposición que haga un legislador, sea aceptada o no, sirve como fuente de interpretación cuando los jueces aplican la legislación.

Por eso muchas veces hablamos de la ley y de su espíritu. Las exposiciones de las bancadas opositoras han sido receptadas para figurar en

el Diario de Sesiones y servirán para que los jueces puedan interpretar cabalmente lo que hemos querido hacer, tanto por parte del bloque mayoritario como de la oposición.

Por ello, el esfuerzo de los legisladores de las bancadas no oficialistas es meritorio y no es inservible. No ha sido arrojado al tacho de basura por el señor presidente de la Comisión de Vivienda, ya que el día de mañana servirá para que esta norma sea aplicada a todos los ciudadanos de la República.

Sr. Presidente (López Arias). — Por Secretaría se ha informado a la Presidencia que hay 154 señores diputados en la casa, de modo que si se verifica la presencia de los legisladores, en las diversas dependencias de esta Cámara, es posible que rápidamente reunamos quórum.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: esta tarde participé de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y solicité que luego de que se aprobara el proyecto de ley que estamos debatiendo en particular se tratara el proyecto contenido en el expediente 13-P.E.-97, que se refiere a una importante cantidad de insumos hospitalarios que están en la Aduana, en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

En la mencionada reunión se dijo que luego de la sanción de la norma en consideración los diputados podríamos proponer el tratamiento de asuntos que no implicaran una gran discusión y estuvieran acordados. Este es justamente el caso del proyecto que mencioné sobre terminación y puesta en funcionamiento de hospitales en las ciudades capitales de Salta, Córdoba, y Neuquén, y Resistencia, provincia del Chaco.

Esta tarde me comuniqué con el ministerio del área con el objeto de ampliar toda la información relativa a este asunto por si algún señor legislador requería mayores precisiones. Se trata de un proyecto originado en un decreto gestado en 1987 durante el gobierno del doctor Alfonsín, cuando en las provincias rogábamos porque alguien financiara la construcción de once hospitales en el país.

Hoy la democracia se permitió tomar un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo, y de los once podemos tener cuatro hospitales listos. Sin embargo, no podemos sacar del ámbito de la Aduana el equipamiento de dos hospitales ni podemos terminar los otros dos.

El proyecto en cuestión cuenta con la aprobación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asistencia Social y Salud Pública, y en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se dijo de viva voz que se haría el

esfuerzo de permanecer en el recinto para permitir el debate democrático.

No es aceptable que los miembros de la bancada radical sostengan que es responsabilidad del bloque mayoritario reunir quórum porque nosotros hemos acompañado a legisladores de todas las bancadas cuando por razones personales o políticas de armamento de sus listas o de disidencias los radicales no tuvieron una presencia permanente y completa...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Corchuelo Blasco. — Aquí también hay necesidades personales de diputados que no están.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita al señor diputado por Chubut que contribuya a crear un clima de concordia que permita reunir quórum.

Sr. Corchuelo Blasco. — El mayor clima de concordia implicaría pedir al radicalismo que en vez de hacer "manganetas" nos ayude a sancionar el proyecto de ley que permite la apertura de hospitales en Córdoba y el Chaco, donde hay gobernadores radicales; en Neuquén, donde no hay un gobernador justicialista...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: quiero formular una exhortación a la bancada Justicialista. Oportunamente el bloque del Frepaso solicitó el desdoblamiento de este proyecto de ley para que, como habíamos obtenido consenso en el seno de las comisiones que trataron esta iniciativa, previo a la discusión sobre la privatización del Banco resolviéramos el problema referido a los deudores del Banco Hipotecario Nacional.

Advertimos con dolor que el oficialismo ha puesto una gran voluntad para ubicar en sus bancas a 130 señores diputados a fin de votar la privatización del Banco, pero no reúne más de 70 en este momento, precisamente cuando estamos por comenzar a debatir el problema que afrontan más de 70 mil familias argentinas.

Por eso exhorto a la bancada que tiene la responsabilidad respecto de esta iniciativa y la mayor integración de la Cámara para que completemos este ciclo y ya que hemos hecho tanto daño, al menos terminemos la noche haciendo algún bien al resolver la situación de aquellos deudores del Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Bravo (L. A.). — Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia informa al señor diputado que mientras se está llamando para votar no puede hacer uso de la palabra, según lo establece el reglamento. Luego de la votación tendrá todo el derecho a expresar su opinión.

Se va a votar el artículo 9º con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en particular el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: quien preside la bancada Justicialista dijo hace unos minutos que le parecía bien que el radicalismo haya reiterado en sus exposiciones la posibilidad de volver a cometer errores antiguos. Sin embargo, en el artículo 10, al que podríamos calificar como el del "se va el caimán, se va el caimán", el oficialismo está reiterando errores cometidos en su gestión, donde a través de la participación de la recordada funcionaria María Julia Alsogaray, mejor dicho, Adelina Dalesio de Viola... (Risas.)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. González Gaviola. — Da igual, compañeros peronistas.

Este artículo otorga la facultad de que la administración del Fondo Fiduciario puede ser jugada a la ruleta económica, pudiendo generarse en estas circunstancias un deterioro de su patrimonio.

Por ello, para evitar errores pasados y cumplidos por la administración menemista, queremos modificar este artículo para que el Fondo Fiduciario no termine perdiéndose en las islas Caimán o en algún otro centro financiero. En tal sentido proponemos la siguiente redacción: "Los recursos del Fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente deberán ser depositados a plazo fijo en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina."

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: sin una argumentación tan chispeante como la del señor diputado González Gaviola, quiero decir que comparto la preocupación por la laxitud de este artículo y también deseo proponer una redacción alternativa que no dificulte de ninguna manera a este fondo sino que, por el contrario, garantiza su adecuada preservación. La redacción que proponemos es la siguiente: "Los recursos del Fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente deberán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen nacional como provinciales, previamente calificados".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: el artículo 10 establece una imposición al decir que los recursos deberán ser invertidos transitoriamente en bienes de fácil realización y bajo riesgo. Ya expresé durante la consideración en general el peligro que implica mantener esta redacción. Por eso nos atrevemos a sugerir que el texto diga que los recursos podrán ser invertidos transitoriamente en bienes o títulos públicos provinciales o nacionales, coincidiendo así con la proposición formulada por el señor diputado Olima.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — Señor presidente: quisiera que el señor diputado Olima me precise nuevamente su propuesta, porque por el bullicio no alcancé a escucharla con claridad.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: proponemos la siguiente redacción: "Los recursos del fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente deberán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen nacional como provinciales, previamente calificados".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Suárez. — La comisión acepta la modificación propuesta, pero reemplazando la palabra "deberán" por "podrán".

Sr. Presidente (López Arias). — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 10.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — No haré uso de la palabra respecto de este artículo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — En el artículo 11, primer párrafo, en lugar de "...asegurar el recupero, sus intereses, la calidad de las garantías y el cumplimiento de los fines previstos en esta ley...", debe decir: "...asegurar el cumplimiento de los fines previstos en esta ley, el recupero del capital y sus intereses".

Más adelante, donde dice: "...la tasa de referencia será la tasa Libor...", debe sustituirse la coma por un punto y seguido.

En el último párrafo, donde dice: "...su administración delegada por las provincias...", debe decir: "...su administración delegada a las provincias, las que garantizarán con su participación...", suprimiéndose el texto que dice: "...cuando el monto acumulado otorgado a cada provincia supere un millón de pesos (\$ 1.000.000)...".

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas por la comisión.

Sr. Fayad. — Yo había solicitado el uso de la palabra para referirme a este artículo.

Sr. Presidente (López Arias). — Usted no estaba anotado, señor diputado. Estamos votando y lamentablemente no le puedo conceder el uso de la palabra.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — La comisión propone la siguiente modificación: donde dice: "...y contribuciones nacionales, invitándose a...", debe decir: "...y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, invitándose a...".

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Domínguez. — Señor presidente: con la finalidad de promover y garantizar un mayor pluralismo en la integración de la comisión que se

crea mediante este artículo, proponemos que su texto quede redactado de la siguiente forma: "Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Operaciones de Constitución, Aplicación y Liquidación del Fondo Fiduciario, la que estará integrada por siete (7) senadores y siete (7) diputados de la Nación. La integración de la misma deberá reflejar la composición política de ambas Cámaras. Esta comisión producirá informes trimestrales y memoria anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: en relación con el artículo en tratamiento formularé una observación a la que ya hemos hecho referencia en el debate en general.

Estamos muy preocupados porque pese a que los instrumentos legales que normaban la constitución de los dos fondos fiduciarios creados en el año 1995 —tanto el de desarrollo provincial como el de capitalización bancaria—, obligaban a la integración de comisiones bicamerales de seguimiento, éstas jamás se constituyeron. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para señalar de manera enfática que es imprescindible el control parlamentario, dados los niveles de discrecionalidad que existirán respecto del manejo del Fondo Fiduciario al que se refiere este proyecto de ley.

Rogamos a la comisión que tome debida nota de esta observación, y fundamentalmente exhortamos a la Presidencia a que garantice la designación de los diputados que habrán de integrar la comisión bicameral que se crea mediante el artículo 13.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: por un lado se ha formulado una propuesta y por el otro una opinión. Respecto de la primera, nadie puede saber si la comisión funcionará mejor con tres, cinco u once integrantes de cada Cámara. En consecuencia, insistimos en la redacción del artículo 13 del proyecto de ley, que establece que la comisión bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 13.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 14.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo III, artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: ratificamos lo expresado durante la discusión en general en cuanto a nuestra oposición a que el Banco Hipotecario Nacional, sea declarado sujeto a privatización.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: en relación con el artículo 15 advertimos un error de redacción en el texto contenido en el Orden del Día Nº 1.462, que no ha sido subsanado en las respectivas modificaciones. No existe el Banco Hipotecario de la Nación sino el Banco Hipotecario Nacional y debe corregirse la denominación.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Qué dice la comisión?

Sr. Suárez. — Señor presidente: lo dicho por el señor diputado Vitar es correcto pero el dictamen emitido por la mayoría dice "Banco Hipotecario Nacional". No sé por qué razón el texto impreso apareció con el nombre que mencionó el señor diputado, pero le aclaro que con ese motivo se salvó la situación en la respectiva fe de erratas.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 15.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alessandro. — Señor presidente: en este artículo 16 proponemos la siguiente modificación: donde dice "El Poder Ejecutivo procederá a transformar al Banco Hipotecario de la Nación en Banco Hipotecario de la Nación S.A.", propongo que quede "Banco Hipotecario Sociedad Anónima". Considero que no corresponde la utilización del término "de la Nación" para un banco que será de carácter absolutamente privado.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: la observación que iba a realizar es similar a la planteada por el señor diputado Alessandro.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Viqueira. — Es para solicitar una aclaración al señor presidente de la comisión sobre

una expresión de este artículo en el sentido de que el banco privatizado continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor. Concretamente quiero preguntar, y según la respuesta formularé una propuesta, si van a continuar las operaciones vinculadas con el ahorro postal y por otra parte, qué ocurrirá con la administración del Fondo Fiduciario para la financiación habitacional. Son dos facultades que tiene hoy el Banco Hipotecario Nacional, y queremos saber en qué condiciones van a quedar cuando esta entidad sea privatizada.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Qué dice la comisión?

Sr. Suárez. — Señor presidente: el artículo habla de transformar al Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima, nueva figura jurídica, y se agrega que "continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor, salvo lo expresamente derogado por la presente norma". Esto es, una serie de artículos de la ley 24.143 y otros de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional referidos a las exenciones impositivas. Por ello, en el artículo pertinente se aclara que quedarán vigentes sólo para las operaciones crediticias ya concretadas y deberá pagar los impuestos sobre todas las operaciones futuras. Lo mismo ocurre con respecto a las operaciones de securitización y titulización que se encuentran en marcha así como con las obligaciones emergentes de la participación de sociedades originantes que tiene en funcionamiento varias operatorias.

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Viqueira. — Señor presidente: no me satisface la aclaración realizada por el señor miembro informante, porque son más de 130 mil las cuentas de ahorro postal que en este momento están abiertas en el Banco Hipotecario, cuyos titulares tienen una serie de derechos conforme a la legislación vigente.

Por este motivo es nuestra intención que se exprese claramente que estos ahorristas tendrán los mismos derechos que poseen hasta el presente.

En relación con el Fondo Fiduciario consideramos que no puede ser que el agente financiero que puede receptor las carteras hipotecarias de las distintas provincias argentinas sea administrado por una entidad privatizada. En consecuencia, proponemos que expresamente se excluya al futuro Banco Hipotecario privatizado y este carácter de agente financiero lo recepte el Banco de la Nación Argentina.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: en relación con las cuentas de ahorro aclaro que las obligaciones del actual Banco Hipotecario Nacional, continuarán a cargo de su predecesor, por lo cual entendemos que esos derechos están debidamente resguardados y comprendidos en la redacción propuesta.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita al señor miembro informante que aclare si la futura entidad se denominará Banco Hipotecario de la Nación Sociedad Anónima o Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima.

Sr. Suárez. — Señor presidente: tanto en el texto del dictamen como en las modificaciones que obran en su poder se dice que la nueva entidad se denominará Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 16 conforme al texto al que se acaba de referir el señor miembro informante de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 17.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: el presente artículo es una de las piedras angulares que el oficialismo pretende dar al proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional.

Por ello, quiero hacer un último llamado a la reflexión a los señores diputados del bloque oficialista para que esta norma, que prácticamente es un mini marco regulador de lo que seguirá haciendo el banco en manos del sector privado, garantice que este instrumento que estaba dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de ingresos medios y bajos siga funcionando en el mismo sentido. De esa manera, la gestión privada tendrá la oportunidad de demostrar que es capaz de hacer más fácil el acceso a la vivienda con mejores tasas, mayores plazos y menores costos pero sin desvirtuar el sector social al que está dirigido.

El artículo 17 del dictamen de mayoría contiene un tema fundamental del proyecto de ley.

A nuestro criterio, el artículo 17 contiene varios errores sustanciales, que deben ser enmendados. Al inicio del artículo se dice: "El Banco Hipotecario de la Nación S.A. deberá atender, en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo y por el plazo de diez (10) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, las siguientes actividades:..."

Me pregunto si hemos realizado algún estudio debidamente fundado en el sentido de que el déficit habitacional o las dificultades del sector que debe ser ayudado por el banco se van a resolver en los próximos diez años, ya que éste es el plazo que se ha fijado. Como creo que ello no es así, recomiendo la eliminación de este párrafo en el que se establece un plazo de diez años al Banco Hipotecario.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia ruega a los señores diputados que hagan silencio.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — El inciso a) del artículo 17 expresa: "Financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país, por sí o a través de terceros, asegurando una armónica distribución regional del crédito, de modo tal de hacer accesible el mismo a los diversos sectores de la comunidad".

Esta no es una entidad dedicada a la atención de la diversidad de la oferta, sino que se pensó para focalizar, ampliar y complementar el resto de las ofertas que debe realizar el sector privado. Así observamos cómo se desvirtúa el accionar del banco y la forma inadecuada en que el Estado se retira de esta función.

El inciso b) señala: "Mantener líneas de créditos destinadas a la financiación de la construcción de viviendas en pequeñas localidades, destinando anualmente a estas operaciones no menos del diez por ciento (10%)..."

Me pregunto, para ser gráfico, si el diez por ciento es para financiar la casa del presidente Menem en la pequeña localidad de Anillaco o para financiar la vivienda de los sectores de bajos recursos de esa pequeña población. Ello no está expresamente aclarado.

Pareciera que en la baneada del oficialismo, el tema de regular la actividad de lo que se está dejando al sector privado no es importante.

Por lo expuesto proponemos que el artículo 17 contemple —solicito al señor presidente de la Comisión de Vivienda que tenga la bondad de escucharme, ya que tendrá que expedirse sobre mi moción— la siguiente redacción: "El Banco Hipotecario de la Nación S.A. deberá atender las siguientes actividades: a) Financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país, por sí o a través de terceros, asegurando una armónica distribución regional del crédito, de modo tal de hacer accesible el mismo a los sectores de la sociedad con ingresos medios y bajos; b) Mantener líneas de créditos destinadas a la financiación de la construcción de viviendas en pequeñas localidades, destinando anualmente

a estas operaciones no menos del diez por ciento del total de créditos que otorgue para la construcción, debiendo contemplar una equitativa distribución geográfica. Preservar la constitución del fondo especial previsto en el artículo 13 de la ley 24.143 en los términos que se establece para el cumplimiento de estas obligaciones. La sociedad podrá mantener en sus actuales términos y condiciones la actividad permitida al Banco Hipotecario Nacional por el artículo 24, inciso i), de su Carta Orgánica y por la ley 24.626. El Banco Hipotecario Nacional S.A. deberá, para continuar con la actividad aseguradora, constituir o participar de una sociedad sujeta a la legislación vigente en la materia, que tenga por objeto específico el otorgamiento de seguros; c) Destinar anualmente como mínimo un 30 por ciento de su cartera de préstamos a los efectos de financiar la construcción y adquisición de viviendas únicas para grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen los mil pesos."

Creo que de esta manera queda mucho más precisada la función que debe cumplir este banco, que no es la de cualquier banco privado.

Solicitamos respetuosamente a la bancada mayoritaria que tenga a bien contemplar la posibilidad de introducir las modificaciones solicitadas.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alessandro. — Señor presidente: deseo solicitar una precisión por parte del miembro informante —me parece que no está presente en este momento—, pues no me quedó en absoluto claro el resultado de la votación anterior. En concreto quiero saber cómo se va a llamar el nuevo banco.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita al señor diputado por la Capital que no retroceda en el trámite de la sesión: eso quedó absolutamente claro.

Sr. Alessandro. — Vuelvo atrás, señor presidente; eso no quedó claro; se puede recurrir a la versión taquigráfica. El señor diputado Suárez dijo que, tal como figura en los papeles que tenemos sobre nuestras bancas, hemos votado "Banco Hipotecario Nacional S.A.", pero en todos los textos que tenemos en nuestro poder dice "Banco Hipotecario de la Nación S.A."

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia recuerda al señor diputado por la Capital que existe una fe de erratas porque hay un error de impresión en ese sentido, lo que quedó suficientemente claro.

Sr. Alessandro. — Señor presidente: ninguno de nosotros tiene esa fe de erratas al respecto.

Existe una fe de erratas que se refiere a cómo se llamaba el banco antes de esta norma, y dice: "Banco Hipotecario Nacional que se convertirá en Banco Hipotecario de la Nación S.A.". Por eso deseo saber, de acuerdo con el resultado de la votación anterior, cuál es el nombre para el nuevo banco.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita al señor diputado por la Capital que continúe con su exposición, pues luego le brindarán las explicaciones pertinentes.

Sr. Alessandro. — Comparto las expresiones vertidas por el señor diputado González Gaviola con respecto al artículo 17. Asimismo deseo recordar expresiones vertidas por el señor presidente del Banco Hipotecario Nacional —no sé si aún continúa presenciando esta sesión—, en oportunidad de su visita al plenario de las comisiones que debatió la privatización de esta entidad.

Cuando se le preguntó por qué se establecía un plazo de diez años, que parecía arbitrario, para el mantenimiento de las funciones inalienables del banco que preside, el licenciado Rojo respondió lo siguiente: "En esas condiciones es probable que en los próximos diez o quince años la Argentina esté en aptitud de solucionar los problemas de déficit crónico en materia habitacional", y más adelante continúa: "Por esta razón en el proyecto de ley se contempla el mantenimiento de estas funciones durante un período de 15 años".

Acá habla de diez años, pero lo grave son las expresiones del licenciado Rojo, quien sostiene que en los próximos diez o quince años la Argentina estará en aptitud de solucionar el déficit crónico en materia habitacional. ¿Qué estudios avalan estas temerarias afirmaciones de las cuales se desprende esta cláusula por la cual las funciones sociales del Banco Hipotecario continuarán sólo por diez años?

Hago un llamado a la reflexión —si cabe a esta altura— a los señores diputados justicialistas, pues se está poniendo un plazo fijo de defunción de las funciones sociales que sostienen mantener. Según el licenciado Rojo, dentro de diez años podrá competir como banco comercial con las restantes entidades del sistema financiero.

Eso es lo que afirmó el licenciado Rojo el 30 de octubre de 1996 cuando concurrió al seno de las comisiones que trataron esta cuestión. Tal afirmación desvirtúa todo lo que el oficialismo viene sosteniendo en el sentido de que el Banco Hipotecario de la Nación no va a dejar de lado los fines sociales.

Por lo tanto, reitero la propuesta formulada por mi compañero de bancada, el señor diputado González Gaviola, en el sentido de eliminar el plazo de diez años y no fijar ningún término. Estas últimas son las condiciones en que debe operar siempre el Banco Hipotecario.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Bravo (L. A.). — Señor presidente: solamente he solicitado el uso de la palabra para aclarar el orden de los incisos de este artículo. Entiendo que el segundo párrafo del inciso b) debería ser el inciso c) de este artículo, atento que comienza con el verbo "preservar". Eso guardaría consonancia con los verbos "financiar" del inciso a) y "mantener" del inciso b).

Como se podrá advertir, es totalmente diferente el sentido de la redacción que viene a continuación de "una equitativa distribución geográfica", que es como termina el inciso b).

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Viqueira. — Señor presidente: no quiero abundar en lo que ha manifestado el señor diputado González Gaviola, pero insisto en la diferencia de redacción del texto contemplado por el artículo 4º de la ley 24.143 y el contenido del inciso a) de este artículo 17.

Si la idea es preservar el espíritu de la entidad como banco de fomento, que tenga en cuenta la situación social y el acceso a la vivienda de aquellos sectores que no lo tienen no encuentro explicación acerca de por qué no se ha mantenido la redacción del artículo 4º de la ley citada. En esta última disposición se alude a que la actividad del banco tiene por objetivo atender las necesidades de la población en materia de vivienda social única y desarrollo urbano. Este texto ha sido modificado por la expresión "financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país". Entiendo que no se trata de la misma actividad y por eso insisto en que se preserve el espíritu de lo consignado en el artículo 4º de la ley 24.143 y que expresamente se haga constar que la actividad del banco tendrá por objetivo financiar la vivienda social única.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: siguiendo la misma línea de las observaciones realizadas por los señores diputados preopinantes quiero formular una pregunta porque siendo el Banco Hipotecario Nacional S.A. un sujeto de derecho privado no me queda en claro cómo va a garantizar el Estado nacional esas definiciones que

indican que va a asegurar una módica distribución regional del crédito o que lo hará accesible a los diversos sectores de la comunidad.

Planteo la inquietud porque a pesar de que en el inciso b) se alude a la construcción de viviendas en pequeñas localidades —concepto muy ambiguo, a mi juicio, a la hora de definir o ampliar el inciso anterior— no queda claro cómo el Estado va a garantizar que se cumpla el cometido del inciso a).

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Sánchez. — Señor presidente: en el mismo sentido que los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra quiero reiterar que la diferencia que están planteando los integrantes de mi bancada tiene que ver con lo siguiente. Cuando comenzaron a aparecer los préstamos en dólares a partir del plan de convertibilidad, en un primer momento se aplicaron tasas muy elevadas, incluso alejadas de los niveles internacionales, pues se llegó a aplicar el 22 por ciento anual, cuando en los Estados Unidos la tasa llegaba al 8 por ciento anual.

Recién cuando el Banco Hipotecario Nacional comenzó a otorgar créditos en pesos a tasas más bajas y a más largo plazo los bancos privados mejoraron su oferta.

En la actualidad, ofrecen créditos a diez años de plazo con tasas que van del 14 al 17 por ciento anual. Pero para acceder a esos créditos lo que debe ganar mensualmente el interesado no debe ser inferior a los 1.500 pesos.

Cuando el señor diputado González Gaviola pide que se garanticen los créditos a otorgarse a los sectores medios y bajos es porque no es cierto que en diez o quince años se vaya a resolver el problema del déficit habitacional en nuestro país, porque a mayor desocupación y menor crecimiento esto es absolutamente imposible de lograr. No lo digo yo a la bancada del Frepaso; la propia Subsecretaría de Vivienda en 1995 decía claramente que los hogares que tenían déficit habitacional eran 3.039.018, y de esta cifra el 90 por ciento correspondía a los hogares de menores ingresos. Este mismo organismo señalaba que 1.032.292 hogares eran del sector medio, y que 1.555.600 unidades correspondían al sector bajo. Además, considerando los 1.500 pesos a los que podría tener acceso el núcleo familiar de los sectores de nivel medio, sólo existen en la Argentina 451.000 hogares. Por lo tanto, si no se acepta la modificación estamos señalando no sólo no se va a resolver el problema habitacional en diez o quince años sino que se va a agravar aún más. En este aspecto,

es imprescindible que la bancada oficialista no sea contradictoria respecto de los incisos a) y b) de este artículo, porque de lo contrario estará negando la posibilidad a que los sectores más castigados de nuestra sociedad puedan acceder a una vivienda única y necesaria.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: no puedo analizar las modificaciones propuestas en forma unipersonal pues no tenga tantas facultades. Por eso estoy haciendo las consultas del caso y seguidamente pasaré a responder las inquietudes.

La observación del señor diputado Bravo es procedente, aunque está contemplada dentro de las modificaciones propuestas por la comisión en lo que respecta a la subdivisión del inciso b) en b) y c), y que obran en poder de la Presidencia y de los señores diputados.

En cuanto a las demás observaciones formuladas, el plazo de diez años que está estipulado en la norma se refiere a las condiciones que fije el Poder Ejecutivo. Después de ese lapso el comprador privado puede modificar la denominación que haya fijado el Poder Ejecutivo en su participación en la sociedad anónima, que constituye un acto previo donde se van a fijar los estatutos de la sociedad, porque va a ser una empresa totalmente privada a excepción de la acción de oro que va a retener el Estado para cumplir con las funciones esenciales que figuran en el artículo 21.

Las funciones cuya desaparición preocupa a los señores diputados están contempladas en los puntos 1, 2, 3 y 4 del inciso a) del artículo 21. Queda resguardado el objeto social del banco que no puede ser modificado sin el voto afirmativo de las acciones que mantenga el Estado o en su defecto la acción de oro, de la cual no puede desprenderse sin una ley del Congreso de la Nación.

Las modificaciones propuestas por la comisión son las siguientes: el segundo párrafo del inciso b) debe separarse, quedando como inciso c). Dicho inciso termina donde dice: "...ley 24.626."

Luego, a partir de "Vencido el plazo..." comienza el tercer párrafo. Al final de este párrafo, donde dice: "...que tenga por objeto específico el otorgamiento de seguros.", debe decir: "...que tenga por objeto el otorgamiento de seguros."

Sr. Negri. — Falta que se aclare cuál es el nombre.

Sr. Presidente (López Arias). — Para la Presidencia queda absolutamente claro que el nombre es el de Banco Hipotecario Nacional S.A.

Sr. Suárez. — Esta es una cuestión contemplada en un artículo que ya se votó.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 17, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Sr. González Caviola. — Señor presidente: solicito que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar nominalmente el artículo 17 con las modificaciones propuestas.

— Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 132 señores diputados presentes, han votado 96 por la afirmativa y 27 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha computado el voto de 2 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: formulo moción de reconsideración del artículo 16, respecto del cual tenemos que lograr una decisión unánime ya que se trata de un punto en el que no puede haber disidencias. No podemos dejar que un banco privatizado se llame Banco Hipotecario Nacional Sociedad Anónima. No podemos privatizar el nombre de la Nación Argentina. Está en juego un símbolo nacional, algo que no puede ser privatizado. La institución deberá llamarse Banco Hipotecario Sociedad Anónima.

Debemos darle a este pronunciamiento la entidad que le corresponde y, si es necesario, extendernos todo el tiempo que sea necesario para considerar qué implica la Nación Argentina, la soberanía nacional o el uso de este nombre. Si esto es necesario, hagámoslo, pero creo que es algo que no puede pasar inadvertido ni quedar sin respuesta por la duda del presidente de la comisión o la falta de una contestación clara.

No es posible ceder el nombre nacional a una banca privada. Lo que se está haciendo va a tener consecuencias irreparables no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el de nuestra identidad nacional.

Por lo expuesto, solicito la reconsideración del artículo 16, ampliándose la discusión si es necesario. Si existen argumentos a favor de mantener el nombre, quisiera conocerlos en profundidad.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Domínguez. — Señor presidente: quisiera pedir a mi bloque la reconsideración de este tema. Estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear la señora diputada Zuccardi. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. — Señor presidente: comparto el planteo formulado por la señora diputada Zuccardi y apoyado por la señora diputada Domínguez. Efectivamente, pienso que no corresponde seguir manteniendo el nombre nacional. Tenemos que seguir el ejemplo de algunos países que hicieron su reconversión y dejaron de usar el nombre anterior, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil.

Por otro lado, ya hemos privatizado varios bancos de provincia y al momento de hacerlo se les ha quitado el nombre de "provincial". En Corrientes, por ejemplo, se privatizó el Banco de la Provincia de Corrientes, que quedó denominado Banco de Corrientes S.A.

Este ejemplo de la banca provincial debería ser tomado para el caso del Banco Hipotecario Nacional, porque de lo contrario se mantendría una ficción que no corresponde.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: en el momento de tratarse el artículo sostuvimos que el banco privatizado no podía tener el carácter de nacional. En el calor del debate, en la urgencia por concluir con el tratamiento y en la preocupación por lograr el quórum quedó nuestra inquietud, que no fue recogida por la bancada oficialista. Pero como nada le resta a las necesidades del bloque Justicialista, y sí mucho a la Nación Argentina, les solicito que recojan esta sugerencia de corrección.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Macedo. — Señor presidente: además de los fundamentos ya dados hay una cuestión trascendente, toda vez que el término "nacional" podría presumir solvencia o, de alguna manera, pertenencia y responsabilidad del Estado. Por lo tanto, adhiero a la reconsideración formulada.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Alvarez Echagüe. — Señor presidente: coincido con la propuesta de la señora diputada por Mendoza y apelo a la memoria de los juristas que existen en esta Cámara.

Si mal no recuerdo creo que hay una ley vigente, dictada durante el gobierno del general Perón, que prohíbe el uso del aditamento "nacional" a cualquier empresa que no pertenezca al Estado. Creo que esta ley está vigente y que no ha sido derogada. Puedo asegurarlo, pero es posible que algunos de los diputados lo recuerden, no obstante lo cual podríamos hacer la consulta pertinente a la Dirección de Información Parlamentaria.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Sat. — Señor presidente: los señores diputados Gabrielli, Bordin y quien les habla solicitan al presidente de la Comisión de Vivienda que modifique el artículo en la forma expresada por los demás señores diputados, a pesar de que dejamos en claro que votaremos lo que el bloque disponga.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: creo que a veces hay que reconocer los errores.

El artículo 35 de la Constitución Nacional dice: "Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina; Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras 'Nación Argentina' en la formación y sanción de las leyes".

Creo que no se puede dejar el apelativo "nacional", ya que sería inconstitucional.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Señor presidente: la razón por la que el Banco Hipotecario Nacional podía conservar su nombre por diez años estaba basada en la permanencia de acciones del Estado, con derecho a veto, preservándose la función establecida en el capítulo correspondiente. No obstante ello, también son de peso las argumentaciones que aquí han sido esgrimidas. Esto también despierta susceptibilidades. La Banca Nacional del Lavoro es privada pero los italianos no dicen nada.

La Comisión acepta la modificación propuesta en el sentido de que la denominación sea: "Banco Hipotecario Sociedad Anónima". (Aplausos.)

Sra. Zuccardi. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: dado el carácter del tema en discusión y considerando que en este aspecto habremos de sentar un precedente, solicito que en lo posible la modificación propuesta sea aprobada por unanimidad, que los diputados que piensan abstenerse soliciten la correspondiente autorización a la Presidencia para hacerlo, y que la votación se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (López Arias). — Su pedido no está suficientemente apoyado, señora diputada.

Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 16 formulada por la señora diputada por Mendoza. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar nuevamente el artículo 16.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: por una razón de economía procesal, la modificación propuesta en el sentido de que en reemplazo de la expresión "Banco Hipotecario Nacional S.A." se utilice el término "Banco Hipotecario S.A." debería ser introducida tanto en los artículos que ya hemos aprobado como en el resto de los artículos del proyecto de ley que aún no han sido considerados. De esta manera haríamos la corrección de una sola vez.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 16 con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, en el entendimiento de que el pronunciamiento afirmativo del cuerpo importará la corrección de la citada denominación en todos aquellos artículos del proyecto de ley en que figuren las expresiones "Banco Hipotecario Nacional S.A." o "Banco Hipotecario de la Nación S.A."

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 18.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — La comisión propone las siguientes modificaciones: en el inciso a) se suprime el final del párrafo, que dice: "...el que deberá conservar como mínimo una acción". Este texto se reubicará en el artículo 20.

En el inciso b), después de "serán de libre transferencia" debe ir un punto y no una coma. Y la última parte del inciso debe sustituirse por el siguiente texto: "En el caso de producirse transferencias a titulares que no fuesen sujetos del programa referido, las acciones se convertirán automáticamente en acciones clase D;".

En el inciso d), donde dice "...Las personas físicas o jurídicas no podrán ser propietarias de más del ...", debe decir: "Cada persona físico o jurídica no podrá ser propietaria de más del ...".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: esperanzado por este ánimo del oficialismo de escuchar propuestas razonables, me atreveré a solicitar una modificación en el artículo 18.

Uno de los problemas que estamos viviendo en el país es el de la concentración. En la clasificación de acciones contenida en el artículo 18 percibo que existe un espíritu anticoncentrador. A los efectos de que esto sea mucho más claro, propongo que el inciso d) quede redactado de la siguiente manera: "Clase D: las acciones transferidas en dominio perfecto al capital privado. Las personas físicas o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico no podrán ser propietarias de más del cinco por ciento (5%) del capital social." Es decir que solicitamos la inclusión de los términos "que pertenezcan a un mismo grupo económico" para garantizar que el espíritu de dispersión de las acciones sea efectivo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Suárez. — Ese es el espíritu con el que nosotros interpretábamos ese inciso, pero si es necesaria una mayor precisión la comisión acepta la incorporación.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: en el inciso b) existe un preacuerdo por el que se establece que el porcentaje de propiedad participada de los trabajadores se eleva a un 5 por ciento del capital.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Qué dice la comisión?

Sr. Suárez. — Señor presidente: es correcto lo señalado por el señor diputado Castillo y en las modificaciones al dictamen original propuestas por esta comisión se especifica en el inciso b) que en materia de propiedad participada, en lugar del 3 por ciento del capital social debe decir el 5 por ciento.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Storani. — Señor presidente: teniendo en cuenta que el proyecto fue aprobado en general y varios artículos, en particular, y dado lo avanzado de la hora y que faltan considerar todavía muchos artículos, solicito que se tenga en cuenta la posibilidad de pasar a cuarto intermedio para que esta sesión continúe en otro momento y en mejores condiciones. Me parece que hemos llegado a un punto en que no están dadas las condiciones para poder seguir sesionando.

No quiero hacer una moción concreta porque significaría romper las reglas de juego, pero sí quiero proponer que se pase a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: es cierto que la Cámara ha hecho un esfuerzo importante, dentro de lo convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria. No debemos olvidar que en esa reunión acordamos considerar los capítulos II y III artículo por artículo, mientras que los dos capítulos restantes los íbamos a tratar en forma conjunta porque en términos generales ofrecen menor grado de conflicto.

En este sentido pediría al resto de los bloques políticos que sigamos avanzando, mientras conseguimos el correspondiente quórum. No nos parece que sea demasiado avanzada la hora y entendemos que podemos seguir trabajando durante un tiempo más ya que en unos cuarenta y cinco minutos, con buena voluntad —no tengo dudas de que existe—, podremos terminar con la consideración de la norma en particular.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia entiende que, en caso de haber consenso, podríamos avanzar en la discusión de otros artículos mientras se logre formar quórum.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vitar. — Señor presidente: apoyo la moción formulada por el señor diputado Storani porque considero imposible que reunamos quórum...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia advierte al señor diputado por Tucumán que el señor diputado Storani fue muy claro al decir que se trataba de una propuesta y no de una moción.

Sr. Vitar. — Señor presidente: entiendo que lo más sensato sería continuar la próxima semana a fin de realizar un tratamiento ordenado

del resto del articulado porque, si no, ante cada votación tendremos que esperar por lo menos media hora hasta reunir quórum.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia advierte a la Honorable Cámara que su intención es que en breves instantes se proceda al pase de lista; no obstante, se me ha informado que hay 127 señores diputados presentes en la casa, con lo cual resultaría imposible continuar sesionando. Asimismo aclaro que luego del pase de lista y en caso de que no haya quórum, se pasará a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Polo. — Señor presidente: ¿por qué no debatimos los artículos que siguen mientras esperamos lograr el quórum?

Sr. Presidente (López Arias). — Esa propuesta la realizó el señor diputado Matzkin y no hubo consenso de los otros bloques.

Se va a continuar llamando para votar.

—Se continúa llamando.

—Luego de algunos minutos:

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 18, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 19.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — La comisión propone dos modificaciones. Luego de donde dice "...a adquirentes privados...", debe agregarse: "El Estado nacional deberá conservar la propiedad de como mínimo una acción de esta clase".

A continuación, donde dice: "...La venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. estará a cargo del Estado nacional", debe decir: "...La venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. estará a cargo del Banco Hipotecario Nacional".

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el artículo 20 con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: deseo proponer una modificación al inciso b) del artículo 21. Mientras el Estado nacional sea propietario de la acción de oro, tiene derecho a aprobar los estados contables, lo que no puede estar restringido al mantenimiento de la mayoría del capital social.

Me parece una cesión de facultades que no tiene ningún sentido. Sería desprendernos de un instrumento de control que resultaría saludable que se mantuviese en poder del Estado nacional. En consecuencia propongo que el inciso b) diga: "El derecho del Estado nacional a aprobar los estados contables anuales". Allí termina el párrafo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso. — Señor presidente: en oportunidad del tratamiento del artículo 20 habíamos acordado que se agregara que la acción que conserva el Estado es de clase A. Desearía saber si ello ha quedado incorporado a dicho artículo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Suárez. — Señor presidente: es correcto lo que apunta el señor diputado Fragoso.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso. — En consecuencia, formulo moción de reconsideración del artículo 20 a fin de poder votar la modificación propuesta.

Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde que la Cámara se pronuncie sobre la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por el Chaco, pero no hay número para votar.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: realmente es inadmisibles la falta de responsabilidad de dieciocho o veinte diputados que permanentemente se retiran del recinto. Para quienes estamos en nuestras bancas desde el comienzo de esta reunión, esta actitud es inaguantable. En consecuencia, solicito a la Presidencia que consulte con el resto de los bloques respecto de la posibilidad de pasar a cuarto intermedio para luego a las 12, oportunidad en la que se reanudaría esta sesión. Ciertamente no falta mucho para terminar el debate en particular de esta norma; si existiera la voluntad política se podría finalizar el trámite en dos o tres horas de trabajo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Storani. — Señor presidente: si tenemos en cuenta que la discusión respecto de un artículo que prácticamente no motivaba disidencia insu-
mió veinte minutos de debate con motivo del

pedido de aclaración de un diputado, resulta claro que es imposible continuar con este ritmo del tratamiento de este capítulo que, como se ha acordado, se discute artículo por artículo.

También es cierto que sería irresponsable de nuestra parte comprometernos a estar presentes luego a las 12 sin haber tenido la posibilidad de reunir al bloque, y en especial considerando que muchos legisladores viajan al interior en el día de hoy. Por ello, estimamos que lo más atinado sería acordar que se pase a cuarto intermedio hasta la próxima semana, obviamente con el compromiso de concluir el tratamiento de esta norma y confeccionar un nuevo orden del día.

Sr. Presidente (López Arias). — Si me permiten, señores diputados, en uso de sus facultades la Presidencia invita al cuerpo a pasar a cuarto intermedio para luego a las 12. En caso de que no se llegara a reunir quórum se prorrogaría al cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

Invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio para luego a las 12.

—Se pasa a cuarto intermedio a la 1 y 30 del día 8.

FULVIO F. RAMOS
Director del Cuerpo de Taquígrafos.